



Asamblea General

Distr. general
19 de diciembre de 2024
Español
Original: inglés

Septuagésimo noveno período de sesiones
Tema 34 del programa
La situación en Oriente Medio

Opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas que se derivan de las políticas y prácticas de Israel en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y de la ilegalidad de la presencia continuada de Israel en el Territorio Palestino Ocupado

Informe del Secretario General

I. Introducción

1. Este informe se presenta de conformidad con la resolución [ES-10/24](#) de la Asamblea General, en la que la Asamblea solicitó al Secretario General que le presentara un informe sobre la aplicación de dicha resolución en el plazo de tres meses desde su aprobación, en particular sobre las medidas adoptadas por Israel, otros Estados y las organizaciones internacionales para la aplicación de sus disposiciones o en caso de que estas se incumplieran.

II. Antecedentes y metodología

2. El 30 de diciembre de 2022, la Asamblea General aprobó la resolución [77/247](#), en la que decidió, de conformidad con el Artículo 96 de la Carta de las Naciones Unidas, solicitar a la Corte Internacional de Justicia que, en cumplimiento del Artículo 65 de su Estatuto, emitiera una opinión consultiva sobre las siguientes cuestiones:

a) ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan de que Israel continúe violando el derecho del pueblo palestino a la libre determinación, de sus prolongados actos de ocupación, asentamiento y anexión del territorio palestino ocupado desde 1967, incluidas las medidas destinadas a alterar la composición demográfica, el carácter y el estatuto de la Ciudad Santa de Jerusalén, y de la aprobación por Israel de legislación y medidas discriminatorias conexas?



b) ¿Cómo afectan las políticas y prácticas de Israel mencionadas anteriormente al estatuto jurídico de la ocupación y qué consecuencias jurídicas se derivan de ese estatuto para todos los Estados y para las Naciones Unidas?

3. El 19 de julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia dictó su opinión consultiva sobre las consecuencias jurídicas que se derivan de las políticas y prácticas de Israel en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y de la ilegalidad de la presencia continuada de Israel en el Territorio Palestino Ocupado. La Corte concluyó, entre otras cosas, que “la presencia continuada del Estado de Israel en el Territorio Palestino Ocupado es ilegal” y que “el Estado de Israel tiene la obligación de poner fin a su presencia ilegal en el Territorio Palestino Ocupado lo antes posible”.

4. El 18 de septiembre de 2024, la Asamblea General aprobó la resolución [ES-10/24](#), en la que, entre otras cosas, acogía con beneplácito la opinión consultiva y hacía varias peticiones y solicitudes a los Estados Miembros, los observadores y las organizaciones internacionales, incluidas las Naciones Unidas. Los párrafos de la parte dispositiva de la resolución incluyen lo siguiente: la exigencia de que Israel ponga fin sin demora a su presencia ilegal en el Territorio Palestino Ocupado, que constituye un hecho ilícito de carácter continuado que genera su responsabilidad internacional, y que lo haga a más tardar 12 meses después de la aprobación de esa resolución, y que cumpla sin demora todas las obligaciones que le incumben en virtud del derecho internacional, en particular las establecidas por la Corte Internacional de Justicia (resolución de la Asamblea [ES-10/24](#), párrs. 2 y 3); una exhortación a todos los Estados para que cumplan las obligaciones que les incumben en virtud del derecho internacional, entre otras las que se contemplan en la opinión consultiva (*ibid.*, párr. 4): una exhortación a las organizaciones internacionales, incluidas las Naciones Unidas, y a las organizaciones regionales para que, entre otras cosas, no reconozcan como legal la situación derivada de la presencia ilegal de Israel en el Territorio Palestino Ocupado y para que, en sus relaciones pertinentes, establezcan una distinción entre Israel y el Territorio Palestino Ocupado y para que no reconozcan ninguna de las medidas adoptadas por Israel para explotar los recursos naturales del Territorio Palestino Ocupado o introducir cambios en la composición demográfica, el carácter geográfico o la estructura institucional del Territorio, y para que no cooperen con Israel o le presten asistencia alguna en la aplicación de esas medidas (*ibid.*, párr. 6); y una exhortación a las Naciones Unidas, y a sus órganos y organismos, para que respeten las determinaciones de la Corte Internacional de Justicia y actúen de forma coherente con ellas, incluso en relación con todos los mapas, declaraciones e informes pertinentes, así como en sus respectivos programas y acciones (*ibid.*, párr. 7). La Asamblea, en el párrafo 17 de la resolución [ES-10/24](#), solicitó al Secretario General que le presentara un informe sobre la aplicación de la resolución en el plazo de tres meses desde su aprobación.

5. El ámbito territorial del territorio palestino ocupado desde 1967 abarca la Ribera Occidental, incluida Jerusalén Oriental, y la Franja de Gaza. Los órganos y organismos de las Naciones Unidas se refieren a este territorio como Territorio Palestino Ocupado, aludiendo con frecuencia a sus diferentes elementos constitutivos, a saber, la Ribera Occidental o la Franja de Gaza, según el caso. En el presente informe se sigue la misma práctica. Sin embargo, como recordó la Corte Internacional de Justicia en su opinión consultiva, desde un punto de vista jurídico, “el Territorio Palestino Ocupado constituye una entidad territorial única, cuya unidad, contigüidad e integridad deben preservarse y respetarse”.

6. El 11 de octubre de 2024, el Secretario General envió una nota verbal a los Representantes Permanentes de todos los Estados Miembros, el Observador Permanente del Estado de Palestina y todos los observadores de la Asamblea General

en Nueva York, en la que señalaba a su atención las disposiciones pertinentes de la resolución y les solicitaba que enviaran información pertinente acerca de toda medida adoptada o prevista para su aplicación. Se recibieron respuestas de 32 Estados Miembros, el Estado de Palestina y dos organizaciones regionales: la Liga de los Estados Árabes y la Organización de Cooperación Islámica. Las respuestas de todos los Estados y organizaciones regionales se reproducen en los anexos I y II, respectivamente.

7. El 17 de octubre de 2024, el Secretario General dirigió una comunicación a las jefaturas de las entidades de las Naciones Unidas y los organismos especializados y organizaciones conexas invitándolas a contribuir a la preparación del presente informe, incluso mediante la presentación de cualquier información relativa a la aplicación de las disposiciones pertinentes de la resolución [ES-10/24](#) por la entidad de las Naciones Unidas o el organismo especializado o la organización conexas correspondiente. Las entidades de las Naciones Unidas y los organismos especializados y organizaciones conexas consultados se enumeran en el anexo III.

8. El 16 de octubre, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) envió una nota verbal a las Misiones Permanentes de todos los Estados Miembros, el Observador Permanente del Estado de Palestina y todos los observadores de la Asamblea General en Ginebra invitándolos a que compartieran sus opiniones sobre las propuestas para el establecimiento de un mecanismo de seguimiento de las violaciones del artículo 3 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial cometidas por Israel y señaladas por la Corte Internacional de Justicia en su opinión consultiva, de conformidad con el párrafo 14 de la resolución [ES-10/14](#). Se recibieron un total de seis respuestas, que se reproducen en el anexo IV del presente informe.

III. Estados Miembros y observadores de la Asamblea General

9. Las respuestas recibidas de 32 Estados Miembros y observadores hacen referencia a varias medidas económicas, políticas y jurídicas que están emprendiendo, entre otras cosas con miras a poner fin a la ocupación ilegal por Israel del territorio palestino ocupado desde 1967, que abarca la Ribera Occidental, Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza, y a apoyar los derechos y la soberanía palestinos, tal como se establece en la opinión consultiva. A continuación se enumeran algunas de ellas.

10. Entre las medidas económicas mencionadas en las respuestas de los Estados Miembros y los observadores figuran las siguientes:

- Distinguir entre las mercancías originarias de Israel y las procedentes de los asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado, incluso mediante el etiquetado diferenciado obligatorio de los productos
- Publicar orientaciones para empresas y ciudadanos sobre los riesgos jurídicos, financieros y para la reputación asociados al mantenimiento de relaciones comerciales con los asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado
- Garantizar que las empresas registradas en las correspondientes bases de datos de empresas de los Estados Miembros no figuren en la base de datos elaborada por la OACDH de conformidad con las resoluciones [31/36](#) y [53/25](#) del Consejo de Derechos Humanos
- Crear una base de datos de todas las empresas implicadas en actividades específicas relacionadas con los asentamientos en el Territorio Palestino Ocupado

- Imponer sanciones a las empresas relacionadas con los asentamientos, incluida la prohibición de productos procedentes de los asentamientos israelíes
- Incluir cláusulas territoriales en los acuerdos bilaterales, entre ellos los acuerdos comerciales y de inversión, que establezcan claramente que el territorio del Estado de Israel no se extiende a ninguna parte del Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental
- Imponer restricciones comerciales bilaterales a Israel para poner fin a su presencia en el Territorio Palestino Ocupado
- Apoyar a las instituciones, empresas y comunidades palestinas en el Territorio Palestino Ocupado para fomentar los medios de subsistencia, construir infraestructuras públicas, mejorar la educación y promover otras iniciativas de desarrollo sostenible de los palestinos para sus comunidades.

11. Entre las medidas diplomáticas mencionadas en las respuestas de los Estados Miembros y los observadores figuran las siguientes:

- Reconocer y establecer relaciones bilaterales plenas con el Estado de Palestina
- Apoyar la solicitud de incorporación del Estado de Palestina como Miembro de las Naciones Unidas
- Mantener representaciones diplomáticas separadas para Israel y el Estado de Palestina y gestionar las relaciones diplomáticas por separado con funcionarios israelíes y palestinos, respectivamente
- Imponer sanciones o medidas restrictivas, como la congelación de activos y la prohibición de viajar, a los colonos israelíes “extremistas” o las organizaciones que los representan
- Examinar las solicitudes de licencias de exportación de armas, municiones y equipo conexas que puedan utilizarse en el Territorio Palestino Ocupado, incluso sobre la base de las disposiciones pertinentes del Tratado sobre el Comercio de Armas, y restringir en consecuencia las transferencias de armas a Israel
- Apoyar la adopción de sanciones coordinadas a escala internacional contra los colonos israelíes “extremistas” y la formación de un mecanismo especial para supervisar y aplicar las sanciones que procedan a las personas, Estados y entidades que figuren en la correspondiente lista
- Iniciar o unirse a iniciativas internacionales en apoyo de una paz justa y global, como la Alianza Global para Implementar la Solución Biestatal, lanzada durante la semana de alto nivel de la Asamblea General en su septuagésimo noveno periodo de sesiones, y la carta conjunta en la que se pide el cese de las transferencias de armas a Israel enviada por más de 50 Estados Miembros y organizaciones regionales al Secretario General el 1 de noviembre de 2024.

12. Entre las medidas jurídicas para exigir responsabilidades por las violaciones del derecho internacional mencionadas en las respuestas recibidas de los Estados Miembros y los observadores figuran las siguientes:

- Presentar alegaciones escritas u orales en apoyo de los procedimientos judiciales en curso para exigir responsabilidades por las violaciones del derecho internacional en el Territorio Palestino Ocupado, en particular ante la Corte Internacional de Justicia, y garantizar la cooperación con la Corte Penal Internacional
- Apoyar el establecimiento de un “registro internacional de daños”, tal como se prevé en el párrafo 10 de la resolución ES-10/24

- Abogar por la reparación de los daños, pérdidas o perjuicios derivados de los hechos internacionalmente ilícitos de Israel en el Territorio Palestino Ocupado
- Reforzar los marcos legislativos para apoyar la libre determinación palestina y emprender acciones legales por las violaciones del derecho internacional, incluidos los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, a través de tribunales nacionales e internacionales.

IV. Entidades de las Naciones Unidas y organismos especializados

13. El 11 de octubre de 2024, la Secretaría envió una comunicación a las entidades de las Naciones Unidas y los organismos especializados y organizaciones conexas pertinentes por la que los informaba de la aprobación de la resolución [ES-10/24](#) y señalaba a su atención la aplicación de la resolución de conformidad con los párrafos pertinentes de su parte dispositiva. En la comunicación, la Secretaría pedía que todas las entidades de las Naciones Unidas revisaran los programas, acciones y prácticas pertinentes y realizaran los ajustes necesarios para garantizar la coherencia con las disposiciones pertinentes de la resolución [ES-10/24](#), especialmente sus párrafos 6, 7 y 16. Las entidades de las Naciones Unidas están examinando sus respectivos programas, acciones y prácticas al respecto, en particular la terminología, los mapas, las declaraciones y los informes pertinentes, así como, entre otras cosas, las políticas y prácticas en materia de adquisiciones.

14. Los organismos especializados de las Naciones Unidas y las organizaciones conexas se rigen por órganos intergubernamentales independientes y funcionan de forma autónoma con respecto a las entidades de las Naciones Unidas. Algunos han señalado, entre otras cosas, que en sus respectivos programas y actividades no reconocen la legalidad de la presencia de Israel en el Territorio Palestino Ocupado y que se están estudiando las medidas pertinentes en relación con la aplicación de la resolución [ES-10/24](#). El Estado de Palestina es miembro y parte de los instrumentos constitutivos de algunos organismos especializados (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial) y organizaciones conexas (Corte Penal Internacional, Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, Tribunal Internacional del Derecho del Mar y Organización para la Prohibición de las Armas Químicas).

V. Conferencias internacionales

15. En el párrafo 12 de la resolución [ES-10/24](#), la Asamblea General pidió que se convocara una Conferencia de las Altas Partes Contratantes en el Cuarto Convenio de Ginebra relativo a la Protección debida a las Personas Civiles en Tiempo de Guerra a fin de examinar medidas para hacer cumplir el Convenio en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental. A este respecto, la Asamblea invitó al Gobierno de Suiza, en su calidad de depositario de los Convenios de Ginebra, a convocar dicha conferencia en un plazo de seis meses desde la aprobación de la resolución. El Gobierno de Suiza ha aceptado la invitación de la Asamblea para organizar dicha conferencia en el plazo previsto y está celebrando consultas con las Altas Partes Contratantes, con miras a determinar las medidas preparatorias necesarias. El Gobierno de Suiza anunciará a su debido tiempo la fecha y el lugar de la conferencia.

16. En el párrafo 13 de la resolución [ES-10/24](#), la Asamblea General decidió convocar durante su septuagésimo noveno período de sesiones una conferencia internacional bajo los auspicios de la Asamblea para la aplicación de las resoluciones

de las Naciones Unidas relativas a la cuestión de Palestina y la solución biestatal con el fin de lograr una paz justa, duradera y general en Oriente Medio. La Asamblea decidió las modalidades para la convocatoria de la conferencia en su resolución 79/81, de 3 de diciembre de 2024. La conferencia se denominará “Conferencia Internacional de Alto Nivel para el Arreglo Pacífico de la Cuestión de Palestina y la Implementación de la Solución Biestatal” y se celebrará en junio de 2025 en Nueva York. Irá precedida de una o más reuniones preparatorias, según sea necesario. La conferencia estará copresidida por la Arabia Saudita y Francia.

VI. Propuestas para el establecimiento de un mecanismo de seguimiento de las violaciones del artículo 3 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial

17. En el párrafo 14 de la resolución [ES-10/24](#), la Asamblea General solicitó al Secretario General que, en consulta con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y los Estados Miembros con experiencia y conocimientos pertinentes, presentara propuestas para el establecimiento de un mecanismo de seguimiento de las violaciones del artículo 3 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial cometidas por Israel y señaladas por la Corte Internacional de Justicia en su opinión consultiva.

18. Sobre la base de las respuestas de los Estados Miembros y los observadores, reproducidas en el anexo IV relativo a las propuestas para el establecimiento de un mecanismo de seguimiento de las violaciones por Israel del artículo 3 de la Convención, para dicho mecanismo existirían las dos opciones siguientes:

a) Establecer un mecanismo autónomo, basado en el modelo del Comité Especial de las Naciones Unidas contra el *Apartheid* establecido por la Asamblea General en su resolución [1761 \(XVII\)](#) y reforzado en resoluciones posteriores, en particular la resolución [2671 \(XXV\)](#). Ese mecanismo estaría integrado por Estados Miembros, y su composición se basaría en el principio de distribución geográfica equitativa;

b) Otorgar un mandato a la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel, establecida por el Consejo de Derechos Humanos en su resolución [S-30/1](#) para que lleve a cabo el seguimiento que se indica en el párrafo 14 de la resolución [ES-10/24](#) de la Asamblea General. La Comisión de Investigación está compuesta por expertos independientes, informa anualmente a la Asamblea y tiene el mandato, entre otras cosas, de investigar “todas las causas que subyacen en las recurrentes tensiones, la inestabilidad y la prolongación del conflicto, incluidas *la discriminación y la represión sistemáticas basadas en la identidad nacional, étnica, racial o religiosa*”¹, y de formular recomendaciones, en particular sobre medidas relacionadas con la rendición de cuentas y sobre las medidas que deben adoptar terceros Estados². En marzo de 2024, el Consejo de Derechos Humanos aprobó dos resoluciones en las que solicitaba a la Comisión que analizara elementos adicionales específicos e informara al respecto³.

¹ Resolución [S-30/1](#) del Consejo de Derechos Humanos, párr. 1 (sin cursiva en el original).

² Más recientemente, la Comisión de Investigación publicó un análisis jurídico y recomendaciones sobre la aplicación de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (véase www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/coiopt/2024-10-18-COI-position-paper_co-israel.pdf).

³ Véanse las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos [55/32](#), párr. 14, y [55/28](#), párr. 43.

VII. Conclusiones y observaciones

19. El logro de una paz justa y general en Oriente Medio depende de que se ponga fin a la prolongada ocupación israelí y se resuelva el conflicto israelo-palestino. El progreso hacia la paz debe abordar y hacer plenamente efectivos los derechos fundamentales y legítimos del pueblo palestino, incluido el derecho a la libre determinación. También debe abordar las legítimas preocupaciones de seguridad de Israel y del Estado de Palestina. Acojo con satisfacción la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas que se derivan de las políticas y prácticas de Israel en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental. También acojo con satisfacción el compromiso sostenido de la Asamblea General en este asunto, que está contribuyendo de forma significativa a avanzar hacia medidas tangibles e irreversibles para poner fin a la ocupación lo antes posible y lograr una solución biestatal viable.

20. Agradezco las contribuciones al presente informe remitidas por más de 30 Estados, la Liga de los Estados Árabes y la Organización de Cooperación Islámica, sobre todo teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo para la elaboración del informe. En varios casos se pidió más tiempo para recopilar y presentar las contribuciones, peticiones que, lamentablemente, no pudieron atenderse debido al plazo establecido para el informe. Las respuestas reflejan el apoyo a las conclusiones expuestas por la Corte Internacional de Justicia en su opinión consultiva y a la aplicación de la resolución [ES-10/24](#) de la Asamblea General, incluida la afirmación de que la presencia continuada de Israel en el Territorio Palestino Ocupado es ilegal y debe terminar lo antes posible. En la resolución [ES-10/24](#), la Asamblea exigió a Israel que pusiera fin a su presencia ilegal a más tardar 12 meses después de la aprobación de dicha resolución, que tuvo lugar el 18 de septiembre de 2024. Insto a Israel a que atienda las demandas de la Asamblea de cumplir sin demora todas las obligaciones jurídicas que le incumben en virtud del derecho internacional, en particular las establecidas por la Corte Internacional de Justicia.

21. Las políticas y prácticas israelíes, en particular la incesante expansión de los asentamientos israelíes ilegales, están alterando sistemáticamente el paisaje y la demografía del Territorio Palestino Ocupado, creando una dinámica peligrosa para la seguridad y la prosperidad de israelíes y palestinos. Estas políticas y prácticas suponen una amenaza existencial para la solución de biestatal. La expansión de los asentamientos, la violencia del Estado y de los colonos, y las medidas adoptadas recientemente por Israel en el ámbito administrativo y para declarar tierras del Estado a gran escala están fragmentando de manera fundamental el paisaje del Territorio Palestino Ocupado y afianzando aún más la ocupación ilegal por parte de Israel. Hago un llamamiento a todos los Estados Miembros para que contribuyan a detener y revertir esta trayectoria alarmante.

22. Las respuestas recibidas de los Estados Miembros para el presente informe reflejan su firme compromiso de apoyar los derechos y la soberanía palestinos, y muchas de ellas hacen referencia a varias herramientas políticas, diplomáticas, económicas y jurídicas que podrían facilitar el fin de la ocupación ilegal por parte de Israel y garantizar la rendición de cuentas por las violaciones del derecho internacional cometidas por Israel en el Territorio Palestino Ocupado. Sobre algunas de estas medidas proporciono información periódica. Por ejemplo, mis informes trimestrales sobre la aplicación de la resolución [2334 \(2016\)](#) del Consejo de Seguridad incluyen novedades sobre las políticas de los Estados Miembros para distinguir, en sus relaciones pertinentes, entre el territorio del Estado de Israel y los territorios ocupados desde 1967. En esos mismos informes, también he destacado las sanciones impuestas a los colonos israelíes violentos, los procedimientos judiciales

pertinentes en tribunales internacionales y el establecimiento de relaciones diplomáticas con el Estado de Palestina o con el Estado de Israel.

23. Las respuestas de los Estados Miembros y los observadores también ilustran su compromiso colectivo con la paz, la justicia y la rendición de cuentas. Entre las medidas adoptadas en este sentido se incluyen el inicio o el apoyo de procedimientos judiciales en tribunales internacionales, la puesta en marcha de iniciativas globales y actividades colectivas de promoción encaminadas a poner fin a la ocupación y lograr una solución biestatal viable. A este respecto, se valora positivamente y es digna de encomio la labor de promoción que realizan la Liga de los Estados Árabes y la Organización de Cooperación Islámica, en particular a través del comité ministerial de la Cumbre Extraordinaria Conjunta Árabe Islámica. La Alianza Global para Implementar la Solución Biestatal, puesta en marcha durante la semana de alto nivel de la Asamblea General en su septuagésimo noveno periodo de sesiones, es también una iniciativa positiva importante. Aliento a los Estados Miembros y a las organizaciones regionales a que apoyen esas iniciativas hasta que se ponga fin a la presencia ilegal de Israel en el Territorio Palestino Ocupado y se logre una solución biestatal viable.

24. Reconozco que la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 19 de julio de 2024, que fue solicitada por la Asamblea General en diciembre de 2022, se emitió en un contexto drásticamente diferente: nueve meses después de los horribles ataques armados del 7 de octubre de 2023 que alteraron enormemente la dinámica para israelíes y palestinos. Urge adoptar medidas decisivas para garantizar un alto el fuego inmediato e incondicional en Gaza, que debería haberse producido hace mucho tiempo. Observo que, en respuesta a los niveles catastróficos de muerte y destrucción desatados en Gaza desde el 7 de octubre de 2023, ha habido cada vez más llamamientos de Estados Miembros y otras partes para que se suspenda la transferencia de armas, municiones y equipo conexo que Israel pueda estar utilizando en sus operaciones militares en el Territorio Palestino Ocupado y para que se restrinjan en consecuencia las transferencias de armas a Israel. Observo, en este contexto, que el 1 de noviembre recibí una carta de un grupo interregional de más de 50 Estados Miembros en la que se hacía un llamamiento a que “se tomen medidas inmediatas para detener el suministro o la transferencia de armas, municiones y equipo conexo a Israel, la Potencia ocupante, en todos los casos en que haya motivos razonables para sospechar que puedan utilizarse en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, como se estipula en la resolución [ES-10/24](#) de la Asamblea General”. Insto a los Estados Miembros a que garanticen que cualquier transferencia de armas a Israel sea conforme con sus obligaciones en virtud del derecho internacional, incluido el artículo 1 común de los cuatro Convenios de Ginebra y las disposiciones pertinentes del Tratado sobre el Comercio de Armas, según proceda.

25. Reitero mi condena enérgica de los horribles ataques del 7 de octubre perpetrados por Hamás y otros grupos armados palestinos en Israel y el hecho de que se siga reteniendo a más de 100 rehenes en Gaza. También, una vez más, condeno enérgica e inequívocamente la horrible matanza y mutilación de civiles palestinos como consecuencia de las implacables operaciones militares de Israel. Reitero mi llamamiento a la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes que quedan. Los palestinos detenidos de forma arbitraria en Israel deben ser liberados sin demora o detenidos por los motivos previstos en la ley y de conformidad con los procedimientos establecidos en ella. Hasta que se produzca su liberación, todos los rehenes deben recibir un trato humano y se les debe permitir recibir visitas y asistencia del Comité Internacional de la Cruz Roja. Todas las partes deben respetar el derecho internacional. Deben tomarse medidas adecuadas para garantizar la rendición de cuentas con arreglo al derecho internacional.

26. Israel, como Potencia ocupante, debe cumplir todas las obligaciones que le incumben en virtud del derecho internacional. Hago un llamamiento a Israel para que permita de inmediato el paso y la entrega de la asistencia humanitaria que se necesita desesperadamente en el Territorio Palestino Ocupado, en particular a gran escala en toda la Franja de Gaza. A este respecto, también recuerdo las medidas provisionales ordenadas a principios de este año por la Corte Internacional de Justicia en la causa relativa a la *Aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza (Sudáfrica c. Israel)*. He instado reiteradamente a Israel a que garantice la protección de la población palestina en todo el Territorio Palestino Ocupado y a que investigue y exija responsabilidades a los autores de todos los ataques. Entre ellos se encuentran los ataques mortales perpetrados por los colonos israelíes, a quienes rara vez se les exigen responsabilidades, incluso cuando dichos ataques se producen en las proximidades de las fuerzas de seguridad israelíes o con su apoyo. Tomo nota de los esfuerzos complementarios realizados por los Estados Miembros a este respecto, en particular del número cada vez mayor que ha empezado a imponer sanciones contra los colonos violentos y extremistas y las empresas relacionadas con ellos.

27. Observo que, en su opinión consultiva, la Corte Internacional de Justicia señaló que consideraba que “el régimen de restricciones generales impuesto por Israel a los palestinos en el Territorio Palestino Ocupado constituye una discriminación sistémica basada, entre otros motivos, en la raza, la religión o el origen étnico, en violación de los artículos 2, párrafo 1, y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 2, párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el artículo 2 de la Convención [Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial]”. La Corte observó además que “la legislación y las medidas de Israel imponen y sirven para mantener una separación casi total en la Ribera Occidental y Jerusalén Oriental entre las comunidades de colonos y las comunidades palestinas” y consideró “[p]or este motivo ... que la legislación y las medidas de Israel constituyen una violación del artículo 3 de la Convención [Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial]”. En el presente informe se ofrecen a la Asamblea General, para su consideración, dos propuestas para el establecimiento de un mecanismo de seguimiento de las violaciones del artículo 3 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, tal como solicitó la Asamblea en su resolución [ES-10/24](#).

28. Las entidades de las Naciones Unidas están examinando sus respectivos programas, políticas y prácticas con miras a la aplicación de la resolución [ES-10/24](#), también en lo que respecta a la terminología, los mapas, las declaraciones y los informes pertinentes, y realizando los ajustes pertinentes, según sea necesario, incluso en los informes del Secretario General. Las entidades de las Naciones Unidas realizarán otros ajustes, según proceda, a su debido tiempo. Insto a todos los organismos especializados de las Naciones Unidas y organizaciones conexas a que, de conformidad con sus respectivos mandatos y con sujeción a las decisiones de sus órganos rectores, introduzcan los ajustes necesarios en sus programas, políticas y prácticas pertinentes.

29. Las Naciones Unidas mantienen el firme compromiso de prestar apoyo para que se ponga fin a la ocupación ilegal del territorio palestino por Israel lo antes posible y de apoyar a palestinos e israelíes para que se resuelva el conflicto de conformidad con el derecho internacional, las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y los acuerdos bilaterales en aras del logro de la solución biestatal, con Israel y un Estado de Palestina plenamente independiente, democrático, contiguo y soberano, del que la Franja de Gaza forma parte indisoluble, que vivan uno junto al otro en paz y

seguridad dentro de fronteras seguras y reconocidas, sobre la base de las fronteras anteriores a 1967, con Jerusalén como capital de ambos Estados.

30. A tal fin, me comprometo a seguir apoyando la aplicación de la resolución [ES-10/24](#) y aguardo con interés la Conferencia Internacional de Alto Nivel que se celebrará en junio de 2025 bajo los auspicios de la Asamblea General, que tendrá como objetivo avanzar en la aplicación de las resoluciones de las Naciones Unidas relativas a la cuestión de Palestina y la solución biestatal con el fin de lograr una paz justa, duradera y general en Oriente Medio.

Anexo I**Respuestas recibidas de Estados****Índice**

	<i>Página</i>
Alemania	12
Arabia Saudita	13
Austria	13
Bahrein	14
Bélgica	15
Brasil	15
Cuba	19
Egipto	20
Eslovenia	23
Estado de Palestina	24
Federación de Rusia	33
Finlandia	33
Francia	33
Indonesia	35
Irán (República Islámica del)	46
Irlanda	48
Japón	49
Jordania	49
Kuwait	51
Malasia	53
México	55
Nicaragua	57
Omán	59
Países Bajos (Reino de)	60
Pakistán	63
Portugal	66
Qatar	66
República Árabe Siria	69
Senegal	70
Sudáfrica	72
Suiza	79
Túnez	79
Türkiye	81

Alemania

[Original: inglés]
[8 de noviembre de 2024]

Alemania reconoce y promueve la realización del derecho del pueblo palestino a la libre determinación, así como los esfuerzos del pueblo palestino por obtener su propio Estado en el marco de una solución biestatal negociada. Alemania ha venido liderando y participando en diversos formatos, incluido el formato de Múnich y otros compromisos bilaterales y multilaterales con países occidentales y árabes, a fin de promover medidas concretas en pro de la realización del derecho del pueblo palestino a la libre determinación. Como uno de los mayores donantes bilaterales de Palestina, Alemania contribuye además a la construcción de infraestructuras, la mejora de la educación, los programas de trabajo y el establecimiento de una economía sostenible para el pueblo palestino. Alemania está firmemente convencida de que el objetivo de un Estado palestino independiente, democrático y viable que coexista en paz y seguridad con Israel sólo puede alcanzarse mediante negociaciones.

Alemania no reconoce ninguna modificación de las líneas del 4 de junio de 1967 que no haya sido acordada por las partes mediante negociaciones y distingue, en sus relaciones pertinentes, entre el territorio del Estado de Israel y los territorios ocupados desde 1967.

En consonancia con esa postura, Alemania se abstiene de establecer misiones diplomáticas en Jerusalén o en cualquier misión diplomática que reconozca como legal la presencia de Israel en el Territorio Palestino Ocupado. Alemania considera además que los asentamientos israelíes en los territorios ocupados son ilegales según el derecho internacional y constituyen un obstáculo para la paz y una amenaza para los cimientos de la solución biestatal.

Alemania sigue las prácticas establecidas por la Unión Europea para diferenciar entre Israel y el Territorio Palestino Ocupado en el ámbito de las relaciones comerciales y económicas y, por lo que respecta a la posibilidad de recibir financiación en los ámbitos de la cultura, la educación y la investigación.

Alemania insta de forma continua a respetar estrictamente el derecho internacional humanitario y el derecho de ocupación beligerante. Alemania exhorta además a Israel que investigue todo posible incumplimiento del derecho internacional humanitario a fin de garantizar la rendición de cuentas. Alemania acata el régimen de sanciones de la Unión Europea en materia de derechos humanos. Ello incluye la plena aplicación de las sanciones de la Unión Europea contra los colonos israelíes.

Alemania evalúa minuciosamente las solicitudes de licencia para la exportación de tecnología y equipos militares, incluido a Israel, caso por caso, teniendo muy en cuenta los aspectos de política exterior y de seguridad y en consonancia con sus obligaciones en virtud del derecho internacional. Las decisiones sobre concesión de licencias se basan en la legislación nacional, europea e internacional, incluida la Posición Común 2008/944/PESC del Consejo de la Unión Europea y el Tratado sobre el Comercio de Armas. El respeto de los derechos humanos en el país receptor y el cumplimiento del derecho internacional humanitario son factores decisivos en el proceso nacional de toma de decisiones.

Arabia Saudita

[Original: inglés]
[8 de noviembre de 2024]

El Reino de Arabia Saudita no mantiene relaciones diplomáticas con Israel debido a la ocupación ilegal de tierras palestinas por parte de Israel. Además, no existen relaciones económicas, comerciales ni de ningún otro tipo entre ambos países.

El Reino de Arabia Saudita presentó la iniciativa de paz árabe, que se basa en las resoluciones 242 (1967) y 338 (1973) del Consejo de Seguridad y que se anunció por primera vez en 2002. La iniciativa presentaba una solución basada en la retirada de Israel de las tierras ocupadas desde 1967 a cambio de la normalización árabe, y cuenta con un amplio apoyo de la comunidad internacional.

En vista de los recientes acontecimientos, el Reino acogió la cumbre árabe-islámica (celebrada el 11 de noviembre de 2023) para detener la guerra contra Gaza y condenar la agresión israelí y sus crímenes inhumanos. Ello dio lugar a la formación de un comité ministerial dirigido por Arabia Saudita que incluye a Qatar, Egipto, Jordania, Palestina, Türkiye, Indonesia, Nigeria, al secretario general de la Liga Árabe y a la Organización de Cooperación Islámica para debatir la situación en Gaza y actuar de inmediato y con urgencia para poner fin a las continuas violaciones del derecho internacional humanitario por parte de la ocupación israelí, de forma que se garantice la plena protección de los civiles en la Franja de Gaza. Además, el Reino acogerá la próxima cumbre árabe-islámica el 11 de noviembre de 2024 para hacer un seguimiento de los últimos acontecimientos y de los esfuerzos realizados por la comisión ministerial, así como para debatir nuevas medidas con el propósito de poner fin a la guerra en Gaza y condenar la agresión israelí.

4. El Reino puso en marcha la Alianza Global para Implementar la Solución Biestatal, en nombre de los países árabes e islámicos y de los asociados europeos. La Alianza pretende revitalizar el proceso de paz entre palestinos e israelíes situando a todos los componentes activos bajo el paraguas de una alianza mundial, buscando unificar los esfuerzos internacionales y coordinar el apoyo político y económico a la construcción del Estado palestino, y elaborando un plan de acción conjunto que incluya un calendario claro para aplicar la solución biestatal.

5. El Reino acogió la primera reunión de alto nivel de la Alianza Internacional para la Implementación de la Solución Biestatal los días 30 y 31 de octubre de 2024, con la participación de más de 90 países y múltiples organizaciones internacionales y regionales, con el fin de formalizar un calendario fijo para materializar un Estado palestino independiente e implementar la solución biestatal. Está previsto que la próxima reunión de la citada Alianza se celebre en Bruselas a finales de noviembre de 2024.

Austria

[Original: inglés]
[8 de noviembre de 2024]

Austria apoya firmemente una paz justa, global y duradera basada en una solución biestatal negociada en la que dos Estados democráticos, Israel y Palestina, convivan en paz dentro de fronteras seguras y reconocidas, de conformidad con el derecho internacional y las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas.

Austria no reconocerá los cambios en las fronteras de 1967 a menos que sean acordados por las partes. Austria considera que los asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado son contrarios al derecho internacional.

Austria distingue claramente entre Israel y el Territorio Palestino Ocupado.

En su calidad de Estado miembro de la Unión Europea, la política y la legislación de la Unión Europea definen y configuran las relaciones económicas y comerciales de Austria. La Unión Europea aplica una política establecida para diferenciar entre Israel con las fronteras de 1967 y el Territorio Palestino Ocupado. Por ejemplo, el Territorio Palestino Ocupado no queda incluido en las relaciones comerciales preferenciales con Israel, sino que se basa en un acuerdo diferente para Palestina celebrado con la Organización para la Liberación de Palestina (OLP).

En la misma línea, los acuerdos internacionales que Austria ha celebrado con Israel no se extienden al Territorio Palestino Ocupado y sólo se aplican a Israel dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas.

Austria está representada en Israel por una embajada en Tel Aviv, de conformidad con la resolución 478 (1980) del Consejo de Seguridad, de 20 de agosto de 1980. También estableció relaciones tempranas con la OLP. En 1980, la misión de Palestina ante las organizaciones internacionales en Viena también se notificó bilateralmente a Austria. En 1998, Austria abrió una Oficina de Representación en Ramala. Austria no reconoce bilateralmente a Palestina como Estado, pero apoya una solución biestatal negociada en el proceso de paz de Oriente Medio.

Austria apoyó la aprobación de sanciones de la Unión Europea contra una serie de colonos extremistas israelíes en la Ribera Occidental Ocupada y Jerusalén Oriental, así como contra activistas violentos que bloquean la ayuda humanitaria a Gaza. El 17 de octubre de 2024, la Unión Europea decidió seguir trabajando en nuevas medidas restrictivas contra los colonos extremistas y contra las entidades y organizaciones que los apoyan.

Bahrein

[Original: árabe]
[12 de noviembre de 2024]

- El Reino de Bahrein reafirma su compromiso con los derechos legítimos del pueblo palestino a la libre determinación y a establecer un Estado independiente y soberano sobre la base de las fronteras del 4 de junio de 1967, con Jerusalén Oriental como capital, de conformidad con la solución biestatal, las resoluciones pertinentes reconocidas internacionalmente y la Iniciativa de Paz Árabe. Además, apoya el reconocimiento del Estado de Palestina como miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas, ya que es la senda hacia la distensión y el establecimiento de una paz justa, global y duradera.
- El Reino de Bahréin ha pedido la convocatoria de una conferencia internacional para resolver la cuestión palestina sobre la base de la solución biestatal. Dicha iniciativa fue adoptada por el Consejo de la Liga de Estados Árabes a nivel de cumbre en el trigésimo tercero período de sesiones ordinario de la Liga, que se celebró en mayo de 2024 en Bahréin.
- El Reino de Bahréin condena la expansión de la actividad de asentamiento, ya que dicha actividad constituye una flagrante violación de los principios del derecho internacional y de las resoluciones internacionalmente reconocidas.

Bélgica

[Original: inglés]
[8 de noviembre de 2024]

Bélgica reconoce el derecho del pueblo palestino a la libre determinación y mantiene un compromiso de larga data con la solución biestatal, apoyando los esfuerzos conjuntos de la Unión Europea y de los países árabes a ese respecto. En el pasado mes de septiembre, Bélgica se incorporó a la Alianza Global para Implementar la Solución Biestatal y acogerá la segunda reunión de la Alianza en Bruselas el 28 de noviembre de 2024. Bélgica reconoce a Israel dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas de 1967 y se ha mantenido firme en considerar ilegal la presencia de Israel en el Territorio Palestino Ocupado. Bélgica tiene una embajada en Tel Aviv con competencia sobre Israel y un Consulado General en Jerusalén con competencia consular sobre Jerusalén (*corpus separatum*), la Ribera Occidental y Gaza.

Bélgica aplica cuidadosamente la política de diferenciación, derivada, entre otras cosas, de la resolución 2334 (2016) del Consejo de Seguridad. Todos los tratados firmados con Israel contienen la denominada cláusula territorial. Bélgica lleva a cabo controles reforzados de las mercancías importadas de Israel y sensibiliza a los viajeros belgas o a las empresas privadas que tienen previsto ir al Territorio Ocupado. Ninguna empresa belga figura actualmente en la base de datos elaborada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en aplicación de las resoluciones 31/36 y 53/25 del Consejo de Derechos Humanos.

Desde 2009, en el contexto de la operación israelí Plomo Fundido en la Franja de Gaza, las autoridades competentes de Bélgica han decidido no expedir licencias que autoricen exportaciones de armas que tengan como usuario final a las fuerzas armadas de Israel.

Bélgica apoyó la inclusión de personas y entidades de colonos israelíes violentos en el régimen de sanciones de la Unión Europea en materia de derechos humanos y está a favor de adoptar sanciones adicionales coordinadas internacionalmente.

Bélgica apoya la labor del Consorcio de Protección de la Ribera Occidental, que se ha comprometido a proteger los derechos de los palestinos y a prestar asistencia a las poblaciones vulnerables en su actual lugar de residencia en la zona C de la Ribera Occidental. En el marco de la comunidad de donantes del Consorcio de Protección de la Ribera Occidental, Bélgica ha presentado quejas respecto a las demoliciones por parte de la Coordinación de Actividades Gubernamentales en los Territorios de infraestructuras palestinas en la zona C, que provocan desplazamientos forzosos. Desde hace mucho tiempo, Bélgica es un donante humanitario y de desarrollo al pueblo palestino, a las organizaciones de la sociedad civil, a la Autoridad Palestina y al sistema de las Naciones Unidas presente en el Territorio Palestino Ocupado.

Brasil

[Original: inglés]
[8 de noviembre de 2024]

Relaciones diplomáticas

En diciembre de 2010, el Brasil reconoció oficialmente el Estado de Palestina, dentro de las fronteras de 1967, que comprenden la Ribera Occidental, incluida Jerusalén Oriental, y la Franja de Gaza.

El Brasil mantiene relaciones diplomáticas plenas con Palestina, que tiene una embajada en Brasilia. El Brasil mantiene una Oficina de Representación en Ramala,

llamada así por los Acuerdos de Oslo. En la práctica la oficina funciona como una embajada, en vista del reconocimiento por el Brasil del Estado de Palestina en 2010.

La Oficina de Representación del Brasil en Ramala se ocupa de las relaciones bilaterales con Palestina. También presta servicios a la comunidad brasileña residente en la Ribera Occidental, incluidas Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza. La residencia del jefe de la oficina, así como las de los demás miembros del personal diplomático, están situadas en un barrio palestino de Jerusalén Oriental.

El Brasil no tiene misión diplomática en Jerusalén. La embajada del Brasil en Israel está situada en Tel Aviv, al igual que la residencia del Embajador.

Promover el derecho del pueblo palestino a la libre determinación

El Brasil procura promover la realización del derecho del pueblo palestino a la libre determinación, en consonancia con la postura que desde hace tiempo mantiene el Brasil a favor de la aplicación de la solución biestatal.

El Brasil y Palestina mantienen un diálogo estructurado, con un mecanismo de consultas políticas y una amplia red de acuerdos bilaterales en los ámbitos de la cooperación técnica, la cultura, la educación, el turismo, la salud y los deportes.

En la conducción de sus relaciones exteriores, el Brasil defiende y busca promover la admisión de Palestina en las Naciones Unidas como Estado Miembro de pleno derecho.

Tradicionalmente el Brasil apoya las resoluciones de la Asamblea General dirigidas a salvaguardar la soberanía del Estado de Palestina y los derechos de su población.

Postura en lo referente al Territorio Palestino Ocupado

El Brasil no reconoce como legal la situación derivada de la presencia ilegal de Israel en el Territorio Palestino Ocupado.

El Brasil no reconoce ningún cambio en el carácter físico o la composición demográfica, la estructura institucional o el estatuto del territorio ocupado por Israel.

En varias ocasiones a lo largo de los años, por medio de declaraciones públicas el Brasil ha condenado las acciones ilegales vinculadas a la presencia ilícita de Israel en el Territorio Palestino Ocupado, como la realización por Israel de operaciones militares en dicho territorio, la construcción y el mantenimiento de asentamientos israelíes, la imposición de barreras a la circulación de personas y mercancías, los intentos de cambiar el estatuto de los santos lugares, etcétera.

El estallido de la guerra en Gaza en 2023 se produjo durante la presidencia brasileña del Consejo de Seguridad en el mes de octubre, en el marco de la cual se examinó la situación en Gaza en cinco reuniones oficiales, tres de las cuales fueron presididas por el Ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira. El Brasil propuso un proyecto de resolución para promover el cese de las hostilidades, la protección de la población civil, el alivio de la situación humanitaria en la Franja de Gaza, la liberación incondicional e inmediata de los rehenes y la aplicación de la solución biestatal. Sometido a votación el 18 de octubre, el proyecto recibió el apoyo de 12 miembros, pero no fue aprobado debido al veto de los Estados Unidos.

El Brasil también organizó el 10 de octubre un debate abierto de alto nivel sobre la situación en Oriente Medio, incluida la cuestión palestina. Más de 20 ministros y viceministros de relaciones exteriores asistieron a la reunión. Todos los Estados Miembros pudieron expresar su opinión sobre la evolución de la crisis en Palestina e Israel, así como sobre las vías para contener el conflicto y reanudar el proceso de paz.

El Brasil proporcionó declaraciones escritas y orales a la Corte Internacional de Justicia, en julio de 2023 y febrero de 2024 respectivamente, en los procedimientos consultivos que dieron lugar a la opinión consultiva de la Corte de 19 de julio de 2024 sobre las consecuencias jurídicas que se derivaban de las políticas y prácticas de Israel en el Territorio Palestino Ocupado, que constituye la base de la resolución [ES-10/24](#) de la Asamblea General. El Brasil sostuvo que la ocupación del territorio palestino equivale a una anexión, explicó más detalladamente las consecuencias jurídicas de tal situación y condenó las prácticas discriminatorias, así como otras violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los palestinos en el territorio ocupado.

En sus relaciones diplomáticas, políticas y jurídicas con Israel, el Brasil distingue sistemáticamente entre el territorio de Israel y el Territorio Palestino Ocupado.

No existen acuerdos bilaterales en vigor entre el Brasil e Israel en los que Israel pretenda expresamente actuar en nombre del Territorio Palestino Ocupado o en asuntos expresamente relacionados con el Territorio Palestino Ocupado.

El Brasil cumple las disposiciones del Tratado sobre el Comercio de Armas, que establece, en el artículo 7, a) y b) i) y ii), que el país exportador tiene la obligación de evaluar cada operación de exportación de armas teniendo en cuenta sus posibles repercusiones en la paz y la seguridad internacionales, así como su uso potencial para cometer violaciones del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos. Dada la historia de conflicto de larga data en la Franja de Gaza y en el resto del Territorio Palestino Ocupado, el Brasil considera que el suministro de armas y municiones a cualquiera de las partes directamente involucradas en el conflicto puede facilitar su uso con fines no pacíficos y dar lugar a violaciones del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos.

El Brasil fue uno de los 52 países y 2 organizaciones internacionales que copatrocinaron la carta conjunta en la que se pide el cese de las transferencias de armas a Israel, enviada el 1 de noviembre de 2024 al Secretario General, al Presidente de la Asamblea General y al Presidente del Consejo de Seguridad.

Entre el 18 de septiembre y el 5 de noviembre de 2024, en diversos foros y reuniones internacionales altos funcionarios brasileños abogaron por el respeto del derecho internacional, especialmente en lo referente a la situación en el Territorio Palestino Ocupado:

a) El 24 de septiembre, en la apertura del septuagésimo noveno periodo de sesiones de la Asamblea General, en Nueva York, y el 23 de octubre, en la sesión plenaria abierta de la Cumbre de los BRICS, celebrada en Kazán, el presidente Lula reiteró sus llamamientos en favor del alto el fuego en Gaza;

b) El 26 de septiembre, en Nueva York, durante la semana de alto nivel del septuagésimo noveno periodo de sesiones de la Asamblea General, el Ministro de Relaciones Exteriores Vieira, asistió a la reunión ministerial sobre el tema “La situación en Gaza y la aplicación de la solución biestatal como vía para una paz justa y completa”. La reunión brindó la oportunidad de debatir medidas concretas para aplicar la solución biestatal, a la luz de la Iniciativa de Paz Árabe y de las resoluciones de las Naciones Unidas, así como de abordar la situación humanitaria en Gaza y promover el fin de las hostilidades y el respeto del derecho internacional. En esa ocasión, el Ministro de Relaciones Exteriores subrayó la urgencia de establecer un alto el fuego permanente y completo en Gaza, que haría posible la prestación sin obstáculos de asistencia humanitaria a su población, así como la puesta en libertad de todos los rehenes. Reafirmó también la defensa por el Brasil de la solución biestatal,

con un Estado de Palestina independiente y viable, que conviva con Israel en paz y seguridad, dentro de las fronteras de 1967, que incluyen la Franja de Gaza y la Ribera Occidental, con Jerusalén Oriental como su capital;

c) El 29 de octubre, el Ministro de Relaciones Exteriores Vieira participó en el debate abierto de alto nivel del Consejo de Seguridad sobre la situación en Oriente Medio, incluida la cuestión palestina. En la reunión, condenó enérgicamente la fuerte escalada de violencia en Oriente Medio desde el atentado terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023 y la posterior respuesta militar desproporcionada e indiscriminada de Israel. Hizo hincapié en la prioridad de un alto el fuego inmediato para detener la catástrofe humanitaria. Recalcó que todas las partes debían cumplir plenamente las obligaciones que les incumben en virtud del derecho internacional y el derecho internacional humanitario. También condenó los ataques de la campaña de desinformación de Israel contra el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA). Expresó su preocupación por la reciente aprobación de legislación por parte del parlamento israelí que afecta las operaciones de UNRWA, con el telón de fondo, desde octubre de 2023, de 237 empleados del Organismo asesinados y a varias de sus instalaciones, incluidas escuelas que albergan a civiles desplazados, atacadas por la potencia ocupante, en violación del derecho internacional humanitario;

d) Entre el 30 y el 31 de octubre, el Secretario para África y Oriente Medio del Ministerio de Relaciones Exteriores representó al Brasil en la primera reunión de seguimiento de alto nivel de la Alianza Global para Implementar la Solución Biestatal, celebrada en Riad.

El Brasil ocupa actualmente una de las dos vicepresidencias de la Comisión Asesora del UNRWA, teniéndose previsto que asuma su presidencia en 2025.

Defensa del derecho internacional humanitario

El Brasil tiene la intención de estar representado en la Conferencia de las Altas Partes Contratantes en el Cuarto Convenio de Ginebra relativo a la Protección debida a las Personas Civiles en Tiempo de Guerra, que será convocada por Suiza dentro de los seis meses siguientes a la aprobación de la resolución [ES-10/24](#) de la Asamblea General.

Con respecto al párrafo 4 e) de la resolución [ES-10/24](#), el Brasil ha ratificado los principales tratados multilaterales en el ámbito del derecho internacional humanitario, incluidos los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales. El Brasil reconoce la competencia de la “Comisión Internacional Humanitaria de Encuesta”, prevista en el Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales (Protocolo I), y que tiene facultades de investigación. Con respecto al ordenamiento jurídico interno, el Código Penal del Brasil contempla el crimen de genocidio.

Durante la semana de alto nivel del septuagésimo noveno período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Brasil, junto con China, Francia, Jordania, Kazajistán y Sudáfrica, con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja, puso en marcha una nueva iniciativa mundial para promover el derecho internacional humanitario, que se irá elaborando en los próximos dos años.

Cuba

[Original: español]
[11 de noviembre de 2024]

La República de Cuba figura entre los copatrocinadores de la resolución [ES-10/24](#) de la Asamblea General, aprobada el pasado 18 de septiembre de 2024 durante la reanudación del décimo período extraordinario de sesiones de emergencia de la Asamblea General.

De igual modo, nuestro país se encuentra entre los copatrocinadores principales de la resolución [77/247](#) aprobada por la Asamblea General el 30 de diciembre de 2022, titulada “Prácticas israelíes que afectan a los derechos humanos del pueblo palestino en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental”, mediante la cual este órgano solicitó una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas de la prolongada ocupación israelí, sus asentamientos y su anexión del territorio palestino ocupado.

Cuba no escatima en los esfuerzos para alcanzar una solución amplia, justa y duradera al conflicto israelí-palestino, sobre la base de la creación de dos Estados, que permita al pueblo palestino ejercer su derecho a la libre determinación y a disponer de un Estado independiente y soberano dentro de las fronteras anteriores a 1967, con Jerusalén Oriental como su capital y que garantice igualmente el derecho al retorno de los refugiados.

La ocupación ilegal israelí y el continuo desplazamiento forzoso de los palestinos de su propia tierra siguen amenazando este propósito de larga data.

Durante más de 70 años se le ha negado al pueblo palestino su derecho a la libre determinación y se le ha sometido a una política de genocidio permanente, cuyo fin es el claro exterminio de su población. Esa política ha tenido momentos particularmente dramáticos, como el actual, donde cientos de miles de civiles inocentes, incluidos niñas, niños, mujeres, ancianos y personal humanitario son cruelmente asesinados.

Por las razones antes mencionadas, el 21 de junio del 2024, Cuba anunció que intervendrá en el procedimiento contencioso iniciado por la República de Sudáfrica contra el Estado de Israel ante la Corte Internacional de Justicia. El gobierno de la República de Cuba, tomó esa importante decisión en correspondencia con el firme y sostenido compromiso de apoyar y contribuir en todo lo posible a los esfuerzos internacionales legítimos para poner fin al genocidio que se comete contra el pueblo palestino.

Atendiendo a las disposiciones del Artículo 63 del Estatuto de la Corte Internacional de la Justicia, y en estricta observancia de sus obligaciones como Estado parte de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, Cuba hará uso de su derecho a presentar, como tercer Estado, su interpretación de las normas de la Convención que Israel ha violado flagrantemente con sus acciones en el territorio palestino ilegalmente ocupado de la Franja de Gaza.

La demanda presentada ante el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas, tiene como objetivo principal detener las atrocidades contra el pueblo palestino como resultado del uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza por parte de Israel. Israel, con total impunidad, protegido por la complicidad del gobierno de los Estados Unidos, ignora sus obligaciones como Potencia Ocupante en virtud del Cuarto Convenio de Ginebra.

En nuestra calidad de vicepresidentes del Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino, continuaremos promoviendo, mediante

acciones conjuntas o individuales, la realización de ese pueblo a la libre determinación, cuyo respeto es una obligación *erga omnes*.

Cuba jamás reconocerá como legal la situación derivada de la presencia ilegal de Israel en el Territorio Palestino Ocupado ni prestará ayuda ni asistencia para mantener la situación creada por la presencia ilegal de Israel en el Territorio.

Cuba sostiene jurídicamente que tanto Israel, como sus cómplices, deben ser declarados bajo el derecho internacional vigente como responsables del genocidio que durante décadas ha vivido, y vive hoy de forma muy agravada, el pueblo palestino.

El genocidio, el *apartheid*, el desplazamiento forzado y los castigos colectivos no pueden tener cabida en el mundo actual, ni pueden ser tolerados por la comunidad internacional. Debe prevalecer la justicia y el respeto a la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional.

Egipto

[Original: inglés]
[8 de noviembre de 2024]

Desde el inicio del conflicto palestino-israelí, el derecho de Palestina a un Estado independiente y a la libre determinación en su territorio ocupado en 1967 ha estado en la primera línea de las prioridades de la política exterior de Egipto. La presente contribución destaca algunas de las medidas que ha adoptado Egipto recientemente, tras la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas de las políticas y prácticas de Israel en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y la aprobación de la resolución [ES-10/24](#) de la Asamblea General.

Respecto a los esfuerzos de Egipto por promover mediante acciones conjuntas y separadas la realización del derecho del pueblo palestino a la libre determinación, por no reconocer como legal la situación derivada de la presencia ilegal de Israel en el Territorio Palestina Ocupado y por no prestar ayuda o asistencia para mantener la situación creada por la presencia ilegal de Israel en el territorio:

a) Egipto, junto con otros Estados árabes, encabezó los esfuerzos para que el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Liga de Estados Árabes aprobara la resolución 9063, de 10 de septiembre de 2024, en la que se pedía a la comunidad internacional que aplicara la opinión consultiva sobre la legalidad de las políticas y prácticas de Israel en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, en la que se concluía, entre otras cosas, que Israel tiene la obligación de poner fin a su presencia ilegal en el Territorio Palestino Ocupado lo antes posible, cesar de inmediato toda nueva actividad de asentamiento, y evacuar a todos los colonos del Territorio Palestino Ocupado, y que todos los Estados tienen la obligación de no reconocer como legal la situación derivada de la presencia ilegal de Israel en el Territorio Palestino Ocupado y de no prestar ayuda o asistencia para mantener dicha situación ilegal;

b) La citada resolución condenaba todas las políticas y prácticas israelíes en la Ribera Occidental y Gaza que tratan de obstaculizar el logro de un Estado palestino independiente, entre otras cosas mediante la anexión y los asentamientos, el desplazamiento y traslado de la población palestina, la destrucción sistemática de ciudades, pueblos, propiedades e infraestructuras palestinas, el asesinato y las lesiones de civiles palestinos, y la detención ilegal de miles de palestinos en condiciones inhumanas, obstruyendo así el ejercicio por parte de los palestinos de su derecho a la libre determinación. La resolución pedía a Israel que se retirara de forma

inmediata y total de la Franja de Gaza y afirmaba la unidad del Territorio Palestino Ocupado;

c) La resolución pedía además a la Secretaría de la Liga de Estados Árabes que diseñara un plan de acción para poner en práctica la opinión consultiva y apoyara a Palestina en su intento de convertirse en miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas;

d) Egipto participó también en la reunión ministerial de emergencia de la Organización de la Conferencia Islámica celebrada el 27 de septiembre de 2024, que culminó en un comunicado conjunto para coordinar y dar seguimiento a la resolución [ES-10/24](#) de la Asamblea General, y encabezó los esfuerzos para establecer el “Grupo Central” de los Embajadores de la Organización de la Conferencia Islámica ante las Naciones Unidas en Nueva York a fin de determinar las acciones necesarias dirigidas a poner en práctica la resolución [ES-10/24](#);

e) Egipto, en coordinación con Qatar y los Estados Unidos, está mediando entre israelíes y palestinos para lograr un alto el fuego permanente en Gaza que permita la reanudación del acceso de la ayuda humanitaria y la reconstrucción de la Franja de Gaza. También aboga por la necesidad de empoderar a la Autoridad Palestina para unir Gaza y la Ribera Occidental bajo una única autoridad, en el marco de nuestros esfuerzos por consolidar el Estado de Palestina como una única unidad territorial con el fin de lograr la libre determinación de los palestinos.

f) Egipto está organizando una conferencia internacional sobre la mejora de la respuesta humanitaria a Gaza para el 2 de diciembre de 2024, en cooperación con los organismos pertinentes de las Naciones Unidas y con el Coordinador Superior de Asuntos Humanitarios y Reconstrucción para Gaza. Por medio de estas y otras iniciativas, Egipto sigue abogando por el papel indispensable del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA) y la necesidad de aumentar la asistencia humanitaria y el acceso y la distribución humanitaria rápida, segura, sin trabas ni obstáculos a toda Gaza. En este sentido, Egipto ha hecho todo lo posible -desde el estallido del actual conflicto en la Franja de Gaza- para proporcionar ayuda humanitaria a Gaza a través del paso fronterizo de Rafah y estuvo a la vanguardia de las gestiones para aprobar la resolución [2720 \(2023\)](#) del Consejo de Seguridad.

g) En cumplimiento de su política de apoyo al reconocimiento internacional de Palestina y a su plena adhesión a las organizaciones internacionales, en particular a las Naciones Unidas, Egipto, entre otros países árabes, encabezó las gestiones para que el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, en su 352ª reunión, adoptara el 31 de octubre de 2024 la decisión de recomendar que la Conferencia Internacional del Trabajo considerara en su 113ª reunión (en 2025) la aprobación de una resolución para elevar el estatuto de Palestina en la OIT a la de Estado observador no miembro;

h) Egipto participará la próxima semana en la cumbre Árabe-Islámica que se celebrará en Riad para examinar los acontecimientos en el Territorio Palestino Ocupado y el Líbano, donde seguirá abogando, entre otras cosas, por un alto el fuego permanente en Gaza, la reanudación del acceso humanitario, la consolidación de la Autoridad Palestina y de las instituciones unificadas del Estado palestino, y el papel indispensable del UNRWA.

Con respecto a los esfuerzos de Egipto por no reconocer ningún cambio en el carácter físico, la composición demográfica o el estatuto del Territorio Palestino Ocupado, y por distinguir en todas las relaciones con Israel entre Israel y el Territorio Palestino Ocupado:

a) Egipto no reconoce ninguna medida que pretenda transformar la realidad jurídica, fáctica o demográfica del Territorio Palestino Ocupado, incluso con respecto a Jerusalén. No tiene tratados con Israel en los que este último pretenda actuar en nombre del Territorio Palestino Ocupado o alguna parte de él, ni inversiones, relaciones económicas o comerciales con Israel relativos al Territorio Palestino Ocupado o a sus asentamientos ilegales allí, o que ayuden a Israel a mantener su presencia ilegal en el Territorio Palestino Ocupado;

b) Egipto mantiene relaciones diplomáticas con el Estado de Palestina y numerosos tratados con el Estado de Palestina que reconocen plenamente la soberanía palestina sobre su territorio, riqueza y recursos naturales.

Con respecto a los esfuerzos de Egipto, en su carácter de Estado parte en el Convenio de Ginebra relativo a la Protección debida a las Personas Civiles en Tiempo de Guerra (Cuarto Convenio de Ginebra), dirigidos a velar por el cumplimiento del derecho internacional humanitario consagrado en dicho Convenio:

a) Egipto, junto con otros Estados, lideró los esfuerzos para reforzar el texto sobre la garantía del cumplimiento del derecho internacional humanitario en la resolución 1 aprobada el 31 de octubre de 2024 por la trigésima cuarta Conferencia Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, entre otras cosas exigiendo que “todas las partes en conflictos armados, incluidas las situaciones de ocupación, cumplan plenamente sus obligaciones dimanantes del derecho internacional humanitario, incluidas, entre otras, las normas relativas a la protección de civiles, la protección del personal humanitario y las normas relativas al acceso humanitario”;

b) Egipto propuso también un texto para reforzar el párrafo 10 mediante la incorporación del texto de la opinión consultiva citada de la Corte Internacional de Justicia, insistiendo en que los Estados se abstengan de alentar, ayudar o asistir a violaciones del derecho internacional humanitario por parte de otros Estados y actúen para promover el cumplimiento de dicho derecho por parte de otros Estados, incluso convenciendo a las partes en conflictos armados de que pongan fin a las violaciones del derecho internacional humanitario, buscando el compromiso de los Estados al más alto nivel de liderazgo civil y militar para cumplir con él, y cumpliendo con las obligaciones en virtud de los tratados internacionales aplicables y la legislación que regula el uso y la transferencia de armas;

c) Egipto también cooperó con España para emitir una declaración conjunta sobre la obligación de “respetar y hacer respetar” el derecho internacional humanitario, tal como se establece en el artículo 1 común de los Convenios de Ginebra, y abogó por esta obligación en su calidad de Coordinador del Grupo Árabe para Asuntos Humanitarios;

d) En el período previo a la resolución [ES-10/24](#) de la Asamblea General, Egipto, en su calidad de Coordinador del Grupo Árabe para Asuntos Humanitarios, también lideró los esfuerzos para dirigir una carta a Suiza, en su carácter de depositario de los Convenios de Ginebra de 1949, solicitando la convocatoria de una reunión de las Altas Partes Contratantes del Cuarto Convenio de Ginebra.

Con respecto a los esfuerzos de Egipto para velar por que sus nacionales y empresas y entidades bajo su jurisdicción no presten ayuda o asistencia al mantenimiento de la situación creada por la presencia ilegal de Israel en el Territorio Palestino Ocupado, poniendo fin a la importación de bienes procedentes de los asentamientos y al suministro o transferencia de armas, municiones y equipo conexo a Israel en los casos en que haya motivos razonables para sospechar que se utilizarán en el Territorio Palestino Ocupado, y a efectos de mantener las sanciones, las prohibiciones de viajar y la congelación de activos contra las personas físicas y

jurídicas que mantengan la situación creada por la presencia ilegal de Israel en el territorio, y para apoyar las iniciativas de rendición de cuentas de las víctimas:

- a) Egipto no importa ningún producto originario de los asentamientos israelíes y no suministra ni transfiere armas, municiones o equipos conexos a Israel;
- b) Egipto, en cooperación con otros Estados árabes, lideró los esfuerzos para aprobar la resolución 9063 del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Liga de Estados Árabes, que establece en el párrafo 20 la aplicación de la resolución 854 de la Cumbre Árabe, de 16 de mayo de 2024, que exige a los Estados miembros que incluyan a todas las organizaciones extremistas israelíes vinculadas a actividades de asentamiento en las listas nacionales de lucha contra el terrorismo, y que boicoteen a las empresas internacionales implicadas en los asentamientos ilegales israelíes;
- c) Egipto apoyó la resolución [ES-10/24](#) de la Asamblea General y los esfuerzos subsiguientes de la Organización de Cooperación Islámica para poner en marcha el registro internacional de daños y perjuicios, estipulado en el artículo 10 de dicha resolución, para que sirva de registro, en forma documental, de pruebas e información de reclamaciones sobre daños, pérdidas o perjuicios a personas físicas y jurídicas;
- d) En su apoyo a las iniciativas de rendición de cuentas de las víctimas, Egipto facilitó la entrada de todas las organizaciones y organismos de las Naciones Unidas, así como de las organizaciones no gubernamentales internacionales, que pretendían entrar en la Franja de Gaza a través del paso fronterizo de Rafah. Egipto también facilitó reuniones entre representantes de esas organizaciones y víctimas y testigos palestinos atendidos en hospitales egipcios.

Eslovenia

[Original: inglés]
[8 de noviembre de 2024]

Eslovenia respeta sistemáticamente el derecho internacional, incluidas las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y las decisiones de la Corte Internacional de Justicia. Eslovenia apoya la solución biestatal sin ningún cambio en el carácter físico o la composición demográfica, la estructura institucional o el estatuto del territorio ocupado por Israel el 5 de junio de 1967, incluida Jerusalén Oriental. Para apoyar la libre determinación palestina, Eslovenia ha reconocido oficialmente a Palestina el 4 de junio de 2024, y está en marcha el proceso para establecer una embajada palestina en Eslovenia. Eslovenia aboga periódicamente por la creación de un Estado palestino independiente y soberano y contribuye a las iniciativas de paz y a las iniciativas humanitarias en la región. Eslovenia incluye sistemáticamente esos elementos en sus declaraciones en diversos foros.

Eslovenia participó activamente en los debates del Comité de Admisión de Nuevos Miembro del Consejo de Seguridad sobre la cuestión de la adhesión de Palestina a las Naciones Unidas en 2024. En abril de 2024, Eslovenia apoyó y votó a favor del proyecto de resolución del Consejo sobre la admisión del Estado de Palestina como miembro de las Naciones Unidas ([S/2024/312](#)). Como miembro no permanente del Consejo, Eslovenia participa activamente en los debates e iniciativas del Consejo en relación con el tema relativo a la situación en Oriente Medio.

Eslovenia ha participado en el procedimiento consultivo de la Corte Internacional de Justicia en el procedimiento consultivo sobre las consecuencias jurídicas que se derivan de las políticas y prácticas de Israel en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, centrándose la contribución del país en el derecho de *ius cogens* a la libre determinación.

Eslovenia cree que al sistema de las Naciones Unidas corresponde un papel clave a la hora de facilitar el derecho del pueblo palestino a la libre determinación, entre otras cosas garantizando el bienestar, la protección y el desarrollo humano de los refugiados palestinos.

Eslovenia es miembro del grupo central de la declaración de los compromisos compartidos en apoyo del UNRWA, un grupo de países que trabajan para garantizar el apoyo necesario para que el Organismo pueda cumplir su mandato vital. Eslovenia también se ha comprometido a proporcionar apoyo financiero al UNRWA y en 2024 contribuyó 1.5 millones de euros al Organismo.

Además, Eslovenia forma parte del grupo central de países que preparan una iniciativa para solicitar una opinión consultiva sobre la obligación legal de Israel de permitir y facilitar las operaciones de las Naciones Unidas, sus organismos, otras organizaciones internacionales y terceros Estados en el Territorio Palestino Ocupado.

Eslovenia participó y apoyó la adopción de sanciones de la Unión Europea contra los colonos extremistas de la Ribera Occidental ocupada y Jerusalén Oriental en el marco del régimen de sanciones de la Unión Europea de alcance mundial en materia de derechos humanos. Eslovenia también ha respaldado las propuestas de la Unión Europea de imponer sanciones adicionales a los dirigentes israelíes acusados de violar el derecho internacional.

Eslovenia garantiza que, en sus relaciones diplomáticas, económicas y políticas, distingue entre el territorio del Estado de Israel y el Territorio Palestino Ocupado. Ello incluye la aplicación y el seguimiento de la Nota interpretativa de la Unión Europea de 2015 sobre la indicación del origen de las mercancías procedentes de los territorios ocupados por Israel desde junio de 1967, que especifica que los productos procedentes del Territorio Palestino Ocupado no pueden etiquetarse como productos de Israel y brinda directrices para garantizar la exactitud y evitar información engañosa. Además, Eslovenia se adhiere al dictamen de 2019 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obliga a etiquetar de forma clara y precisa los productos procedentes de asentamientos ilegales. Eslovenia apoya las iniciativas de la Unión Europea que piden impedir el comercio con empresas que operan en asentamientos ilegales.

En su carácter de miembro de la Unión Europea, Eslovenia debe atenerse a la Posición Común 2008/944/PESC del Consejo de la Unión Europea, en la que se definen las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares, y es parte en el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA).

Como tal, Eslovenia sigue un planteamiento estricto y de diligencia debida al examinar las solicitudes de licencias de exportación de armas, municiones y equipo conexas, en particular los que pueden utilizarse en el Territorio Palestino Ocupado.

Estado de Palestina

[Original: inglés]
[8 de noviembre de 2024]

Con respecto a la solicitud de la Asamblea General al Secretario General de que presente un informe en el plazo de tres meses sobre la aplicación de la resolución, el Estado de Palestina presenta esta nota en la que se esbozan las medidas que es imperativo que adopten los Estados y las Naciones Unidas en cumplimiento de las obligaciones jurídicas internacionales, incluidas las estipuladas en la resolución [ES-10/24](#), para promover la rendición de cuentas, proteger a la población civil palestina, poner fin lo antes posible a la ocupación ilegal por Israel del Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y garantizar la realización por el

pueblo palestino de sus derechos inalienables, incluido el ejercicio de su derecho a la libre determinación, incluido su derecho a un Estado independiente y soberano, sobre la totalidad del Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental.

A este respecto, cabe recordar que, de conformidad con las autorizadas determinaciones de la Corte Internacional de Justicia en su opinión consultiva de 19 de julio de 2024, la Asamblea General exigió, entre otras cosas, que Israel pusiera fin sin demora a su presencia ilegal en el Territorio Palestino Ocupado, que constituye un hecho ilícito de carácter continuado que genera su responsabilidad internacional, y que lo hiciera a más tardar 12 meses después de la aprobación de la resolución.

En consecuencia, el Estado de Palestina hace un llamamiento a todos los Estados y a las organizaciones internacionales para que actúen de manera urgente y responsable, colectiva e individualmente, de conformidad con el derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario y el derecho de los derechos humanos, a fin de garantizar el respeto de esta exigencia principal y general, junto con todas las demás exigencias formuladas con razón, en la resolución [ES-10/24](#) y en todas las resoluciones pertinentes hasta la fecha, en consonancia con la responsabilidad histórica y permanente de las Naciones Unidas respecto de la cuestión de Palestina hasta que se resuelva de manera justa en todos sus aspectos.

Debe ejercerse la máxima presión sobre Israel, la Potencia ocupante, para que ponga fin a su ocupación ilegal, que constituye tanto un acto ilícito de carácter continuado que entraña responsabilidad internacional como una amenaza para la paz y la seguridad internacionales. Para hacer frente a esta situación ilegal y peligrosa se requieren medidas tangibles de rendición de cuentas encaminadas a poner fin a la impunidad y los crímenes de Israel en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, con el fin último de acabar cuanto antes con su ocupación ilegal en todas sus manifestaciones.

Ello debe incluir acciones para cumplir las obligaciones derivadas de los artículos 146, 147 y 148 del Convenio de Ginebra relativo a la Protección debida a las Personas Civiles en Tiempo de Guerra en relación con las infracciones graves y las sanciones penales, así como las obligaciones derivadas de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, incluso en la aplicación de las respectivas medidas provisionales y órdenes de la Corte Internacional de Justicia en el caso relativo a la aplicación de la Convención sobre el Genocidio (*Sudáfrica c. Israel*) en relación con el derecho del pueblo palestino de la Franja de Gaza a ser protegido de todos los actos comprendidos en el ámbito de aplicación de los artículos II y III de la Convención. Esas convenciones constituyen derecho internacional consuetudinario, que todos los Estados deben respetar y respecto del cual no puede haber excepciones.

La atroz campaña de depuración étnica y genocidio de Israel contra la población civil palestina en la Franja de Gaza, así como la escalada de ataques de sus fuerzas de ocupación y milicias de colonos extremistas en el resto de la Palestina ocupada en la Ribera Occidental, incluida Jerusalén Oriental, añaden urgencia a la necesidad de adoptar medidas de rendición de cuentas por todas las violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y actos de genocidio que está perpetrando, con miras a ponerles fin y garantizar justicia para las víctimas.

Es hora de que haya consecuencias, de que se impongan sanciones a esta ocupación ilegal, de que se aplique el derecho internacional en todas las relaciones diplomáticas, políticas, jurídicas, militares, económicas, comerciales y financieras con Israel para garantizar la rendición de cuentas y poner fin a la ocupación. No se debe conceder ningún tipo de comercio, armas, legitimidad, apoyo o asistencia a la

Potencia ocupante que permita y prolongue sus violaciones de los derechos del pueblo palestino, incluida la negación del derecho a la libre determinación, y que permita y prolongue su guerra genocida en Gaza y su ocupación ilegal y colonial y su régimen de *apartheid*, todo lo cual debe terminar de forma completa y permanente.

Al instar a que se tomen todas las medidas necesarias a tal fin, el Estado de Palestina destaca las siguientes medidas que deben adoptar inmediatamente todos los Estados y organizaciones internacionales:

a) Al cumplir las obligaciones de no reconocer como legal la situación derivada de la presencia ilegal de Israel en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, incluso de no reconocer como legal la situación derivada de la presencia ilegal de Israel en el Territorio Palestino Ocupado desde el 5 de junio de 1967, todos los Estados y organizaciones internacionales deben respetar la obligación de distinguir entre Israel y el territorio palestino ocupado desde 1967, como se afirma en la resolución [2334 \(2016\)](#) del Consejo de Seguridad, así como por la Asamblea General y la Corte;

Esa obligación ha de cumplirse en el contexto de todas las relaciones diplomáticas, políticas, jurídicas, militares, económicas, comerciales y financieras con Israel, tal como se estipula en la resolución [ES-10/24](#). Los Estados y las organizaciones internacionales no deben reconocer ninguna política o medida de Israel para explotar los recursos naturales del Territorio Palestino Ocupado, cambiar su estatuto legal, demografía, carácter geográfico, estructura institucional e identidad, ni cooperar o ayudar en modo alguno a ello, ni afianzar y prolongar su control y ocupación ilegal del Territorio.

Ello debe incluir, de manera no exhaustiva, los siguientes:

i) Los Estados y las organizaciones internacionales deben abstenerse de mantener relaciones convencionales con Israel en todos los casos en que pretenda actuar en nombre del Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, o partes del mismo;

ii) En vista de la ilegalidad de esta ocupación, que lleva 57 años, y del flagrante desprecio de Israel a la comunidad internacional, incluidos el Consejo de Seguridad, la Asamblea General y la Corte Internacional de Justicia, y del desafío al derecho internacional, los Estados respetuosos de la ley que mantienen relaciones diplomáticas con Israel deben considerar urgentemente su suspensión. En los casos en que no se adopten dichas medidas, los Estados y organizaciones internacionales que mantengan relaciones diplomáticas con Israel deberán garantizar que todos los tratados, memorandos de entendimiento, acuerdos económicos, acuerdos militares, acuerdos comerciales, intercambios culturales y científicos y cualquier otro acuerdo de este tipo con Israel especifiquen que no abarcan el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y que Israel no tiene soberanía en ninguna parte del Territorio;

iii) Los Estados y las organizaciones internacionales deben negarse a firmar acuerdos con Israel cuando éste rechace la inclusión de una cláusula explícita de ese tipo, deben anular los acuerdos ya firmados que no incluyan dicha cláusula explícita y que Israel se niegue a modificar como corresponde, y deben retirar las representaciones diplomáticas y poner fin a los proyectos conjuntos en caso de que Israel rechace dicha aclaración explícita en los términos de referencia;

iv) Los Estados y las organizaciones internacionales que establezcan y mantengan misiones diplomáticas en Israel deben abstenerse de cualquier

reconocimiento de la presencia ilegal de Israel en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental;

v) Los Estados que han trasladado sus embajadas de Tel Aviv a Jerusalén deben retirarlas de inmediato, respetando las resoluciones 478 (1980) y 2334 (2016) del Consejo de Seguridad, la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia y las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, incluida la resolución ES-10/24.

b) Los Estados y las organizaciones internacionales deben dar efecto práctico a la obligación de no prestar ayuda o asistencia para mantener la situación creada por la presencia ilegal de Israel en el Territorio. Ello debe incluir, entre otras cosas:

i) Aplicar sanciones, incluidas la prohibición de viajar y la congelación de activos, contra las personas físicas y jurídicas que contribuyan al mantenimiento de la presencia ilegal de Israel en el Territorio Palestino Ocupado, incluso en relación con la violencia de los colonos;

ii) Cesar todas las relaciones con los asentamientos israelíes establecidos en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, en grave violación del derecho internacional, incluido el cese de todo comercio con los asentamientos, toda prestación de servicios a los asentamientos y todo intercambio de servicios con los asentamientos;

iii) Cesar la importación de todo producto originario de los asentamientos israelíes. Las medidas a este respecto no deben limitarse al “etiquetado” de los productos de asentamiento, sino que deben ser los nacionales de los respectivos Estados quienes determinen la ilegalidad de dichos productos y actúen en consecuencia. Debe impedirse que los bienes israelíes producidos en los asentamientos y procedentes de la explotación de los recursos naturales del Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, lleguen a los mercados de los Estados;

iv) Poner fin a las relaciones económicas o comerciales o de las inversiones con Israel que puedan afianzar su presencia ilegal en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y también en lo referente a con los asentamientos y su régimen asociado.

v) Asegurar que sus nacionales, y las empresas y entidades bajo su jurisdicción, así como sus autoridades, no actúen de manera que suponga el reconocimiento de la situación creada por la presencia ilegal de Israel en el Territorio Palestino Ocupado ni presten ayuda o asistencia para mantener esa situación, incluida Jerusalén Oriental, incluso proporcionándoles orientación explícita y legislación a este respecto en consonancia con el derecho internacional.

c) Para proteger a la población civil palestina sometida a la ocupación israelí en todas las partes del Territorio Palestino Ocupado, incluida la Franja de Gaza, y acelerar el fin de esa ocupación ilegal es necesario un embargo de armas inmediato contra Israel.

Todos los Estados y organizaciones internacionales deben actuar para poner fin a todas las transferencias de armas, municiones y equipo conexo que Israel, la Potencia ocupante, está utilizando en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, para oprimir, perseguir y perjudicar al pueblo palestino, para dar muerte, lesionar y mutilar a niños, mujeres y hombres palestinos, para arrestarlos, detenerlos y encarcelarlos, para confiscar y destruir propiedades palestinas, para construir asentamientos y el muro, para desplazar por la fuerza a civiles palestinos, para

explotar sus recursos naturales, para colonizar y anexionarse las tierras palestinas y para prolongar esta ocupación ilegal en todas sus manifestaciones.

Con el fin de movilizar la acción internacional en este sentido, el Estado de Palestina es uno de los más de 50 signatarios de la carta conjunta, publicada el 1 de noviembre de 2024, en la que se pide el cese inmediato de las transferencias de armas a Israel. Palestina insta a más Estados a unirse a esa coalición de países y organizaciones que se han comprometido a actuar para detener el suministro incesante de armas que se proporciona a Israel en respuesta a las obligaciones afirmadas en la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia y la resolución [ES-10/24](#) de la Asamblea General, con el fin de detener las atrocidades masivas y la devastación que está infligiendo Israel a una población civil indefensa, apoyar las demandas y los esfuerzos para un alto el fuego inmediato a la horrible violencia, y acelerar el fin de esta situación ilegal.

d) Además de detener la transferencia de armas y municiones y equipo conexo a la Potencia ocupante, para velar por la protección del pueblo palestino, en cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional humanitario, incluido el Cuarto Convenio de Ginebra, es preciso establecer rápidamente mecanismos de protección.

La Conferencia de las Altas Partes Contratantes del Cuarto Convenio de Ginebra, convocada por la resolución [ES-10/24](#) de la Asamblea General, debe realizar una contribución significativa en este sentido. La Conferencia debe convocarse sin más demora y las Altas Partes Contratantes han de elaborar y adoptar medidas concretas para hacer cumplir el Convenio en el Territorio Palestino Ocupado, incluidas, entre otras, medidas para proteger al pueblo palestino bajo la ocupación ilegal de Israel.

Además de las numerosas resoluciones pertinentes relativas a la protección de civiles, el informe del Secretario General sobre la protección de la población civil palestina ([A/ES-10/794](#)) ofrece opciones tangibles de protección que deben examinarse y aplicarse urgentemente. El envío de “Protección de civiles desarmados”, en consonancia con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad que citan la protección de civiles desarmados como herramienta para crear un entorno protector, debería figurar entre los medios considerados para proteger a los civiles palestinos, aliviar las tensiones y evitar nuevos actos de violencia contra ellos por parte de las fuerzas de ocupación y los colonos israelíes.

e) La protección también implica garantizar la asistencia humanitaria a la población civil palestina bajo la ocupación de Israel en vista de la violación sistemática, y de hecho la flagrante abrogación, por parte de la Potencia ocupante, de sus obligaciones en virtud del derecho internacional, incluido el derecho humanitario, de velar por el bienestar y la seguridad de la población.

A ese respecto, el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA) sigue siendo indispensable. Los programas humanitarios y de desarrollo y la ayuda de emergencia del Organismo son absolutamente vitales para los 6 millones de refugiados palestinos registrados en los cinco campos de operación, siendo la situación más grave la que afrontan actualmente los refugiados en tres de los campos: en la Franja de Gaza y la Ribera Occidental, incluida Jerusalén Oriental, y en el Líbano como consecuencia de las agresiones militares y otras infracciones de Israel.

El mandato del UNRWA debe ser preservado y reforzado, política y financieramente, y habilitado para llevar a cabo su misión humanitaria en todos los campos de operación de acuerdo con las obligaciones humanitarias internacionales y la responsabilidad permanente de las Naciones Unidas hacia la cuestión de Palestina hasta que se resuelva de forma justa en todos sus aspectos, incluida una solución justa para la difícil situación de los refugiados de Palestina en virtud de la resolución

194 (III) de la Asamblea General, que consagra su derecho al retorno y a una compensación justa.

Los esfuerzos para preservar y fortalecer el UNRWA deben también incluir la exigencia del cese de los ataques de Israel contra el Organismo, incluidos los ataques contra su personal, locales y bienes, el cese de su campaña dirigida a desacreditar, difamar y socavar al Organismo, y el cese de sus nefastos intentos de forzar el colapso del Organismo y poner fin a su mandato, especialmente en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental.

Entre dichos intentos cabe mencionar los recientes actos “legislativos” en la Knesset israelí dirigidos a anular el acuerdo de 1967 entre el UNRWA e Israel, despojando al Organismo de sus prerrogativas e inmunidades, desalojándolo de sus instalaciones en la Jerusalén Oriental ocupada, proscribiendo y obstaculizando en la práctica sus operaciones con graves repercusiones para los millones de refugiados palestinos para quienes el UNRWA es el único salvavidas, especialmente en Gaza, donde toda la población civil está sufriendo una catástrofe humanitaria sin precedentes en un lugar reducido a escombros y ruinas por Israel, que ha destruido más del 80 % de la infraestructura civil y desplazado al 90 % de la población, y necesita desesperadamente la asistencia vital del UNRWA, incluidos refugio, alimentos, agua, medicinas y otros elementos esenciales para la mera supervivencia.

Los Estados deben exigir que Israel rescinda todas esas medidas contra el Organismo y cumpla con sus obligaciones en virtud de la Carta, la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas y el derecho internacional humanitario, y deben exigir que Israel cese los ataques contra el UNRWA, cese la obstrucción de sus operaciones en la Franja de Gaza y la Ribera Occidental, incluida Jerusalén Oriental, y facilite inmediatamente el acceso humanitario seguro y sin trabas.

Los Estados también deben actuar colectivamente para que Israel rinda cuentas de todas sus violaciones a este respecto. En ese sentido, las Naciones Unidas deben emprender investigaciones inmediatas, independientes y transparentes de todos los ataques perpetrados por Israel contra el personal y las instalaciones y propiedades del UNRWA con el fin de garantizar la plena rendición de cuentas y la reparación íntegra.

f) Teniendo en cuenta la conclusión de la Corte Internacional de Justicia de que Israel, la Potencia ocupante, infringe el artículo 3 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, relativo a la prohibición de la segregación racial y el *apartheid*, todos los Estados y las Naciones Unidas deben actuar de inmediato para garantizar la rendición de cuentas y poner fin a todos esos abominables actos de discriminación.

En ese sentido, el Estado de Palestina pide la rápida reconstitución del Comité Especial de las Naciones Unidas contra el *Apartheid*. Esa acción contribuirá de manera significativa a aunar esfuerzos colectivos para poner fin a la discriminación sistémica perpetrada por Israel contra el pueblo palestino por motivos de raza, religión u origen étnico, entre otros, lo que sin duda equivale a un *apartheid*, y para que Israel cumpla con sus obligaciones en virtud del derecho internacional. Todos los Estados deben apoyar la reconstitución del Comité Especial para corregir esa situación ilegal y promover el respeto de los derechos del pueblo palestino, incluido el derecho a la libre determinación y a vivir libre de discriminación racial, segregación y *apartheid*.

g) Con respecto al llamamiento de la Asamblea General para que se apoyen los esfuerzos de rendición de cuentas de todas las víctimas, todos los Estados y organizaciones internacionales, incluidas las Naciones Unidas, deben cooperar plenamente con los procesos judiciales en curso, tanto en la Corte Internacional de Justicia, en el caso presentado por Sudáfrica en virtud de la Convención contra el

Genocidio, como en la Corte Penal Internacional, donde está en curso la investigación sobre la situación en Palestina y donde el fiscal ha solicitado órdenes de detención contra el Primer Ministro israelí y el ahora ex Ministro de Defensa israelí, que siguen sin cumplirse.

Además, todos los Estados y organizaciones internacionales deben apoyar el envío de investigaciones independientes acordes con las normas internacionales para recopilar pruebas de las atrocidades cometidas por Israel, la Potencia ocupante, contra la población civil palestina durante las casi seis décadas de su ocupación ilegal del Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y también en los últimos 13 meses en la Franja de Gaza, donde el alcance y la escala de las violaciones y crímenes de guerra de Israel han alcanzado niveles sin precedentes y, sin embargo, sigue sin haber rendición de cuentas.

Con ese fin, también se debe instar a todos los Estados a que presten apoyo a la Comisión Internacional Independiente de Investigación del Consejo de Derechos Humanos sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y en Israel, así como al Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, habida cuenta de sus mandatos y de la importante labor que están realizando para llevar a cabo investigaciones y recabar pruebas colectivas sobre las violaciones de los derechos humanos y las graves infracciones que está perpetrando Israel, la Potencia ocupante.

Además de las investigaciones, la creación de un tribunal judicial internacional sería crucial para determinar el alcance de esas atrocidades y el impacto en las víctimas. Ambos mecanismos deben aplicarse para promover la rendición de cuentas y determinar las reparaciones que Israel debe al pueblo palestino por todos los daños y pérdidas que le ha infligido.

A este respecto, cabe recordar que en su opinión consultiva la Corte Internacional de Justicia subrayó la obligación de Israel de “reparar los daños causados a todas las personas físicas o jurídicas afectadas en el Territorio Palestino Ocupado”. Por otra parte, la Asamblea General, en su resolución [ES-10/24](#), reconoció la necesidad de “establecer un mecanismo internacional de reparación de todos los daños, pérdidas o perjuicios derivados de los hechos internacionalmente ilícitos de Israel en el Territorio Palestino Ocupado, y pide que los Estados Miembros, en coordinación con las Naciones Unidas y sus órganos pertinentes, creen un registro internacional de daños para consignar, en forma documental, pruebas e información sobre reclamaciones en relación con los daños, las pérdidas y los perjuicios causados a todas las personas físicas y jurídicas afectadas, así como al pueblo palestino, por los hechos internacionalmente ilícitos cometidos por Israel en el Territorio Palestino Ocupado, así como para promover y coordinar la recopilación de pruebas y las iniciativas destinadas a asegurar tal reparación por Israel”. Todos los Estados deben apoyar el rápido establecimiento de tales mecanismos para garantizar la rendición de cuentas y la justicia, y deben prestar a dichos mecanismos su plena cooperación, en consonancia con las obligaciones jurídicas internacionales.

h) Teniendo en cuenta el llamamiento hecho por la Asamblea General en su resolución [ES-10/24](#) a todos los Estados a que cumplan las obligaciones que les incumben en virtud del derecho internacional, entre otras las que se contemplan en la opinión consultiva, incluida su obligación de promover, mediante acciones conjuntas o individuales, la realización del derecho del pueblo palestino a la libre determinación, cuyo respeto es una obligación *erga omnes*, y abstenerse de toda acción que prive al pueblo palestino de este derecho y, respetando la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, velar por que se ponga fin a todo impedimento resultante de la presencia ilegal de Israel en el Territorio Palestino Ocupado para el ejercicio por el pueblo palestino de su derecho a la libre

determinación y recordando que la Corte Internacional de Justicia, en su opinión consultiva, afirmó que el derecho del pueblo palestino a la libre determinación es inalienable y no puede estar sujeto a condiciones por parte de la Potencia ocupante, el Estado de Palestina insta a que se emprendan inmediatamente, entre otras, las siguientes acciones:

- i) Reconocimiento del Estado de Palestina: todos los Estados que aún no hayan reconocido al Estado de Palestina deberían hacerlo inmediatamente en apoyo de la realización del derecho del pueblo palestino a la libre determinación. Además, tal acción sería un rechazo tangible de la presencia ilegal de Israel en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, privando a la Potencia ocupante de toda legitimidad para su presencia continuada en el mismo, reafirmando que no es la soberana en dicho Territorio y que no tiene ningún derecho de soberanía, y constituiría una contribución tangible a la obligación de poner fin rápidamente a esa ocupación ilegal y a la realización de la solución biestatal de conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas;
- ii) Apoyo a la admisión del Estado de Palestina como miembro de las Naciones Unidas: todos los Estados deben apoyar este paso que debería haberse dado hace tiempo, y deben eliminarse todos los obstáculos para su realización, respetando el derecho del pueblo palestino a la libre determinación, incluido el de su Estado independiente. Al igual que con el reconocimiento del Estado de Palestina, dicha acción sería coherente con las obligaciones legales internacionales, las resoluciones pertinentes y la solución biestatal; sería una contribución a la defensa del principio de inadmisibilidad de la adquisición de territorio por la fuerza, que debe respetarse y defenderse en todo momento de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas; y contribuiría a preservar y reforzar la integridad territorial y la unidad del Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, con vistas a poner fin a la ocupación ilegal de Israel y hasta que se ponga fin a dicha ocupación;
- iii) Apoyo al Comité de las Naciones Unidas para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino: todos los Estados deben apoyar el mandato y los esfuerzos del Comité, incluso incorporándose a él, con miras a acelerar la realización de los derechos del pueblo palestino y una solución justa y duradera para la cuestión de Palestina en todos sus aspectos sobre la base del derecho internacional y las resoluciones pertinentes. El Comité representa la esencia del multilateralismo y los propósitos y principios de la Carta, buscando el diálogo y la diplomacia, aumentando la concienciación y el entendimiento, y promoviendo la acción internacional sobre la base del derecho internacional y el respeto de los derechos humanos para la realización de la justicia y la paz. Debe ponerse fin al estigma que algunos Estados atribuyen al Comité, y las Naciones Unidas han de seguir proporcionándole los recursos necesarios para cumplir su importante mandato. El compromiso y la contribución del Comité a la defensa del derecho internacional y a la búsqueda de la justicia y la paz existen y deben ser apoyados y reforzados.
- i) La implementación de la resolución [ES-10/24](#) hace necesario también tomar medidas para convocar una conferencia internacional bajo los auspicios de la Asamblea General para la aplicación de las resoluciones de las Naciones Unidas relativas a la cuestión de Palestina y la solución biestatal con el fin de lograr una paz justa, duradera y general en Oriente Medio. El Estado de Palestina colabora con todas las delegaciones para promover el cumplimiento de esta disposición de la resolución lo antes posible y presentará un proyecto de resolución en la Asamblea para avanzar en su aplicación. Todos los Estados deberían apoyar ese esfuerzo y comprometerse

de la forma más constructiva y activa posible para garantizar su rápida y exitosa convocatoria hacia el cumplimiento de sus cruciales objetivos declarados.

j) La aplicación de la resolución [ES-10/24](#) requiere todas las acciones indicadas anteriormente, además de otras medidas coherentes con las obligaciones derivadas del derecho internacional.

En este sentido, teniendo en cuenta las violaciones sistemáticas y flagrantes por parte de Israel de la Carta, de todas las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y de todos los demás principios del derecho internacional, y su incitación y ataques deliberados y continuos contra el UNRWA y contra las Naciones Unidas en su conjunto, incluidos, entre otros, su declaración hostil del Secretario General como *persona non grata* y otros actos hostiles y continuos contra funcionarios de las Naciones Unidas, incluida la denegación de visados y de acceso al Territorio Palestino Ocupado, que afectan al Comisionado General del UNRWA, a funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, a los Relatores Especiales de las Naciones Unidas y a la Comisión de Investigación, entre otros, así como contra diplomáticos de otros países, junto con su flagrante campaña de difamación contra las Naciones Unidas y su demostrada falta de respeto a todos sus órganos principales, debe examinarse seriamente la elegibilidad de Israel para seguir ocupando un escaño en la Asamblea General.

Un Estado Miembro que actúa en total contradicción con la Carta, despreciando a todos los órganos y organismos de las Naciones Unidas, incluidos el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, el Consejo de Derechos Humanos, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional, y ataca a los organismos de la Organización, como el UNRWA, e incita contra el Secretario General y otros funcionarios de las Naciones Unidas, no merece permanecer en la Asamblea General haciendo uso de sus beneficios y privilegios, al tiempo que incumple todas sus obligaciones. Todos los Estados Miembros deben cumplir de buena fe las obligaciones asumidas por ellos de conformidad con la Carta, incluida la de aceptar y ejecutar las decisiones del Consejo de Seguridad; el incumplimiento sistemático, deliberado y flagrante de esas obligaciones, junto con los ataques directos contra la propia Organización, deben acarrear consecuencias. Por lo tanto, ya es hora de que los Estados consideren la posibilidad de suspender a Israel de la Asamblea.

El Estado de Palestina concluye reafirmando su agradecimiento al Secretario General por su liderazgo, por sus incesantes llamamientos en favor de un alto el fuego inmediato y permanente en Gaza y del pleno respeto del derecho internacional, incluido el derecho humanitario y el derecho de los derechos humanos, en la totalidad del Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y por sus prolongados esfuerzos para promover una solución justa y duradera para la cuestión de Palestina de conformidad con el derecho internacional y las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas.

El Estado de Palestina espera con interés el informe que presentará el Secretario General a la Asamblea General de conformidad con la resolución [ES-10/24](#), así como todas las demás iniciativas de seguimiento que realizarán las Naciones Unidas con respecto a las obligaciones derivadas de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, y subraya la importancia de esas contribuciones a los esfuerzos colectivos de la comunidad internacional para poner fin a la ocupación ilegal de Israel y garantizar la realización de los derechos inalienables del pueblo palestino, incluidos el derecho a la libre determinación y a la libertad, y el establecimiento de la justicia y la paz, pendientes desde hace mucho tiempo.

Federación de Rusia

[Original: ruso]
[11 de noviembre de 2024]

En 1995 se abrió en la Franja de Gaza la Oficina de Representación de la Federación de Rusia ante la Autoridad Nacional Palestina. En 2004 fue trasladada a Ramala, en la Ribera Occidental. El Centro de Ciencia y Cultura de Rusia también opera en Belén.

La Federación de Rusia apoya el funcionamiento del Registro de las Naciones Unidas de los Daños y Perjuicios Causados por la Construcción del Muro en el Territorio Palestino Ocupado. La Federación de Rusia considera que la aplicación del párrafo 10 de la resolución [ES-10/24](#), mediante la creación de otro órgano o la habilitación de dicho Registro, es competencia de la Secretaría de las Naciones Unidas y debe abordarse en coordinación con los países interesados, ante todo el Estado de Palestina.

Finlandia

[Original: inglés]
[8 de noviembre de 2024]

Finlandia hace referencia a la contribución de la Unión Europea al presente informe. La política de Finlandia se ajusta a las medidas contenidas en la aportación de la Unión Europea.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia actualizó sus directrices dirigidas a las empresas finlandesas en abril de 2024 para recordarles el estatuto jurídico de los asentamientos israelíes, los riesgos empresariales asociados y la política establecida por la Unión Europea de diferenciar entre Israel en las fronteras de 1967 y el Territorio Palestino Ocupado.

Francia

[Original: francés]
[7 de noviembre de 2024]

Francia reitera su apoyo constante a una solución biestatal negociada, en virtud de la cual los dos Estados convivan dentro de las fronteras seguras y reconocidas del 4 de junio de 1967, con Jerusalén como capital compartida. Para Francia, sólo una solución política biestatal permite atender al mismo tiempo al derecho de los israelíes a la seguridad y a las aspiraciones legítimas de los palestinos a un Estado independiente, viable y contiguo, que viva en paz y seguridad al lado de Israel. Para lograr ese objetivo, Francia hace un llamamiento a favor de una reanudación decisiva y creíble del proceso de paz.

Francia aboga por el respeto del derecho internacional. Reafirma su pleno apoyo a la Corte Internacional de Justicia. Como ya indicó en su dictamen consultivo de julio de 2024, la colonización de los territorios palestinos, incluida Jerusalén Oriental, constituye una violación del derecho internacional.

Francia reitera su firme condena de la política ilegal de colonización puesta en marcha por Israel. Esa política, que comprende igualmente los desalojos de familias palestinas y la destrucción de estructuras palestinas, debe cesar. Francia no reconocerá jamás la anexión ilegal de territorios, ni la legalización de los asentamientos ilegales.

Política de diferenciación

Francia vela por el respeto de la resolución [2334 \(2016\)](#) del Consejo de Seguridad, cuyo objetivo es establecer la distinción entre el territorio de Israel reconocido por la comunidad internacional y los territorios ocupados desde 1967.

A fin de diferenciar el territorio del Estado de Israel en sus fronteras del 4 de junio de 1967 y los territorios palestinos ocupados, Francia aplica las medidas concretas que se han tomado a nivel europeo, de conformidad con el derecho internacional.

Junto con varios de sus asociados europeos, Francia publica recomendaciones para las empresas y los ciudadanos sobre los riesgos jurídicos, financieros y de reputación que entrañan las actividades en los asentamientos.

Por otra parte, desde 2014 se aplican las líneas directrices de la Comisión Europea que excluyen toda financiación europea a las entidades israelíes activas en los asentamientos. Además, en virtud del derecho de la Unión Europea, los productos israelíes procedentes de los asentamientos no podrían beneficiarse de las preferencias aduaneras reservadas a los productos provenientes del territorio de Israel. La política de diferenciación aplicada en el marco europeo se concretiza asimismo en la obligación de etiquetado de los productos alimenticios procedentes de los asentamientos israelíes.

Por otra parte, Francia actúa con la mayor vigilancia en la aplicación de sus acuerdos bilaterales con Israel.

Sanciones contra los colonos israelíes violentos

Francia aprobó sanciones contra los colonos israelíes que cometan actos de violencia contra civiles palestinos en la Ribera Occidental. Continuará haciéndolo y movilizándolo a la Unión Europea en ese sentido mientras no cesen esos actos.

Votos de Francia en la Asamblea General y en el Consejo de Seguridad

Francia votó el 18 de septiembre de 2024 a favor de la resolución [ES-10/24](#) de la Asamblea General relativa a la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 19 de julio de 2024.

El Presidente de la República Francesa acogió con satisfacción la aprobación por la Asamblea General de esta resolución, que Francia ha apoyado plenamente.

Además, Francia ha apoyado ante el Consejo de Seguridad y la Asamblea General la admisión de Palestina como miembro de pleno derecho de la Organización de las Naciones Unidas y el fortalecimiento de sus derechos:

- Voto a favor del proyecto de resolución presentado al Consejo de Seguridad por el que se propone la admisión de Palestina como miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas (18 de abril de 2024);
- Voto a favor de la resolución de la Asamblea General ([ES-10/23](#)) sobre el fortalecimiento de los derechos de Palestina (10 de mayo de 2024).

Por último, Francia votó a favor de cuatro resoluciones aprobadas por el Consejo de Seguridad sobre la situación en Gaza desde el 7 de octubre de 2023:

- i) Resolución [2712 \(2023\)](#) (15 de noviembre de 2023);
- ii) Resolución [2720 \(2023\)](#) (22 de diciembre de 2023);
- iii) Resolución [2728 \(2024\)](#) (25 de marzo de 2024);
- iv) Resolución [2735 \(2024\)](#) (10 de junio de 2023).

Indonesia

[Original: inglés]
[8 de noviembre de 2024]

Introducción

El 18 de septiembre de 2024, la Asamblea General aprobó la resolución [ES-10/24](#) titulada “Opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas que se derivan de las políticas y prácticas de Israel en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y de la ilegalidad de la presencia continuada de Israel en el Territorio Palestino Ocupado”.

En el párrafo 17 de la resolución [ES-10/24](#), la Asamblea General pide al Secretario General que presente a la Asamblea, en un plazo de tres meses, un informe sobre la aplicación de la resolución, incluidas las medidas adoptadas por los Estados Miembros para la aplicación de sus disposiciones o por cualquier violación de las mismas.

A continuación, la Secretaría, por medio de una nota verbal de 11 de octubre de 2024, solicitó a los Estados Miembros que brindaran información acerca de las medidas que sus gobiernos hubieran adoptado, o tuvieran previsto adoptar, en lo referente a la aplicación de las disposiciones pertinentes de la resolución, en particular los párrafos 4, 5 y 10, que están dirigidos a los Estados Miembros.

La siguiente información resume las medidas adoptadas o previstas por el Gobierno de la República de Indonesia para salvaguardar y garantizar la aplicación efectiva de la resolución, con la siguiente estructura:

- a) Visión y objetivos rectores;
- b) Medidas adoptadas por el Gobierno de Indonesia;
- c) Solicitudes de nuevas medidas formuladas por el Secretario General.

A. Visión rectora y objetivos finales

El Gobierno de la República de Indonesia aspira a la paz, la seguridad y la estabilidad perpetuas en la región, en la que el pueblo del Estado de Palestina pueda vivir y prosperar dignamente con plena soberanía e independencia, y encontrarse en pie de igualdad con las demás naciones.

Indonesia cree que esa misma visión se refleja en la opinión consultiva y en la resolución citadas.

Para hacer realidad esa visión, la comunidad mundial de naciones, en el marco de las Naciones Unidas, debe trabajar de consuno para lograr los objetivos de:

- a) **Primero, obtener el reconocimiento pleno e incondicional del Estado de Palestina.** Este reconocimiento del Estado de Palestina es de suma importancia, ya que hace valer los derechos del pueblo palestino a la soberanía y a la libre determinación. Además, la condición de miembro de pleno derecho del Estado de Palestina en las Naciones Unidas garantizará que tanto Israel como Palestina queden en pie de igualdad en las negociaciones de paz;
- b) **Segundo, salvaguardar la solución biestatal** en consonancia con los acuerdos internacionales y las resoluciones de las Naciones Unidas, y rechazar todo intento por parte de Israel y de cualesquiera otros de negar, ignorar o disminuir la viabilidad de la solución biestatal;
- c) **Tercero, en vista de la actual crisis en Gaza, deben tomarse medidas inmediatas para garantizar un alto el fuego**, entre otras cosas deteniendo todas las

transferencias de armas a Israel y poniendo fin a la violencia y el genocidio en curso. El alto el fuego también debe garantizar el flujo sin trabas de una asistencia humanitaria ampliada, que es fundamental para aliviar el sufrimiento sobre el terreno.

En el Territorio Palestino Ocupado en sentido amplio deben tomarse medidas inmediatas para detener y revertir los asentamientos ilegales, poner fin a las políticas y acciones deliberadas y sistemáticas de *apartheid* del Gobierno de Israel y garantizar el cumplimiento del derecho a la libre determinación del pueblo palestino;

d) **Cuarto, defender a las Naciones Unidas junto con sus órganos y organismos, incluida la protección del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA)**, garantizar el funcionamiento eficaz de todos sus mandatos, y velar por la inviolabilidad de la Corte Internacional de Justicia tanto en sus decisiones como en sus opiniones consultivas;

e) **Quinto, poner fin a la impunidad y garantizar la rendición de cuentas por los atroces crímenes cometidos**, y abordar el doble rasero que ha hecho posible que persistan las violaciones del derecho internacional y del derecho internacional humanitario. La justicia exige la aplicación del derecho internacional sin excepciones.

B. Medidas adoptadas por el Gobierno de Indonesia

Resolución ES-10/24, párrafo 4: medidas adoptadas por Indonesia en cumplimiento de su obligación en virtud del derecho internacional, tal como se refleja en la opinión consultiva

Indonesia ha venido impulsando las iniciativas internacionales para dar prioridad y hacer posible la aplicación efectiva de la resolución, por ejemplo:

a) En el marco de la Asamblea General, Indonesia ha mantenido su determinación de apoyar todas las resoluciones que aborden la situación en Palestina tras los sucesos del 7 de octubre de 2023. Esa firme postura refleja la dedicación de Indonesia a los esfuerzos multilaterales encaminados a lograr la paz, la seguridad y la protección de los derechos de los palestinos en el marco de los principios del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas;

b) En su carácter de miembro de la Organización de Cooperación Islámica y como parte del comité ministerial conjunto árabe e islámico sobre Gaza, Indonesia sigue esforzándose en nombre de la Organización de Cooperación Islámica y de la Liga de Estados Árabes para sensibilizar a los principales líderes y actores mundiales sobre la necesidad de aplicar las medidas establecidas en la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia. El papel de Indonesia quedó en claro, entre otras cosas, cuando se pidió al Ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia que reforzara la campaña internacional del grupo para defender el derecho del pueblo palestino, junto con algunos ministros de relaciones exteriores selectos de la Organización de Cooperación Islámica;

c) En su carácter de Estado miembro del Movimiento de Países No Alineados y su Comité sobre Palestina, Indonesia alienta firmemente a los demás Estados miembros a que hagan uso de su influencia para fomentar un mayor reconocimiento internacional de Palestina. Indonesia aboga también por que se redoblen las iniciativas multilaterales para avanzar en la aplicación de las medidas articuladas en la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, tal como se reafirma en la resolución ES-10/24 de la Asamblea General;

d) En su calidad de Vicepresidente del Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino, Indonesia sigue colaborando con el

Comité para impulsar la aplicación efectiva de la resolución [ES-10/24](#) en el programa de trabajo 2025 del Comité, incluyendo entre otras cosas:

- i) Lograr el reconocimiento pleno del Estado de Palestina;
- ii) Hacer un llamamiento a todos los Estados para que impongan a Israel un embargo de armas y municiones;
- iii) Examinar mecanismos para reactivar el comité contra el “Comité Especial contra el *Apartheid* y para hacerle frente en Israel”.

e) En su carácter de miembro actual del Consejo de Derechos Humanos, Indonesia considera la resolución de la cuestión palestina su máxima prioridad. Indonesia expresa sistemáticamente su apoyo a la independencia de Palestina y su oposición a la ocupación ilegal por Israel en todos los temas pertinentes del programa del Consejo de Derechos Humanos.

Indonesia insta a un alto el fuego inmediato, pide una aplicación coherente del derecho internacional y del derecho internacional humanitario sin dobles raseros, insta a que se abra el acceso humanitario a las poblaciones afectadas y apoya un fortalecimiento del papel del Consejo de Derechos Humanos a la hora de abordar las violaciones de los derechos humanos en Palestina. Además, Indonesia reafirma que la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia prescribe obligaciones para todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas e impulsa su aplicación efectiva;

f) En diversas declaraciones en distintos foros, Indonesia ha reiterado la necesidad de una aplicación inmediata y efectiva de la resolución [ES-10/24](#). En este sentido, Indonesia ha venido pidiendo el alto el fuego inmediato en Gaza junto con una ayuda humanitaria ampliada y sin trabas, la salvaguarda de la solución biestatal y el fin del genocidio en curso, del *apartheid* y de otras formas de atrocidades humanitarias por parte de Israel, así como el fin y la reversión de los asentamientos ilegales israelíes, entre otras medidas;

g) El inquebrantable compromiso de Indonesia con la causa palestina se mantiene firme en el nuevo Gobierno de Indonesia. El 20 de octubre de 2024, tanto la recién inaugurada Asamblea Consultiva Popular como el Presidente de la República de Indonesia reafirmaron la determinación de Indonesia de apoyar y salvaguardar los derechos del pueblo palestino. Indonesia defiende los principios del anticolonialismo y la lucha contra la opresión y se solidariza con la comunidad internacional para defender a quienes sufren injusticias en todo el mundo. En consonancia con esos principios, Indonesia apoya plenamente la realización de un Estado de Palestina independiente y soberano.

Resolución [ES-10/24](#), párrafo 4 a): promover el derecho de los palestinos a la libre determinación y poner fin a todo obstáculo provocado por la presencia ilegal de Israel en el Territorio Palestino Ocupado

En consonancia con el mandato de la Constitución de 1945 de la República de Indonesia, que establece su firme postura contra toda forma de colonialismo, y en virtud de su defensa y dedicación históricas a la justicia global y los derechos humanos, la postura de Indonesia sigue siendo clara: se opone firmemente a la ocupación ilegal de Israel en el Territorio Palestino Ocupado y a las violaciones de los derechos humanos y de las libertades fundamentales del pueblo palestino, incluido el derecho de los palestinos a la libre determinación.

Indonesia se enorgullece de figurar entre los primeros países que reconocieron la independencia del Estado de Palestina el 15 de noviembre de 1988.

Indonesia hace hincapié en que la causa fundamental del conflicto palestino-israelí es la ocupación ilegal por parte de Israel. A este respecto, Indonesia ha desempeñado un papel activo en la movilización del apoyo internacional para poner fin a la ocupación ilegal. Además de las medidas indicadas en el párrafo 8, Indonesia también ha adoptado, entre otras, las siguientes:

- a) En junio de 2020, la Cámara de Representantes de Indonesia inició una declaración conjunta firmada por los parlamentarios de todo el mundo contra la anexión por Israel de los territorios palestinos;
- b) El 16 de mayo de 2021, Indonesia, junto con Malasia y Brunei Darussalam, emitió la “Declaración conjunta de líderes sobre la escalada de violencia por parte de israelíes en el Territorio Palestino Ocupado”, que entre otras cosas:
 - i) Condena la expansión ilegal de los asentamientos y las demoliciones e incautaciones de estructuras de propiedad palestina en toda la Ribera Occidental ocupada, incluida Jerusalén Oriental;
 - ii) Insta a las partes a que acepten una presencia internacional temporal en la ciudad de Al-Quds, a fin de que verifique la cesación de las hostilidades en el Territorio Palestino Ocupado.

Como parte de la Mesa del Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino, Indonesia apoya la decisión de la Mesa de explorar la posibilidad de celebrar la próxima Conferencia Internacional sobre la Cuestión Jerusalén en 2025 para debatir las repercusiones de las políticas de asentamientos israelíes sobre la población palestina en Jerusalén.

Desde la adopción de la resolución [ES-10/24](#) el 19 de septiembre de 2024, el Ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia ha defendido activamente la causa palestina en numerosas reuniones internacionales, como la Organización de Cooperación Islámica, el Movimiento de Países No Alineados, la semana de alto nivel de la Asamblea General y en los compromisos bilaterales con los ministros de relaciones exteriores del Irán, Jordania y Arabia Saudita.

Ayuda de Indonesia a Palestina en apoyo del derecho palestino a la libre determinación

Palestina es uno de los mayores receptores y el principal objetivo de los programas de ayuda humanitaria y al desarrollo, cooperación técnica y ayuda exterior de Indonesia. La ayuda de Indonesia a Palestina tiene los siguientes objetivos:

- a) Apoyar la capacitación y el desarrollo de los recursos humanos del Estado de Palestina para garantizar su funcionamiento efectivo como Estado soberano e independiente;
- b) Ayudar a aliviar los sufrimientos y mejorar las condiciones humanitarias del pueblo palestino, especialmente de los refugiados palestinos;
- c) Ayudar a garantizar la aplicación y consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el pueblo palestino, garantizando así que los palestinos no se queden atrás y puedan vivir con dignidad.

Esa ayuda se ha proporcionado de muchas formas y a través de numerosos canales, incluso bilateralmente, a través de las Naciones Unidas (particularmente por medio del UNRWA), en el marco de programas de cooperación trilateral y a través de muchas otras iniciativas, como la Nueva Asociación Estratégica Asiática-Africana.

Indonesia, reafirmando su compromiso con la libre determinación económica de Palestina, firmó en 2017 y ratificó en 2018 un memorando de entendimiento sobre

facilitación del comercio de productos palestinos, eximiendo de aranceles a los dátiles y el aceite de oliva. Desde su entrada en vigor, el valor de las importaciones de dátiles palestinos ha aumentado un 130,98 %. Indonesia trabaja ahora para ampliar este acuerdo comercial preferencial de modo que incluya más productos palestinos, reforzando así los lazos económicos en solidaridad con Palestina.

En respuesta a la crisis de Gaza, Indonesia también ha intensificado de muchas maneras su ayuda humanitaria y sus contribuciones.

El apoyo de Indonesia a las organizaciones humanitarias en Gaza abarca lo siguiente:

a) Contribución de Indonesia al UNRWA:

i) Desde la crisis de Gaza en octubre de 2023, Indonesia ha aumentado su contribución anual a 600.000 dólares en 2023, frente a los 200.000 dólares anuales anteriores;

ii) A partir de 2024, esta contribución se ha incrementado a 1.200.000 dólares;

iii) Además, para responder a la grave situación humanitaria en Gaza y al llamamiento urgente del UNRWA para el período comprendido entre abril y diciembre de 2024, Indonesia proporcionará una subvención de 2 millones de dólares que se canalizará a través del UNRWA;

iv) Indonesia también ha aportado varias contribuciones voluntarias al UNRWA en numerosas ocasiones;

b) Indonesia ha firmado un acuerdo de subvención con el Comité Internacional de la Cruz Roja para proporcionar asistencia y protección a las personas afectadas por el conflicto armado y la violencia en los territorios palestinos ocupados, por un importe de 2.000.000 dólares;

c) En consonancia con su compromiso, Indonesia ha asignado una contribución voluntaria de 60.000 dólares a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), destinada específicamente a las actividades y mecanismos del Consejo de Derechos Humanos relacionados con la cuestión palestina.

La prestación y entrega de la ayuda humanitaria de Indonesia a Gaza comprende lo siguiente:

a) El Gobierno de Indonesia ha entregado ayuda humanitaria a Gaza en varias etapas, incluidos:

i) 90.41 toneladas de suministros (alimentos, vestimenta, saneamiento, material médico básico);

ii) aproximadamente 242 toneladas de mercancías valoradas en más de 1,5 millones de dólares (alimentos, vestimenta, suministros médicos) entregadas por un buque de la armada indonesia;

iii) 900 paracaídas utilizados en operaciones de lanzamiento aéreo para entregar ayuda en Gaza y 20 palés de ayuda con un peso de 3.200 kg a través de lanzamiento aéreo logístico en colaboración con Jordania;

iv) asistencia médica de emergencia por valor de 1 millón de dólares a través de Egipto;

b) También se está proporcionando ayuda humanitaria desde Indonesia a través de varias organizaciones no gubernamentales. La ayuda total de Indonesia

(gubernamental y no gubernamental) asciende a 4.553,1 toneladas de suministros o 11.047.663 dólares en valor;

c) Las ONG y los voluntarios indonesios también siguen gestionando el Hospital Indonesio de Gaza, en medio de situaciones muy difíciles;

d) La Fuerza médica militar indonesia para Gaza también ha cumplido activamente su misión humanitaria en la zona de conflicto prestando servicios sanitarios en el Hospital de Campaña de los Emiratos Árabes Unidos en Rafah (Palestina) y en el Hospital Flotante de los Emiratos en El Arish (Egipto):

i) Los servicios sanitarios no sólo ofrecen servicios médicos rutinarios, sino que también realizan intervenciones quirúrgicas y proporcionan servicios de fisioterapia, lo que contribuye aún más a la prestación de una asistencia sanitaria integral a los pacientes palestinos;

ii) Hasta la fecha, los hospitales de Rafah y El Arish han prestado tratamiento a 48.704 pacientes y han realizado 1.780 intervenciones quirúrgicas, lo que ejemplifica el compromiso de Indonesia de ayudar al pueblo palestino;

e) Indonesia también ha expresado su intención de enviar más equipos médicos y desplegar buques hospitales en Gaza, así como de proporcionar ayuda mediante lanzamientos aéreos;

i) Además, Indonesia se ha comprometido a evacuar hasta 1.000 pacientes a hospitales indonesios, ofreciéndoles tratamiento hasta que se recuperen y puedan regresar a Gaza en condiciones de seguridad;

ii) Indonesia también está dispuesta a apoyar la posible evacuación de niños, incluidos los huérfanos, para proporcionarles atención traumatológica y educación. Indonesia garantizará el regreso seguro de esos niños a Gaza una vez que se estabilice la situación;

f. Indonesia también ha prestado ayuda humanitaria a Gaza en colaboración con la Organización Hachemita de Beneficencia de Jordania. Se envió un total de 60 toneladas de ayuda, valoradas en unos 15.000 millones de rupias indonesias, por vía terrestre a través de Jordania. Ese paquete de ayuda incluye alimentos esenciales, kits de higiene y saneamiento, tiendas de campaña y suministros médicos, lo que refleja la firme solidaridad de Indonesia con el pueblo de Gaza;

g. Indonesia ha prometido una subvención de 500.000 dólares para Palestina a través del plan de respuesta de emergencia de la Organización Internacional del Trabajo, cuyo objetivo es apoyar la recuperación del sector del empleo en Gaza y la Ribera Occidental, gravemente afectado por el conflicto con Israel. Indonesia se ha comprometido a entregar esa subvención para finales de 2024, subrayando su firme compromiso de contribuir a los esfuerzos de resiliencia y recuperación de Palestina.

Resolución ES-10/24, párrafo 4 b): no reconocer como legal la situación derivada de la presencia ilegal de Israel en el Territorio Palestino Ocupado

Indonesia seguirá abogando por una solución biestatal en consonancia con las resoluciones de las Naciones Unidas y con los parámetros acordados internacionalmente, al tiempo que afirma categóricamente su compromiso de no reconocer los cambios unilaterales en el estatuto del Territorio Palestino Ocupado por parte de Israel.

Indonesia reafirma que cualquier cambio en el estatuto del Territorio Palestino Ocupado solo se reconocerá si es resultado de negociaciones directas entre las partes interesadas, como lo recalca el Consejo de Seguridad en la resolución 2334 (2016).

Indonesia, en su calidad de parte de la Organización de Cooperación Islámica, colaborará con la Liga de Estados Árabes para impulsar la pronta convocatoria de una Conferencia de las Altas Partes Contratantes en el Cuarto Convenio de Ginebra relativo a la Protección debida a las Personas Civiles en Tiempo de Guerra, con el fin de garantizar su aplicación en el Territorio Palestino Ocupado.

Además, la Organización de Cooperación Islámica intensificará sus esfuerzos con las organizaciones regionales y las principales partes interesadas para acelerar la convocatoria de una conferencia internacional dirigida a poner fin a la ocupación israelí e instaurar la solución biestatal.

Resolución ES-10/24, párrafo 4 c): no prestar ayuda ni asistencia para mantener la situación creada por la presencia ilegal de Israel en el Territorio

Indonesia se compromete a aplicar medidas estrictas para garantizar que los ciudadanos, empresas y entidades indonesios sometidas a su jurisdicción no realicen ninguna acción que pueda interpretarse como reconocimiento o apoyo a la presencia ilegal de Israel en el Territorio Palestino Ocupado.

Indonesia puso en marcha la Declaración de Yakarta sobre Palestina y Al-Quds Al-Sharif, aprobada durante la V Cumbre Islámica Extraordinaria sobre Palestina y Al-Quds Al-Sharif el 7 de marzo de 2016, que contiene compromisos de llevar a cabo acciones concretas que deben adoptarse colectivamente para la realización de los derechos inalienables del pueblo palestino, incluidos llamamientos a la comunidad internacional para que apoye el boicot a los productos fabricados en o por los asentamientos ilegales israelíes. La Declaración sirve de impulso a la resolución 1/44-IBO de la Organización de Cooperación Islámica sobre la Oficina Islámica para el Boicot a Israel.

Resolución ES-10/24, párrafo 4 d): no reconocer ningún cambio en el carácter físico o la composición demográfica, la estructura institucional o el estatuto del territorio ocupado por Israel el 5 de junio de 1967

Indonesia no mantiene relaciones diplomáticas con Israel, lo que refleja su compromiso con una resolución justa de la cuestión palestina conforme al derecho internacional. En virtud de la resolución 478 (1980) del Consejo de Seguridad, Indonesia no reconoce la reivindicación de Israel sobre Jerusalén.

Resolución ES-10/24, párrafo 4 e): cumplir el derecho internacional humanitario (incluido el Cuarto Convenio de Ginebra)

Indonesia ha intensificado su asistencia humanitaria al pueblo palestino, como se explicó anteriormente. Indonesia también ha condenado todos los actos de violación del derecho internacional humanitario, incluidos los ataques a civiles inocentes, así como a trabajadores humanitarios, instalaciones y bienes de carácter civil, en particular hospitales, escuelas y campamentos de refugiados.

Indonesia lamenta que algunas partes de la comunidad internacional sigan mostrando un doble rasero que ha permitido que sigan produciéndose violaciones tan graves del derecho internacional humanitario contra el pueblo palestino.

Indonesia sigue afirmando que lo que está ocurriendo en Gaza en estos momentos es un genocidio: actos deliberados, intencionados y sistemáticos emprendidos por Israel para destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso (en este contexto, el pueblo palestino), tal como se define en el artículo 2 de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.

El número de muertos, que ha superado los 43.300 (a 2 de noviembre de 2024), junto con los ataques deliberados contra civiles e infraestructuras civiles (incluidos hospitales, escuelas y campamentos de refugiados), así como la obstrucción y los ataques deliberados contra la asistencia humanitaria, los trabajadores humanitarios y las instalaciones humanitarias, constituye una prueba clara de ese genocidio.

Importancia fundamental del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente y los derechos de los refugiados palestinos, incluido su derecho al retorno como pilar clave de la solución biestatal

Indonesia sigue abogando por el papel insustituible del UNRWA. El UNRWA es un salvavidas para los refugiados del Territorio Palestino Ocupado, Jordania, el Líbano y Siria, un pilar de estabilidad en la región y una fuente de esperanza para el pueblo palestino.

Indonesia reafirma su compromiso de seguir apoyando al UNRWA en el cumplimiento de su mandato. Además de aumentar sus contribuciones al UNRWA como se indicó anteriormente, Indonesia también forma parte del grupo central de la declaración de compromiso compartido sobre el UNRWA (que cuenta actualmente con el apoyo de 123 países), que hace hincapié en el apoyo político ininterrumpido al UNRWA en el cumplimiento de su mandato.

En un intento de reafirmar los derechos de los refugiados de Palestina, de acuerdo con el derecho internacional y con la resolución 194 (III) de la Asamblea General, y reafirmar el apoyo de larga data de la comunidad internacional al UNRWA y a sus operaciones y programas, dirigidos a velar por el bienestar, la protección y el desarrollo de los refugiados de Palestina, a la luz de su desplazamiento prolongado y la continua privación de derechos y en espera del logro de una solución justa a su difícil situación, Indonesia desempeña un papel de liderazgo como principal patrocinador de las siguientes resoluciones en el marco del tema del programa sobre el UNRWA) en la Cuarta Comisión de la Asamblea General:

- a) Asistencia a los refugiados de Palestina en los períodos de sesiones de la Asamblea septuagésimo segundo, septuagésimo tercero, septuagésimo cuarto, septuagésimo quinto, septuagésimo sexto, septuagésimo séptimo y septuagésimo octavo;
- b) Bienes de los refugiados de Palestina y rentas devengadas por ellos en los períodos de sesiones de la Asamblea septuagésimo segundo, septuagésimo tercero, septuagésimo cuarto, septuagésimo quinto, septuagésimo sexto, septuagésimo séptimo y septuagésimo octavo;
- c) Operaciones del UNRWA en los períodos de sesiones de la Asamblea septuagésimo segundo, septuagésimo tercero, septuagésimo cuarto, septuagésimo quinto, septuagésimo sexto y septuagésimo séptimo;
- d) Personas desplazadas como resultado de las hostilidades de junio de 1967 y posteriores en los períodos de sesiones de la Asamblea septuagésimo segundo, septuagésimo tercero y septuagésimo cuarto.

Indonesia condena enérgicamente la decisión del Parlamento israelí (Knesset) de prohibir las actividades del UNRWA en Israel. Indonesia recalca que el mandato del UNRWA lo decide la Asamblea General y no queda supeditado a decisiones unilaterales de ningún Estado. Indonesia también subraya los graves riesgos humanitarios si se detienen o restringen las operaciones del UNRWA.

Indonesia considera tal decisión como un ataque a las Naciones Unidas y a sus organismos y Carta (incluidos los Artículos 2 y 105) y una violación de las normas y convenciones internacionales, en particular el Cuarto Convenio de Ginebra.

Indonesia considera también que dicha decisión trasciende las cuestiones humanitarias —lo que en sí mismo ya es un grave motivo de preocupación—, ya que va contra la esencia misma de la solución biestatal, es decir, el reconocimiento del estatuto legal de los refugiados de Palestina y su derecho al retorno.

Además, los proyectos de ley demuestran claramente la política israelí que considera el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, bajo soberanía y jurisdicción legal israelíes. Este es otro claro ejemplo de la negativa de Israel a la solución biestatal.

El derecho a la alimentación

Indonesia considera que la imposición de condiciones que llevan a una hambruna inminente pone de manifiesto la intención de Israel de eliminar a las poblaciones palestinas, lo que se ajusta a los criterios de genocidio según los convenios internacionales.

A ese respecto, Indonesia acogió una reunión informativa del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación con Estados Miembros de las Naciones Unidas el 16 de octubre de 2024, en la que se debatieron las conclusiones del Relator sobre el uso de los alimentos como arma de guerra por parte de Israel y se acordó llevar esta cuestión a la Tercera Comisión de la Asamblea General.

Resolución ES-10/24, párrafo 4 f): poner fin a la discriminación sistémica basada en la raza, la religión o el origen étnico, en particular para prevenir, prohibir y erradicar las violaciones de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial

En su calidad de parte en la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, Indonesia condena toda violación de los principios consagrados en la Convención, y en las resoluciones clave de las Naciones Unidas, incluida la resolución 2334 (2016) del Consejo de Seguridad.

Como parte de la Mesa del Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino, Indonesia respaldó la decisión de la Mesa de examinar mecanismos para reactivar el Comité Especial contra el *Apartheid* y hacer frente al *apartheid* en Israel.

Resolución ES-10/24, párrafo 5

Indonesia cumple sistemáticamente sus obligaciones en virtud del derecho internacional.

Resolución ES-10/24, párrafo 5 a): medidas adoptadas por Indonesia para asegurar que sus nacionales, y las empresas y entidades bajo su jurisdicción, así como sus autoridades, no actúen de manera que suponga el reconocimiento de la situación creada por la presencia ilegal de Israel en el Territorio Palestino Ocupado ni presten ayuda o asistencia para mantener esa situación

El Gobierno de Indonesia tomará medidas proactivas para evitar relaciones comerciales o de inversión que puedan reforzar la situación ilegal creada por Israel en el Territorio Palestino Ocupado. Ello incluye el control y la limitación de toda actividad que pueda contribuir a la viabilidad económica de los asentamientos o de las infraestructuras asociadas.

Por ese motivo, Indonesia apoya plenamente la resolución [31/36](#) del Consejo de Derechos Humanos, titulada “Asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y en el Golán sirio ocupado”, que ordena que se elabore una base de datos de todas las empresas que participan en las actividades detalladas relacionadas con los asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental. Esa base de datos es crucial para velar por la rendición de cuentas y la transparencia en relación con las actividades económicas que apoyan los asentamientos ilegales.

Resolución [ES-10/24](#), párrafo 5 b): medidas adoptadas por Indonesia para dejar de importar productos de los asentamientos israelíes y de transferir armas a Israel

Indonesia también reafirma su compromiso de pedir enérgicamente el cese de la transferencia de armas, municiones y equipo conexo a Israel, especialmente si existe la posibilidad de que se utilicen dentro del Territorio Palestino Ocupado.

Durante el 55º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, Indonesia, como parte de la Organización de Cooperación Islámica, desempeñó un papel clave en el avance de una resolución en el Consejo (resolución [55/28](#)) relativa a la situación de los derechos humanos en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, en el que el Consejo exhortó a los Estados a poner fin a la venta, transferencia y desviación de armas, municiones y otros equipos militares a Israel, la Potencia ocupante, para evitar nuevas violaciones del derecho internacional humanitario y abusos de los derechos humanos.

Indonesia sigue pidiendo el cese de las transferencias de armas y municiones a Israel. Indonesia es miembro del grupo central junto con Türkiye en la carta conjunta para detener las transferencias de armas a Israel, tras la aprobación de la resolución [ES-24/10](#) relativa a la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia.

Resolución [ES-10/24](#) 5 d): medidas adoptadas por Indonesia para velar por la rendición de cuentas para todas las víctimas

Indonesia mantiene su compromiso de apoyar los mecanismos de rendición de cuentas para todas las víctimas de la ocupación. Ello incluye el pleno apoyo a las investigaciones independientes, el fomento de la transparencia y el respaldo al papel de los organismos internacionales, incluida la Corte Internacional de Justicia, a la hora de asegurar la justicia por las violaciones cometidas en el Territorio Palestino Ocupado. También incluye extender el pleno apoyo de Indonesia al UNRWA como guardián de los refugiados palestinos, incluido el archivo de numerosas pruebas de las graves violaciones de los derechos y propiedades de los refugiados palestinos.

Resolución [ES-10/24](#), párrafo 10: medidas adoptadas por Indonesia para reconocer la necesidad de establecer un mecanismo internacional de reparación de todos los daños, pérdidas o perjuicios derivados de los hechos internacionalmente ilícitos de Israel en el Territorio Palestino Ocupado

Indonesia apoya plenamente y subraya la importancia de que se establezca un mecanismo internacional de reparaciones para hacer frente a los daños, las pérdidas y los perjuicios causados por los actos internacionalmente ilícitos de Israel en el Territorio Palestino Ocupado.

Indonesia destaca el importante papel de dos mecanismos clave del Consejo de Derechos Humanos centrados en la cuestión palestina, a saber: a) Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado,

incluida Jerusalén Oriental, e Israel, y b) el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967.

El apoyo de Indonesia a esos mecanismos se basa en la necesidad crítica de garantizar que las violaciones de los derechos humanos y las infracciones del derecho internacional en el Territorio Palestino Ocupado se investiguen con imparcialidad y transparencia. Indonesia insta a todos los Estados a poner fin a toda forma de intimidación dirigida contra esos mecanismos y a velar por la seguridad y protección de los investigadores y funcionarios implicados.

C. Solicitud de nuevas medidas por parte del Secretario General de las Naciones Unidas

Primero, Indonesia insta al Secretario General a que colabore estrechamente con Suiza, en su calidad de depositaria de los Convenios de Ginebra, para convocar inmediatamente una Conferencia de las Altas Partes Contratantes del Cuarto Convenio de Ginebra. Esta conferencia reafirmaría los compromisos con el derecho internacional humanitario y reforzaría las protecciones del Convenio (resolución [ES-10/24](#), párr. 12).

Segundo, Indonesia pide al Secretario General que movilice apoyos —tanto dentro como fuera del sistema de las Naciones Unidas— y adopte las medidas necesarias para la celebración de una Conferencia Internacional durante el septuagésimo noveno período de sesiones de la Asamblea General, tal como se indica en el párrafo 13 de la resolución [ES-10/24](#). Dicha conferencia proporcionaría una plataforma fundamental para respuestas globales coordinadas cuyos objetivos deberían incluir: i) reactivar el proceso de paz en Oriente Medio, ii) salvaguardar la solución biestatal; y iii) abordar el incumplimiento por parte de Israel del derecho internacional y del derecho internacional humanitario pertinentes.

Tercero, Indonesia solicita al Secretario General que establezca un mecanismo global a fin de movilizar y aumentar el apoyo y los recursos para el UNRWA. Ello es esencial para fortalecer los programas de UNRWA y garantizar un apoyo sostenible.

Cuarto, Indonesia hace un llamamiento al Secretario General para que acelere la plena aplicación de la resolución [31/36](#) del Consejo de Derechos Humanos, que ordena la creación de una base de datos de empresas dedicadas a actividades vinculadas a los asentamientos israelíes en los territorios ocupados.

Quinto, Indonesia solicita al Secretario General que emprenda inmediatamente un examen y elabore un registro de las medidas que la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social y la Corte Internacional de Justicia han encomendado a todos los organismos y entidades del sistema de las Naciones Unidas, pero que no se han aplicado, para hacer frente a todas las formas de injusticia contra el pueblo palestino derivadas de la ilegalidad de la presencia continuada de Israel en el Territorio Palestino Ocupado. Indonesia también solicita al Secretario General que prepare un informe sobre los retos u obstáculos en la aplicación de los mandatos.

Conclusión

El Gobierno de la República de Indonesia está plenamente comprometido con su obligación en virtud del derecho internacional y siempre la ha cumplido plenamente, como se refleja en la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas derivadas de las políticas y prácticas de Israel en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y de la ilegalidad de la presencia continuada de Israel en el Territorio Palestino Ocupado.

Indonesia hace un llamamiento a todos los Estados Miembros para que cumplan sus obligaciones legales derivadas de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, así como todas las resoluciones y decisiones pertinentes de las Naciones Unidas relacionadas con la ocupación ilegal israelí del Territorio Palestino Ocupado. Una parte importante de ello consiste en evitar el doble rasero a la hora de defender el derecho internacional y el derecho internacional humanitario.

Indonesia subraya que la aplicación y el seguimiento efectivos de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia y de la resolución [ES-10/24](#) de la Asamblea General requieren no sólo acciones por parte de los Estados Miembros, sino también otras acciones por parte del Secretario General de las Naciones Unidas, como se explica en la parte C de esta presentación. Indonesia cree también que la aplicación y el seguimiento efectivos de la opinión consultiva de la Corte y de la resolución deben guiarse por la visión y los objetivos finales que figuran en la parte A de esta presentación.

Irán (República Islámica del)

[Original: inglés]

[11 de noviembre de 2024]

La República Islámica del Irán, en el marco de su contribución de conformidad con la resolución [ES-10/24](#) de la Asamblea General titulada “Opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas derivadas de las políticas y prácticas de Israel en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y de la ilegalidad de la presencia continuada de Israel en el Territorio Palestino Ocupado”, subraya su firme compromiso de larga data de apoyar la realización del derecho a la libre determinación del pueblo palestino. En este sentido, el Parlamento de la República Islámica del Irán ha aprobado varias leyes, como la “Ley para contrarrestar las acciones hostiles del régimen sionista contra la paz y la seguridad, de 21 de mayo de 2020”, la “Ley de apoyo a la revolución islámica del pueblo palestino, de 9 de mayo de 1990” y la “Ley que obliga al Gobierno a prestar un apoyo integral al pueblo palestino oprimido, de 31 de diciembre de 2008”.

Compromiso general

Según el artículo 1 de la ley para contrarrestar las acciones hostiles del régimen sionista contra la paz y la seguridad, todos los órganos ejecutivos del país están obligados a contrarrestar las acciones hostiles del régimen sionista contra el pueblo oprimido de Palestina, los países islámicos y la República Islámica del Irán, así como el papel destructivo de este régimen ilegítimo en la desestabilización de la paz y la seguridad regionales e internacionales. Ello incluye violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos, como el belicismo, los actos terroristas, la guerra electrónica, el uso de armas pesadas y prohibidas contra civiles, el bloqueo humano, la construcción de asentamientos, el desplazamiento del pueblo palestino, los intentos de anexionarse otras partes del territorio palestino y la ocupación continuada del territorio palestino, así como de partes de Siria (Golán), el Líbano y otros territorios ocupados.

Además, el artículo 13 de esta ley estipula que el Gobierno debe apoyar las actividades de otros Gobiernos, naciones y organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales que propugnen la liberación de Jerusalén y condenen, restrinjan y sancionen la ocupación sionista.

Prohibición de la cooperación comercial con Israel

En cuanto a la prohibición de la cooperación comercial con el régimen israelí, el artículo 4 de la ley para contrarrestar las acciones hostiles del régimen sionista contra la paz y la seguridad establece que queda prohibida la expedición de cualquier licencia para la participación directa o indirecta de personas físicas o jurídicas, incluidas empresas, organizaciones, instituciones u organizaciones no gubernamentales afiliadas al régimen de ocupación sionista, en exposiciones, conferencias o reuniones nacionales e internacionales.

El artículo 5 de esta ley prohíbe el uso en el Irán de hardware producido por el régimen sionista y el funcionamiento en el país de plataformas de software pertenecientes a ese régimen. Además, también queda prohibida toda prestación de servicios por parte de empresas iraníes a esas plataformas.

El artículo 8 prohíbe cualquier acción, como la asistencia en materia de seguridad, militar, política, cultural, mediática, propagandística, económica y financiera, directa e indirecta, que esté dirigida a sabiendas para confirmar o fortalecer al régimen sionista.

El artículo 9 brinda mayores detalles sobre la prohibición, al establecer que quedan prohibidos la entrada y el paso de mercancías de empresas afiliadas al régimen de ocupación sionista a través del territorio de la República Islámica del Irán. Por otra parte, todos los sionistas sometidos al régimen de ocupación sionista, incluidas las personas físicas o jurídicas que sean ciudadanos del régimen sionista, tienen prohibida la entrada a la República Islámica del Irán. Asimismo, el artículo 10 establece la prohibición de que los ciudadanos iraníes viajen a la Palestina ocupada.

En consonancia con lo anterior, el artículo 8 de la ley de Apoyo a la Revolución Islámica del Pueblo Palestino reitera la prohibición de establecer relaciones económicas, comerciales y culturales con empresas, instituciones y compañías afiliadas al sionismo en todo el mundo. El artículo 5 de la ley que obliga al Gobierno a prestar apoyo integral al pueblo palestino oprimido hace hincapié en que el Gobierno está obligado a tomar medidas para impedir la importación de bienes y la celebración de contratos con empresas cuyos principales accionistas sean empresas sionistas.

Lucha contra la impunidad

El artículo 11 de la ley para contrarrestar las acciones hostiles del régimen sionista contra la paz y la seguridad exige al Fiscal General del país que, en colaboración con el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Oficina de Servicios Jurídicos Presidenciales, utilice los recursos de las autoridades e instituciones nacionales, extranjeras e internacionales para apoyar al pueblo palestino y a otras víctimas. Ese apoyo incluye presentar denuncias, iniciar juicios y castigar a los líderes criminales del régimen de ocupación sionista por crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio, crímenes de agresión y actos terroristas dentro y fuera de los territorios ocupados. Esas acciones legales tendrán lugar tanto en juzgados nacionales como extranjeros, tribunales y la Corte Internacional de Justicia.

El artículo 3 de la ley para obligar al Gobierno a prestar apoyo integral al pueblo palestino oprimido establece que los crímenes cometidos en Gaza son claros ejemplos de crímenes de lesa humanidad y genocidio de conformidad con el derecho internacional. El Gobierno tiene el mandato de llevar ante la Corte Penal Internacional y ante los tribunales nacionales a los dirigentes del régimen de ocupación de Jerusalén como autores de crímenes de lesa humanidad y autores de genocidio. Esta búsqueda implicará a foros internacionales, como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Prestación de asistencia humanitaria al pueblo palestino

En virtud del artículo 1 de la ley que obliga al Gobierno a prestar apoyo integral al pueblo palestino oprimido, el Gobierno debe utilizar todos los recursos regionales e internacionales para hacer llegar la ayuda humanitaria de la nación iraní al pueblo palestino oprimido, en particular en los territorios ocupados y en la asediada tierra de Gaza. El Gobierno también debe mantener y defender la causa palestina, a la población oprimida, a los combatientes y refugiados palestinos y a la resistencia islámica palestina hasta hacer efectivos sus derechos.

De acuerdo con el artículo 2 de la ley de apoyo a la revolución islámica del pueblo palestino, el Gobierno de la República Islámica del Irán tiene la facultad de establecer un fondo de ayuda humanitaria para asistir al pueblo palestino. Este fondo reunirá contribuciones de musulmanes y partidarios de la libertad de todo el mundo para reforzar y empoderar a los refugiados palestinos y a los oprimidos que luchan por sus derechos. Asimismo, el artículo 3 de esta ley encomienda a la Fundación Mártir de la República Islámica del Irán que preste asistencia espiritual y material a las familias de los mártires, veteranos, prisioneros y desaparecidos palestinos en los territorios ocupados.

Irlanda

[Original: inglés]
[8 de noviembre de 2024]

Posturas y políticas

Irlanda mantiene un compromiso de larga data con el logro de una paz justa y sostenible en Oriente Medio basada en la solución biestatal. Irlanda ha sostenido de manera sistemática que no reconocerá cambios a las fronteras de 1967 a menos que las partes así lo acuerden.

Irlanda siempre ha considerado ilegales los asentamientos israelíes y las actividades asociadas a ellos en el Territorio Palestino Ocupado, y en mayo de 2024 dio el paso histórico de reconocer al Estado de Palestina, junto con Noruega y España, para proteger la viabilidad de una solución biestatal y la igualdad de derechos de palestinos e israelíes a la libre determinación, la paz, la seguridad y la dignidad.

Irlanda sigue colaborando con otros Estados miembros de la Unión Europea en la reformulación de la política de la Unión Europea, incluida la política comercial, con respecto a Israel y al Territorio Palestino Ocupado, a fin de ajustarse plenamente a las obligaciones contenidas en la opinión consultiva. Mientras tanto, y en el contexto de las obligaciones establecidas en la opinión consultiva, Irlanda está examinando qué medidas podrían adoptarse a nivel nacional en lo referente al comercio con los asentamientos del Territorio Palestino Ocupado. La intención de Irlanda es que las medidas que se adopten se centren únicamente en los asentamientos ilegales del Territorio Palestino Ocupado. Por lo tanto, Irlanda mantendrá, y revisará si es necesario a la luz de la opinión consultiva, su política de larga data de diferenciar entre el Estado de Israel, por un lado, y los territorios en los que la presencia continuada de Israel es ilegal, por otro.

En su carácter de Estado miembro de la Unión Europea, Irlanda aplica las medidas restrictivas de la Unión Europea con algunos colonos extremistas israelíes en la Ribera Occidental Ocupada y Jerusalén Oriental, así como contra activistas violentos que bloquean la ayuda humanitaria a Gaza. Irlanda apoya firmemente la consideración de nuevas medidas de ese tipo.

Japón

[Original: inglés]
[8 de noviembre de 2024]

El Japón lleva mucho tiempo trabajando para hacer avanzar el proceso de paz en Oriente Medio y seguirá pidiendo a todas las partes implicadas que actúen adecuadamente basándose en el derecho internacional, incluso tomando en consideración la resolución [ES-10/24](#) de la Asamblea General recientemente adoptada.

El Japón ha instado repetidamente a Israel a que congele totalmente sus actividades de asentamiento, basándose en la postura de que dichas actividades violan el derecho internacional y socavan la viabilidad de una solución biestatal.

En particular, en medio de un rápido aumento de los actos violentos por parte de colonos israelíes en la Rivera Occidental desde los atentados terroristas contra Israel por Hamás y otros el 7 de octubre de 2023, el Gobierno del Japón introdujo medidas de congelación de activos en virtud de la Ley de Divisas y Comercio Exterior, sobre la base del entendimiento del Gabinete de “Congelación de activos para colonos israelíes implicados en actos violentos”.

El Japón seguirá estudiando las medidas necesarias, teniendo en cuenta las leyes y normativas nacionales e internacionales pertinentes.

Jordania

[Original: árabe]
[8 de noviembre de 2024]

En relación con los párrafos 4, 5 y 10 de la resolución [ES-10/24](#) de la Asamblea General, el Reino Hachemita de Jordania declara lo siguiente:

- El Reino Hachemí de Jordania cumple las disposiciones de la opinión consultiva. No reconoce como legal la situación derivada de la presencia ilegal de Israel en el Territorio Palestino Ocupado. La causa palestina está en el centro de las prioridades de la política exterior de Jordania, que focaliza sus gestiones diplomáticas en proteger al fraternal pueblo palestino y lograr la realización de su derecho a la libre determinación y el establecimiento de un Estado soberano independiente a lo largo de las fronteras del 4 de junio de 1967, con Jerusalén ocupada como su capital, de conformidad con la Iniciativa de Paz Árabe y las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, y sobre la base de la solución biestatal, que es la única manera de lograr una paz justa, duradera y general.
- Jordania considera ilegal la ocupación israelí del Territorio Palestino Ocupado desde junio de 1967. Todas las medidas adoptadas por Israel para anexionarse total o parcialmente dicho territorio, incluida Jerusalén Oriental, o para establecer asentamientos en él, son nulas y sin valor.
- El Gobierno de Jordania no dudará en llamar la atención sobre la invalidez y la ilegalidad de las acciones de las fuerzas de ocupación israelíes en los territorios palestinos ocupados desde 1967, incluida Jerusalén Oriental. Ello incluye la construcción y la expansión de asentamientos, la confiscación y apropiación de tierras, la demolición de viviendas, el desplazamiento de palestinos de sus tierras, los ataques directos contra sus propiedades y las campañas terroristas que llevan a cabo colonos extremistas contra los palestinos de la Ribera Occidental, respecto a los cuales Jordania pide sanciones nacionales e internacionales. Esas acciones israelíes constituyen violaciones por parte de

Israel del derecho internacional, el derecho internacional humanitario, la resolución 2334 (2016) del Consejo de Seguridad, y los mandatos internacionales pertinentes.

- Jordania trabaja bilateral y colectivamente con las comunidades árabe e islámica y con otros países para impulsar el fin de la ocupación israelí del Territorio Palestino Ocupado y la realización del derecho del pueblo palestino a la libre determinación. En el último año ello ha quedado ejemplificado, entre otras cosas, por la estrecha coordinación y la incansable labor del comité ministerial encargado por la cumbre conjunta árabe-islámica extraordinaria de detener la brutal agresión contra la Franja de Gaza, poner fin al sufrimiento humanitario, acabar con la ocupación israelí, impulsar el establecimiento de un Estado palestino independiente y soberano, e instar a los Estados que aún no lo hayan hecho a que reconozcan el Estado de Palestina.
- Jordania seguirá participando, junto con los miembros del comité ministerial y con otros asociados internacionales, en el lanzamiento de la Alianza Global para Implementar la Solución Biestatal en apoyo del derecho de los palestinos a establecer su propio Estado. El Reino también está decidido a movilizar apoyo para que el UNRWA siga proporcionando servicios básicos a los refugiados palestinos en todas sus áreas de operación. También brindará protección a dicho Organismo frente a las campañas de la ocupación israelí en su contra y a los refugiados ante los esfuerzos israelíes por arrebatarles sus derechos al retorno y a una indemnización, en violación del derecho internacional y de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas.
- El ámbito territorial de las relaciones convencionales y los acuerdos bilaterales entre Jordania e Israel no abarca el Territorio Palestino Ocupado desde 1967. Desde el punto de vista jurídico, a Israel se le trata como la potencia ocupante en el Territorio Palestino Ocupado. Jordania reconoce al Estado de Palestina. Sus relaciones convencionales y acuerdos bilaterales relativos al Territorio Palestino Ocupado son con el Estado de Palestina. El Tratado de Paz de 1994 entre el Estado de Israel y el Reino Hachemita de Jordania establece que la frontera internacional entre Israel y Jordania se fija sin perjuicio del estatuto de los territorios que quedaron bajo control del gobierno militar israelí en 1967.
- La embajada jordana en Tel Aviv no se ocupa de las relaciones bilaterales relacionadas con el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental. Se relaciona con Israel como Potencia ocupante en ese territorio. Las relaciones diplomáticas relativas al Territorio Palestino Ocupado se llevan a cabo con el Estado de Palestina y con sus instituciones gubernamentales.
- Jordania prohíbe a particulares, entidades y empresas jordanas apoyar la ocupación israelí del Territorio Palestino Ocupado, negociar de ningún modo con asentamientos israelíes o importar o exportar mercancías a o desde dichos asentamientos. Asimismo, refuerza el apoyo al pueblo palestino en el Territorio Palestino Ocupado garantizándole el acceso a bienes y materiales.
- La legislación jordana prohíbe toda transacción legal, incluida la venta de bienes inmuebles, en el Territorio Palestino Ocupado, con el fin de garantizar que ni Israel ni ninguna persona física o jurídica israelí pueda adquirir propiedades, establecer o perpetuar asentamientos, o anexionarse o explotar tierras palestinas.
- Jordania sigue rechazando todos los intentos de la ocupación israelí de modificar la composición demográfica, el carácter o el estatuto del Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental. Tales intentos de crear nuevos hechos consumados son nulos. Jordania subraya que cualquier medida israelí

para anexionarse la Jerusalén ocupada viola el derecho internacional, las resoluciones del Consejo de Seguridad y la reciente opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia. Esas medidas no pueden alterar el hecho de que la presencia israelí en Gaza y en la Ribera Occidental, incluida Jerusalén Oriental, es una ocupación ilegal a la que debe ponerse fin.

- Jordania recalca la necesidad de que Israel respete el *statu quo* histórico de los lugares santos de Jerusalén, que Jordania seguirá administrando y protegiendo en virtud de su custodia histórica hachemí sobre los lugares santos islámicos y cristianos de Jerusalén. Toda medida israelí en Jerusalén encaminada a borrar su identidad y carácter demográfico es nula y contraviene las convenciones pertinentes sobre la protección de los bienes culturales y el patrimonio cultural, así como las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Jordania apoyará a los habitantes de Jerusalén en sus denodados esfuerzos por permanecer en su tierra y proteger sus propiedades.
- El Gobierno del Reino Hachemita de Jordania apoya el establecimiento de un mecanismo internacional de reparación de todos los daños, pérdidas o perjuicios derivados de los hechos internacionalmente ilícitos de Israel en el Territorio Palestino Ocupado. El Gobierno de Jordania está dispuesto a coordinarse con las Naciones Unidas y sus organismos competentes para crear un registro internacional de daños.

Kuwait

[Original: árabe]
[8 de noviembre de 2024]

Medidas adoptadas por Kuwait para aplicar las disposiciones de la resolución ES-10/24 de la Asamblea General

Ante todo, Kuwait mantiene su compromiso con la Carta de las Naciones Unidas, con el derecho internacional y con el derecho internacional humanitario. Sigue apoyando la causa palestina y tomando medidas jurídicas, políticas y humanitarias en pro del establecimiento de un Estado de Palestina independiente dentro de las fronteras del 4 de junio de 1967, con Jerusalén Oriental como capital.

El Estado de Kuwait tuvo el honor de presentar alegaciones escritas y orales ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, máximo órgano judicial del mundo, cuando la Corte examinó y emitió una opinión consultiva sobre las consecuencias jurídicas derivadas de las políticas y prácticas de Israel en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental. Kuwait acoge con agrado la opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia el 19 de julio de 2024.

Como se desprende de su declaración oral ante la Corte, Kuwait apoya sin reservas el contenido de la opinión consultiva. La Potencia ocupante debe poner fin de inmediato a la ocupación que lleva a cabo desde 1967. Debe rescindir sus medidas arbitrarias contra el pueblo palestino en el territorio ocupado, devolver las propiedades a sus legítimos dueños e indemnizar a los afectados por sus prácticas ilegítimas.

Kuwait está plenamente comprometido con todas las medidas señaladas en la resolución ES-10/24 de 18 de septiembre de 2024, titulada “Opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas derivadas de las políticas y prácticas de Israel en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y de la ilegalidad de la presencia continuada de Israel en el Territorio Palestino Ocupado”. Esas medidas incluyen hacer efectivo el derecho del pueblo

palestino a la libre determinación, abstenerse de reconocer la ocupación israelí del Territorio Palestino Ocupado y abstenerse de establecer relaciones con la Potencia ocupante.

Kuwait acoge con agrado la aprobación de la resolución [ES-10/24](#) de la Asamblea General y, en particular, las disposiciones relativas al establecimiento de un mecanismo internacional de reparación de los daños derivados de las violaciones cometidas por la Potencia ocupante. Esta última debe asumir plenamente su responsabilidad de ofrecer reparación al pueblo palestino por sus políticas y prácticas ilegales. Kuwait apoya el establecimiento de un registro internacional de daños para consignar, en forma documental, pruebas e información sobre reclamaciones en relación con los daños, las pérdidas y los perjuicios causados a todas las personas físicas y jurídicas afectadas, así como al pueblo palestino, por los hechos internacionalmente ilícitos cometidos por Israel en el Territorio Palestino Ocupado, así como para promover y coordinar la recopilación de pruebas y las iniciativas destinadas a asegurar tal reparación por Israel.

El Estado de Kuwait nunca ha reconocido como legal la situación derivada de la presencia ilegal de Israel en el Territorio Palestino Ocupado, ya que consiste en una ocupación ilegal y viola flagrantemente los derechos de propiedad del pueblo palestino sobre su propia tierra, que fue tomada por la fuerza y cuyos habitantes fueron desplazados y aún no han sido indemnizados. Kuwait tampoco reconoce ningún cambio en el carácter físico o la composición demográfica del territorio ocupado. Kuwait no mantiene relaciones diplomáticas, políticas, jurídicas, militares, económicas, comerciales o financieras con la Potencia ocupante.

Kuwait no reconoce en absoluto a la Potencia ocupante, por lo que en ningún caso mantiene relaciones convencionales con ella. Se abstiene de entablar relaciones económicas o comerciales con Israel en lo que respecta al Territorio Palestino Ocupado o partes de él que puedan afianzar su presencia ilegal en el Territorio, incluso en relación con los asentamientos y su régimen asociado. Kuwait no reconoce a la Potencia ocupante y prohíbe las relaciones comerciales o de inversión que contribuyan al mantenimiento de la situación ilegal creada por Israel en el Territorio Palestino Ocupado, incluso en relación con los asentamientos y su régimen asociado.

Kuwait está comprometido con el derecho internacional y pide a los Estados partes en el Cuarto Convenio de Ginebra que prestan apoyo a la Potencia ocupante que se abstengan de hacerlo. Kuwait considera que las prácticas de la Potencia ocupante en el Territorio Palestino Ocupado van más allá del *apartheid* y equivalen a un genocidio sistemático.

Kuwait asegura que sus nacionales y empresas, así como todas las entidades y autoridades, no actúan de manera que suponga el reconocimiento de la situación creada por la presencia ilegal de Israel en el Territorio Palestino Ocupado ni prestan ayuda o asistencia para mantener la situación creada por la presencia ilegal de Israel en el Territorio Palestino Ocupado. Kuwait no importa ningún producto originario de los asentamientos de la Potencia ocupante.

Kuwait no admite a ninguna persona física, ni trata con ninguna persona jurídica, que se dedique a mantener la presencia ilegal de la Potencia ocupante en el Territorio Palestino Ocupado, incluso en relación con la violencia de los colonos.

Kuwait, con arreglo a su profunda creencia en la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional, el derecho internacional y los derechos humanos, trabajará codo con codo con la comunidad internacional para garantizar justicia y reparación al pueblo palestino. Kuwait apoya toda medida adicional que pueda reforzar el mecanismo internacional y mejorar su eficacia.

Malasia

[Original: inglés]
[8 de noviembre de 2024]

Malasia se suma a las aportaciones presentadas por la Organización de Cooperación Islámica sobre la aplicación de la resolución [ES-10/24](#) de la Asamblea General, y presenta las siguientes aportaciones a título nacional.

Iniciativas

Malasia promueve inequívocamente el derecho del pueblo palestino a la libre determinación. Al apoyar y ayudar al pueblo palestino en la pronta realización de este derecho inalienable, Malasia siempre ha apoyado el mandato del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA) de ayudar a los refugiados palestinos a alcanzar su pleno potencial de desarrollo humano, de conformidad con el párrafo 16 de la resolución [ES-10/24](#).

Desde octubre de 2023, Malasia ha aportado 5,2 millones de dólares al UNRWA. Malasia también contribuye con una cantidad adicional de 1 millón de dólares para el período de cinco años de 2021-2025 (200.000 dólares cada año). Además, Malasia también realiza otras contribuciones financieras y ayuda humanitaria a través del fondo fiduciario humanitario para el pueblo de Palestina y otras organizaciones no gubernamentales.

En el plano bilateral, Malasia tiene acuerdos para suministrar ayuda humanitaria a Palestina a través de mecanismos especiales de Gobierno a Gobierno con Egipto y Jordania.

En otras plataformas como el Movimiento de Países No Alineados, la Organización de Cooperación Islámica, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y la Commonwealth, Malasia ha pedido que se reconozca el derecho de Palestina a la condición de Estado y que se apoye el mandato del UNRWA de proporcionar protección y servicios esenciales a los palestinos. Malasia prosiguió también su labor de promoción de carácter bilateral.

El 16 de agosto de 2024, 127 palestinos, entre ellos 41 heridos y 86 familiares, llegaron a Malasia para recibir tratamiento médico. Esos heridos fueron atendidos previamente en Egipto y ahora reciben atención médica en el Hospital de las Fuerzas Armadas de Malasia. Malasia es el primer país asiático en acoger a palestinos heridos.

Malasia ha condenado la legislación de la Knesset israelí que prohíbe al UNRWA operar en el Territorio Palestino Ocupado a través de un comunicado de prensa de fecha 30 de octubre de 2024. En relación con esto, el 31 de octubre de 2024 Malasia se unió al grupo central sobre el proyecto de resolución de la Asamblea General para solicitar la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las obligaciones de Israel para con las Naciones Unidas, sus organismos y órganos, otras organizaciones internacionales y terceros Estados en el Territorio Palestino Ocupado.

Malasia apoya firmemente los procesos judiciales internacionales encaminados a poner fin a la impunidad de Israel, incluso en la Corte Internacional de Justicia. Malasia ha participado en dos procesos de opinión consultiva:

a) Opinión consultiva respecto de las consecuencias jurídicas que se derivan de las políticas y prácticas de Israel en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, en febrero de 2024;

b) Opinión consultiva sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el Territorio Palestino Ocupado, en 2004.

Malasia es miembro del grupo central de la carta conjunta de fecha 1 de noviembre de 2024 dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, al Presidente de la Asamblea General y al Presidente del Consejo de Seguridad sobre el cese del suministro de armas a Israel.

Como muestra de nuestro continuo y firme compromiso con la causa palestina, Malasia también es miembro de los siguientes grupos/mecanismos centrales:

- a) Comité Especial encargado de Investigar las Prácticas Israelíes que Afecten a los Derechos Humanos del Pueblo Palestino y Otros Habitantes Árabes de los Territorios Ocupados;
- b) Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino;
- c) Alianza Global para Implementar la Solución Biestatal;
- d) Miembro del Comité de los Seis de la Organización de Cooperación Islámica I sobre Palestina;
- e) Miembro del Comité Ministerial del Movimiento de Países No Alineados sobre Palestina.

Malasia no mantiene relaciones diplomáticas con Israel. Ello contribuye a inhibir las relaciones económicas y los viajes de entidades implicadas en el mantenimiento de la presencia ilegal de Israel en el Territorio Palestino Ocupado.

En diciembre de 2023, Malasia prohibió a una naviera con sede en Israel, Zim Integrated Shipping Services, Ltd., a todo buque de pabellón israelí, entrar a ningún puerto malasio. Además, Malasia no permite que ningún buque que se dirija a Israel cargue en puertos malasios. Esta medida fue impuesta nuevamente por Malasia en junio de 2024. Esa medida se ajusta al párrafo 4 d) de la resolución [ES-10/24](#) de la Asamblea General.

Recomendaciones

El 28 de septiembre de 2024, en el debate general del septuagésimo noveno período de sesiones de la Asamblea General, Malasia instó a que se restableciera el Comité Especial de las Naciones Unidas contra el *Apartheid*. Basándose en nuestra experiencia de haber formado parte del Comité anteriormente en el caso de Sudáfrica, Malasia considera que el Comité es un mecanismo adecuado que obligaría a Israel a poner fin a sus políticas y prácticas de *apartheid* contra el pueblo palestino en el Territorio Palestino Ocupado.

Malasia apoya toda medida de cumplimiento adoptada por los Estados Partes en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial para hacer frente a las violaciones del artículo 3 de la Convención por parte de Israel, en consonancia con la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 19 de julio de 2024.

En consonancia con el espíritu del párrafo 11 de la resolución [ES-10/24](#), Malasia seguirá apoyando todos los procesos jurídicos internacionales, incluido el de la Corte Internacional de Justicia. Desde diciembre de 2023, Malasia ha expresado su apoyo a Sudáfrica, en su caso sobre la aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 en la Franja de Gaza (*Sudáfrica c. Israel*).

El 28 de septiembre de 2024, en el debate general del septuagésimo noveno período de sesiones de la Asamblea General, Malasia pidió al Consejo que invocara

su mandato en virtud del Capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas para imponer un embargo de armas inmediato a Israel. Malasia propone que el Secretario General, haciendo uso de las atribuciones que le confiere el Artículo 99 de la Carta, inste al Consejo de Seguridad a imponer medidas contra Israel en virtud del Capítulo 7 de la Carta, entre otras, sanciones económicas y un embargo de armas.

Debe apoyarse el fortalecimiento de los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, como la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental e Israel, suministrándoles recursos adicionales para que puedan cumplir sus mandatos con eficacia.

El sistema de las Naciones Unidas debe garantizar que los mecanismos y mandatos de derechos humanos que ponen de relieve la ilegalidad de la presencia de Israel en el Territorio Palestino Ocupado y piden su cese inmediato se vean protegidos contra actos de intimidación, acoso y represalias.

Debe considerarse la posibilidad de suspender la pertenencia de Israel a los organismos de las Naciones Unidas si persisten las violaciones del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas y no se hacen esfuerzos para poner fin rápidamente a su presencia ilegal en el Territorio Palestino Ocupado.

La Asamblea General también puede considerar otras medidas, dentro de sus prerrogativas y autoridad, como limitar la participación de Israel en los órganos pertinentes de las Naciones Unidas. Cabe examinar la posibilidad de crear un registro internacional de daños para inscribir pruebas e información sobre daños, pérdidas o lesiones causados por la agresión de Israel contra Palestina, con fines de recurso y reparación. El precedente creado en la resolución [ES-11/5](#) de la Asamblea General podría servir de base para esta propuesta.

México

[Original: español]
[8 de noviembre de 2024]

En cumplimiento de la disposición en el párrafo 17 de la resolución [ES-10/24](#) de la Asamblea General adoptada el pasado 18 de septiembre de 2024, en su décimo período extraordinario de sesiones de emergencia, con la que dicho órgano solicita al Secretario General un informe sobre la aplicación de la referida resolución, que incluya, entre otras, las medidas adoptadas por los Estados para la aplicación de sus disposiciones o en caso de que éstas se incumplan, el Gobierno de México informa lo siguiente:

1. Sobre el párrafo 4, con el que se exhorta a todos los Estados a que cumplan las obligaciones que les incumben en virtud del derecho internacional, a través de las medidas señaladas en los incisos a) a f), el Gobierno de México señala las acciones siguientes:

- México votó a favor de la resolución [67/19](#) del 29 de noviembre de 2012 de la Asamblea General, en la que se admitió a Palestina como Estado Observador en las Naciones Unidas y con ello hizo un reconocimiento tácito del Estado Palestino, al igual que lo hizo con la aceptación para convertir la Oficina Palestina de Representación en México en Embajada a partir de junio de 2023.
- En ocasión del voto de la resolución [67/19](#), México formuló una explicación en la que, entre otros elementos destacaron los siguientes:

- Reiteró su pleno e incondicional respaldo a la resolución [181 \(II\)](#) del 29 de noviembre de 1947 de la Asamblea General, que decidió establecer dos Estados: uno árabe y otro judío;
 - Declaró que Israel y Palestina tienen derecho a vivir como Estados independientes y democráticos, conviviendo en paz dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas;
 - Expresó su respaldo a la dirigencia de la Autoridad Nacional Palestina como única y legítima representante del pueblo palestino.
- México votó a favor de la resolución [ES-10/23](#), con la que la Asamblea General determina que Palestina cumple las condiciones necesarias para ser miembro de Naciones Unidas conforme al Artículo 4 de la Carta de las Naciones Unidas y recomienda al Consejo de Seguridad a reconsiderar favorablemente la solicitud de admisión de Palestina como miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas.
- Por lo anterior, la posición inequívoca de México sobre la cuestión de Palestina está en consonancia con el contenido del párrafo 4 de la resolución [ES-10/24](#), en el sentido de respaldar a la dirigencia de la Autoridad Nacional Palestina como la única y legítima representante del pueblo palestino y mantener su respaldo a una solución política e integral del conflicto israelí-palestino bajo la premisa de dos Estados, que atienda las preocupaciones de seguridad de Israel y permita la consolidación del Estado palestino, viable política y económicamente, conviviendo dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas, de conformidad con las resoluciones de las Naciones Unidas.
- Asimismo, la participación de México en la primera reunión de la “Alianza Mundial para la Implementación la Solución Biestatal” celebrada en Riad (Arabia Saudita) el 30 y 31 de octubre de 2024, se enmarca en la promoción de la realización del derecho del pueblo palestino a la libre determinación, conforme al contenido del párrafo 4 de la resolución [ES-10/24](#).
- Con relación a los incisos e) y f) relativos a las obligaciones derivadas de los Convenios de Ginebra de 1949 y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, se informa que México forma parte de estos tratados, por lo que el país debe cumplir con sus disposiciones.
2. Respecto a las medidas señaladas en el párrafo 5, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México hará de conocimiento a las autoridades mexicanas competentes que integran el Comité Especializado de Alto Nivel en Materia de Desarme, Terrorismo y Seguridad Internacionales (CANDESTI), cuya membresía incluye a la Secretaría de Gobernación (Instituto Nacional de Migración), a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Unidad de Inteligencia Financiera) y la Secretaría de Economía, sobre la adopción de la resolución [ES-10/24](#) y, en específico, sobre las disposiciones que contiene de carácter económico y comercial, así como para restringir el tránsito y congelamiento de activos de las personas y empresas que contribuyan a la situación actual en el Territorio Palestino Ocupado, a fin de implementar las medidas que permitan la respectiva observancia de dichas disposiciones, desde el ámbito de sus competencias y conforme a la legislación mexicana aplicable.
3. Con relación al párrafo operativo 10, se informa que México apoya los esfuerzos existentes de las Naciones Unidas como la Junta del Registro de las Naciones Unidas de los daños y perjuicios causados por la construcción de un muro en el Territorio Palestino Ocupado, que podría constituir un esfuerzo inicial para recabar pruebas

sobre los daños, pérdidas y perjuicios derivados de la ocupación del Territorio Palestino Ocupado.

El Estado mexicano ya ha iniciado acciones jurídicas que promueven la determinación de responsabilidad tanto estatal como penal individual en el ámbito de la situación en el Territorio Palestino Ocupado. Lo anterior, con la finalidad de promover la rendición de cuentas a favor de las víctimas de esta situación. Estas acciones incluyen la remisión de la situación de Palestina a la Corte Penal Internacional, así como la declaración de intervención en el caso de Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia.

Nicaragua

[Original: español e inglés]
[7 de noviembre de 2024]

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua defiende y promueve el multilateralismo, construyendo relaciones basadas en el respeto, la igualdad, la solidaridad, la cooperación mutua y la autodeterminación de los pueblos, defendiendo y cumpliendo el derecho internacional y los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas.

Nicaragua aboga por el respeto irrestricto de la soberanía, la integridad territorial, la independencia y el derecho a la autodeterminación de nuestros pueblos.

El Gobierno de Nicaragua reafirma su firme compromiso con el estado de derecho a nivel internacional, la búsqueda del anhelado entendimiento, la convivencia pacífica entre las naciones y sigue promoviendo la cultura de la paz, basando sus relaciones internacionales en la amistad, la solidaridad y la reciprocidad entre los pueblos, reconociendo el principio de la solución pacífica de las controversias internacionales por los medios previstos en el derecho internacional.

Nicaragua comparte lazos históricos y expresiones mutuas de fraternidad y solidaridad con Palestina, siendo el primer país centroamericano en establecer relaciones diplomáticas con la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en 1979 y de los primeros países en reconocer oficialmente a Palestina como Estado independiente.

Desde entonces, el Estado de Palestina mantiene una embajada en Managua. Nicaragua también mantiene una embajada en Ramala (Palestina), a través de la cual fortalecemos nuestras relaciones mutuas de cooperación y solidaridad.

En 2008, la Asamblea General aprobó el nombramiento de Nicaragua como miembro del Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino, y con motivo de la primera ampliación de su Buró, en 2013, Nicaragua fue electa Vicepresidenta del Comité.

Nicaragua ha desempeñado un papel activo y constructivo, especialmente en momentos críticos de la historia para el pueblo palestino en su inquebrantable voluntad por ejercer sus derechos inalienables a la autodeterminación y soberanía, su derecho a la materialización del Estado palestino, libre e independiente, conforme las fronteras de 1967 y con su capital en Jerusalén Oriental.

El Gobierno de Nicaragua ha mantenido desde siempre una posición firme y solidaria en apoyo a Palestina.

Nicaragua, al igual que la comunidad internacional, considera que las acciones emprendidas por Israel constituyen claras violaciones de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.

En enero de 2024, el Gobierno de Nicaragua, como Estado parte de la Convención contra el Genocidio, conforme a su obligación de prevenir el genocidio y cooperar con tal fin con las demás partes contratantes, presentó ante la Corte Internacional de Justicia, una solicitud para participar en el caso incoado por Sudáfrica contra Israel, el 29 de diciembre de 2023, relacionado a la aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza.

La solicitud de Nicaragua para participar en dicho proceso fue hecha bajo el artículo 62 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, como un Estado parte sobre el fondo del asunto, y no como un participante en la interpretación de la Convención, reflejando el compromiso del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y del Pueblo de Nicaragua con el derecho internacional, en particular, con las obligaciones de los Estados para prevenir el genocidio, poner fin a ese flagelo y contribuir en la lucha del pueblo palestino por su libertad, y su derecho a ser miembro pleno de la Organización de las Naciones Unidas.

En febrero de 2024, el Gobierno de Nicaragua notificó a los Gobiernos del Reino Unido, Alemania, Países Bajos y Canadá, su decisión de responsabilizarlos conforme al derecho internacional por violaciones flagrantes y sistemáticas a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, el derecho internacional humanitario y el derecho consuetudinario, incluido el derecho sobre la ocupación en los Territorios Palestinos Ocupados, en particular la Franja de Gaza.

El Gobierno de Nicaragua está tomando todas las acciones legales que contribuyan a detener el genocidio del pueblo palestino y terminar la ocupación ilegal de Israel de los Territorios Palestinos Ocupados.

Asimismo, en marzo de 2024 el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia contra la República Federal de Alemania por violaciones a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales, los principios intransgredibles del derecho internacional humanitario y otras normas imperativas del derecho internacional general en relación con el Territorio Palestino Ocupado, en particular la Franja de Gaza.

Nicaragua adoptó esta decisión de conformidad con sus obligaciones bajo el derecho internacional de garantizar el respeto a los textos internacionales fundamentales y al derecho internacional consuetudinario.

Nicaragua, en su solicitud al alto tribunal, hizo fundamentalmente dos peticiones: la primera que Alemania suspendiera su apoyo militar a Israel y la segunda que renovara su apoyo financiero al Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA).

El Gobierno de Nicaragua reconoció la decisión de la Corte de recordar a todos los Estados sus obligaciones internacionales con respecto a la transferencia de armas a Israel, incluyendo a Alemania. Lo anterior reafirmó que ningún Estado puede darse por no enterado de sus obligaciones con respecto al riesgo de genocidio en Gaza y otras violaciones de derecho internacional.

Nicaragua ha apoyado en Naciones Unidas todas las iniciativas que conlleven a la justicia, rendición de cuenta y el fin de la impunidad ante los crímenes de guerra y el genocidio contra el pueblo palestino.

Nicaragua ha votado a favor de todas las resoluciones sobre la cuestión de Palestina en la Asamblea General, así como de todas las resoluciones al respecto de las comisiones principales, así como la resolución [ES-10/24](#).

Por consiguiente, el Gobierno de Nicaragua decidió el 11 de octubre de 2024, en un acto de solidaridad permanente con el pueblo y Gobierno de Palestina, con los pueblos que sufren el martirio, la destrucción y la barbarie, y en estricto apego al derecho internacional y las convenciones que rigen las relaciones civilizadas entre Estados y Gobiernos del Mundo, romper toda relación diplomática con el Gobierno del Estado de Israel.

Nicaragua no reconoce como legal la situación derivada de la presencia ilegal de Israel en el Territorio Palestino Ocupado, tampoco presta ningún tipo de ayuda ni asistencia para mantener la situación creada por la presencia ilegal de Israel en el Territorio.

Nicaragua considera que puede aportar para realizar acciones concretas, ya sea en la Corte Internacional de Justicia, la Asamblea General y todos sus órganos multilaterales.

Nicaragua considera que se requieren de todos los estudios e investigaciones realizadas por los diferentes mecanismos de Naciones Unidas, que comprueban que Israel practica un sistema de segregación y *apartheid* impuesto contra la totalidad del pueblo palestino, a través de la geografía palestina y los refugiados palestinos.

Ante esta política de *apartheid*, es necesario, tal como algunos países lo han señalado, reactivar el Comité Especial de Naciones Unidas Contra el *Apartheid*, para considerar la situación del *apartheid* en Palestina.

Como es de su conocimiento, hay una demanda global de que las Naciones Unidas debe implementar las mismas medidas aplicadas a Israel por su política de *apartheid*, que fueron aplicadas a Sudáfrica, entre ellas la suspensión de Israel de la Asamblea General.

El Gobierno y el pueblo de Nicaragua se mantendrán firmes en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, en respeto y defensa del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, las resoluciones de la Asamblea General y en el ejercicio soberano de sus derechos a mantener relaciones internacionales con los Gobiernos y pueblos del mundo en condiciones de igualdad y solidaridad.

Omán

[Original: árabe]
[8 de noviembre de 2024]

El Sultanato de Omán reafirma que acata la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional humanitario y sigue apoyando la causa palestina por diversos medios legales y humanitarios, con miras a establecer un Estado palestino independiente dentro de las fronteras de 1967, con Jerusalén Oriental como capital.

También desea declarar que se compromete plenamente a aplicar todas las medidas que se establecen en la resolución, entre ellas trabajar para hacer realidad el derecho del pueblo palestino a la libre determinación, no reconocer la ocupación por Israel de los territorios ocupados y abstenerse de establecer relaciones con la entidad sionista.

El Sultanato de Omán acoge con satisfacción el reconocimiento por parte de la Asamblea General en su resolución [ES-10/24](#) de la necesidad de establecer un mecanismo internacional de reparaciones por las violaciones cometidas por Israel y reitera que Israel debe asumir la plena responsabilidad de reparar el daño que ha causado al pueblo palestino como resultado de sus políticas y prácticas ilegales.

El Sultanato de Omán, con arreglo a su profunda creencia en el derecho internacional, el derecho internacional y en los derechos humanos, trabajará codo con codo con la comunidad internacional para garantizar justicia y reparación al pueblo palestino. Kuwait apoya toda medida adicional que pueda reforzar el mecanismo internacional y mejorar su eficacia.

Países Bajos (Reino de)

[Original: inglés]
[8 de noviembre de 2024]

El 19 de julio de 2024 la Corte Internacional de Justicia emitió una opinión consultiva para la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la cuestión de las acciones de Israel en el Territorio Palestino Ocupado. La Cámara de Representantes solicitó al Gobierno una carta “en la que explique cómo interpreta dicha decisión y qué consecuencias tendrá para la política gubernamental sobre Israel y los Territorios Palestinos, incluida la política de disuasión”.

Aunque no son jurídicamente vinculantes, las opiniones consultivas de la Corte tienen autoridad porque representan las opiniones del órgano judicial supremo de las Naciones Unidas sobre el derecho internacional pertinente. En su opinión consultiva del 19 de julio, la Corte aplicó la legislación pertinente a los hechos que llegaron a conocimiento de la Corte en parte como resultado de la labor de diversos organismos de las Naciones Unidas y relatores especiales.

En su opinión consultiva, la Corte afirma que las acciones de Israel en el Territorio Palestino Ocupado violan diversas normas del derecho internacional:

- a) La prohibición del uso de la fuerza por parte de los Estados, a la luz de la anexión por Israel del Territorio Palestino Ocupado;
- b) El derecho humanitario, incluido el derecho de la ocupación;
- c) Los derechos humanos, incluida la prohibición de discriminación y el derecho a la libre determinación.

En opinión de la Corte, la violación de la prohibición de anexión y el hecho de que el pueblo palestino no pueda ejercer su derecho a la libre determinación llevan a la conclusión de que la presencia continuada de Israel en el Territorio Palestino Ocupado, y por tanto la ocupación continuada de ese territorio, es ilegal.

La Corte atribuye una serie de consecuencias jurídicas a las violaciones cometidas por Israel, a saber:

- a) Israel debe poner fin a su presencia en el Territorio Palestino Ocupado lo antes posible, detener inmediatamente la expansión de los asentamientos y evacuar a todos los colonos del Territorio Palestino Ocupado. Además, Israel debe proporcionar reparación a todas las personas físicas y jurídicas que hayan sufrido daños como consecuencia de las acciones ilegales de Israel;
- b) En virtud del derecho internacional, otros Estados (incluidos los Países Bajos) tienen la obligación de no reconocer la situación derivada de la ocupación ilegal de los Territorios Palestinos por parte de Israel y de no prestar ninguna ayuda o asistencia que contribuya a mantener la situación ilegal. De conformidad con el Convenio de Ginebra relativo a la Protección debida a las Personas Civiles en Tiempo de Guerra (Cuarto Convenio de Ginebra), todos los Estados tienen la obligación de garantizar que Israel cumple el derecho internacional humanitario, tal como está consagrado en dicho tratado;

c) En virtud del derecho internacional, las organizaciones internacionales también tienen la obligación de no reconocer la situación derivada de la ocupación ilegal de los Territorios Palestinos por parte de Israel. Eso también se aplica al propio Consejo de Seguridad. Además, la Corte encarga a la Asamblea General y al Consejo que estudien qué otras medidas son necesarias para poner fin rápidamente a la ocupación ilegal de Israel.

La Corte ofrece un análisis en profundidad de las acciones de Israel en el Territorio Palestino Ocupado y de las consiguientes violaciones del derecho internacional. La Corte llega a la conclusión de que la ocupación de los Territorios Palestinos por parte de Israel es ilegal porque constituye una violación de la prohibición de anexión y frustra el derecho del pueblo palestino a la libre determinación.

La opinión consultiva confirma también que, pese a la retirada de sus fuerzas armadas de Gaza en 2005, Israel sigue teniendo obligaciones en virtud del derecho de la ocupación con respecto a Gaza.

En su informe consultivo, la Corte concluye también que las acciones de Israel en el Territorio Palestino Ocupado constituyen una violación del artículo 3 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. Ese artículo dispone que “los Estados partes condenan especialmente la segregación racial y el *apartheid* y se comprometen a prevenir, prohibir y eliminar en los territorios bajo su jurisdicción todas las prácticas de esta naturaleza”. En una carta anterior a la Cámara de Representantes sobre este tema¹, el Gobierno manifestó su postura de que el *apartheid* es un término jurídico específico, y que corresponde a un tribunal determinar si el término se aplica en un caso dado. En su opinión consultiva, la Corte deja en claro que Israel viola el artículo 3 de la Convención Internacional, pero no ofrece una respuesta clara a la pregunta de si sólo existe segregación racial o también *apartheid* en el Territorio Palestino Ocupado.

La Corte analiza también los Acuerdos de Oslo (Acuerdo de Oslo I y Acuerdo de Oslo II). La Corte reconoce que Israel y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) llegaron a acuerdos en el marco de los Acuerdos de Oslo acerca de sus facultades y responsabilidades en relación con las zonas ocupadas por Israel. En virtud de los Acuerdos de Oslo, Israel tiene autoridad sobre gran parte del territorio ocupado hasta que Israel y la OLP lleguen a nuevos acuerdos y se alcance finalmente una solución biestatal. Todo ello se ha de hacer respetando las normas y principios de derechos humanos y del estado de derecho internacionalmente aceptados. Las resoluciones de las Naciones Unidas (por ejemplo, la resolución 77/126 de la Asamblea General y las resoluciones del Consejo de Seguridad 1515 (2003), 2334 (2016), 2735 (2024) respetan los Acuerdos de Oslo y la solución biestatal correspondiente. La Corte afirma que los derechos legítimos del pueblo palestino reconocidos en los Acuerdos de Oslo (Acuerdo de Oslo II, art. XXXI, 7) incluyen el derecho a la libre determinación. Además, la Corte señala que los Acuerdos de Oslo impiden a las partes “emprender o adoptar toda medida que modifique el estatuto de la Ribera Occidental y la Franja de Gaza a la espera del resultado de las negociaciones sobre el estatuto permanente”. La Corte observa además que, al interpretar los Acuerdos de Oslo, es necesario tener en cuenta el artículo 47 del Cuarto Convenio de Ginebra, que establece que no se podrá privar a las personas protegidas de los beneficios del Convenio por acuerdo concertado entre las autoridades del territorio ocupado y la Potencia ocupante. En resumen, la Corte llega a la conclusión de que los Acuerdos de Oslo no eximen a Israel de sus obligaciones en virtud del derecho de la ocupación. Ejemplos de violaciones del derecho de la ocupación señalados por la

¹ Véase, entre otros, Reino de los Países Bajos, Cámara de Representantes, Documentos Parlamentarios 2022/23, 30 950, núm. 320.

Corte son el desplazamiento forzado de personas, el traslado de israelíes a territorio ocupado y la destrucción de bienes.

Aún antes de que la Corte emitiera su opinión consultiva, los Países Bajos y otros Estados consideraban ilegítimos los asentamientos y la construcción de un muro en el Territorio Palestino Ocupado. La soberanía israelí sobre el Territorio Palestino Ocupado nunca ha sido reconocida. Los Países Bajos han articulado esa postura de forma coherente y enfática. Para ello se elaboró un marco de políticas compuesto por las medidas que se exponen a continuación².

a) Desde 2006, el Gobierno neerlandés aplica una política de disuasión respecto a las actividades de empresas neerlandesas en los asentamientos israelíes en territorio ocupado o en beneficio de ellos. En consonancia con esa política, el Gobierno neerlandés no presta ningún servicio a empresas neerlandesas en relación con actividades que contribuyan directamente a la construcción y el mantenimiento de asentamientos o que faciliten directamente los asentamientos. Si las empresas neerlandesas preguntan al Gobierno sobre las posibilidades de realizar actividades en territorio ocupado, se les informa de los posibles riesgos, incluidos los relacionados con los derechos humanos. La política de disuasión del Gobierno está por encima de la propia responsabilidad social de las empresas de respetar los derechos humanos. El Gobierno espera que las empresas hagan negocios de acuerdo con las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales sobre Conducta Empresarial Responsable de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos. Las empresas son libres de decidir a qué actividades desean dedicarse.

b) Dado que Israel nunca ha adquirido soberanía sobre el territorio que ocupa desde junio de 1967, los Países Bajos adoptan una postura estricta en lo que respecta a la validez de los tratados bilaterales entre su país e Israel: los tratados celebrados por Israel en su propio nombre no pueden aplicarse al territorio ocupado; esos tratados sólo se aplican dentro de Israel, sobre la base de las fronteras internacionalmente reconocidas de ese país. Un ejemplo de ello es el Convenio sobre la seguridad social entre los Países Bajos e Israel, que no se aplica en el territorio ocupado por Israel. En virtud de la Ley de Limitación de Exportación de Prestaciones (*Wet beperking export uitkeringen*), que se basa en el principio de que los Países Bajos sólo pueden exportar prestaciones de la seguridad social a países con los que hayan celebrado un tratado, existen limitaciones a la exportación de pagos de la seguridad social neerlandesa a solicitantes de prestaciones que residan en asentamientos israelíes.

c) A escala de la Unión Europea se han tomado nuevas medidas para aclarar la diferencia entre esos ámbitos. Por ejemplo, en 2013 la Comisión Europea adoptó las “Directrices sobre el derecho de las entidades israelíes y sus actividades en los territorios ocupados por Israel desde junio de 1967 a optar a las subvenciones, premios e instrumentos financieros financiados por la UE a partir de 2014” (2013/C 205/05), según las cuales solo las entidades israelíes con sede dentro de las fronteras anteriores a 1967 pueden optar a subvenciones, premios e instrumentos financieros. Cuando se aplica la legislación de la Unión Europea sobre indicación de origen, se distingue entre productos fabricados en Israel y productos fabricados en los asentamientos del Territorio Palestino Ocupado. En 2015, la Comisión Europea publicó una nota interpretativa sobre la aplicabilidad de la legislación de la Unión Europea referente a la indicación de origen -que se aplica de forma general, independientemente del país o zona de procedencia de un determinado producto- a las mercancías procedentes de los territorios ocupados por Israel desde junio de 1967. En su sentencia de 12 de noviembre de 2019, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirmó en un dictamen preliminar que el hecho de que los productos

² Véase, entre otros, Reino de los Países Bajos, Cámara de Representantes, Documentos Parlamentarios 2018/19, 23 432, núm. 471.

alimenticios procedan de un asentamiento israelí puede influir en las decisiones de compra de los consumidores. Por lo tanto, no indicarlo podría inducir a error al consumidor. Se trata de una sentencia jurídicamente vinculante, en línea con la política neerlandesa de los últimos años³. La Autoridad Neerlandesa de Seguridad Alimentaria y de los Productos de Consumo es responsable de aplicar la legislación de la Unión Europea para garantizar que las indicaciones de origen sean exactas y no induzcan a error. Las mercancías originarias del territorio ocupado por Israel desde junio de 1967 no pueden acogerse a las preferencias arancelarias. Sólo los productos originarios de Israel propiamente dicho pueden optar a un trato preferencial en el marco del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, e Israel, por otra.

Además, los Países Bajos están muy preocupados por la creciente inestabilidad en la Ribera Occidental ocupada. Ello se debe a una serie de factores, entre ellos la violencia de los colonos. Para evitar una escalada, los Países Bajos han presionado activamente a la Unión Europea para que imponga sanciones en materia de derechos humanos a las personas y entidades que participen en actos de violencia de ese tipo. Con esas sanciones (como las restricciones a los viajes y al comercio y la congelación de las cuentas bancarias en la Unión Europea), los países de la Unión Europea envían el claro mensaje de que están muy preocupados por este asunto, y de que esta violencia tiene consecuencias. Se han adoptado dos paquetes de sanciones.

La opinión consultiva de la Corte justifica el mantenimiento de esas medidas. En el próximo período, el Gobierno llevará a cabo nuevos análisis para determinar si hay motivos para modificar el marco político actual sobre la base de la opinión consultiva de la Corte. Ese análisis debe hacerse cuidadosamente, lo que llevará algún tiempo. En el próximo período, las posibles consecuencias de la opinión consultiva de la Corte serán objeto de debate internacional. El Gobierno considera importante escuchar las opiniones de otros países y planteará este y otros asuntos en los debates que tendrán lugar durante la semana ministerial del próximo período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (la semana de alto nivel). Por lo tanto, el Gobierno informará a la Cámara más adelante sobre cualquier cambio en el marco actual de las políticas.

Pakistán

[Original: inglés]
[8 de noviembre de 2024]

El Pakistán acogió con beneplácito la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas que se derivan de las políticas y prácticas de Israel en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental.

La sentencia de la Corte establece claramente que las políticas y prácticas ilegales de Israel en el Territorio Palestino Ocupado incumplen la obligación de Israel de respetar el derecho del pueblo palestino a la libre determinación, y que Israel tiene la obligación de poner fin a su ocupación ilegal, cesar sus actividades ilegales de asentamiento y reparar el daño causado.

Cabe recordar que el Pakistán había hecho una presentación por escrito ante la Corte Internacional de Justicia sobre el caso en julio de 2023, y más tarde también hizo llegar a la Corte una dúplica. El Pakistán participó también en la audiencia pública oral celebrada por la Corte sobre el caso en febrero de 2024. En sus alegaciones ante la Corte, el Pakistán reiteró su firme e inquebrantable apoyo al

³ Véase también Documento Parlamentario 2019/20, 23 432, núm. 475.

derecho de libre determinación de los palestinos y subrayó la ilegalidad de la ocupación israelí.

A continuación se enumeran las medidas adoptadas por el Gobierno del Pakistán para aplicar la resolución [ES-10/24](#) de la Asamblea General, aprobada el 18 de septiembre de 2024:

a) El Gobierno del Pakistán se mantiene firme en la defensa del derecho internacional, especialmente tal como se refleja en la opinión consultiva de la Corte y en la resolución [ES-10/24](#) de la Asamblea General. El Pakistán, en sus declaraciones y en los foros internacionales pertinentes, incluida la Asamblea y el Consejo de Seguridad, ha defendido sistemáticamente el derecho del pueblo palestino a la libre determinación, incluidas las declaraciones del Presidente y del Primer Ministro. El Pakistán también ha expresado su apoyo a Palestina en sus declaraciones en otros foros, como la Organización de Cooperación Islámica y el Movimiento de Países No Alineados;

b) El Pakistán ha participado activamente en los debates de la Asamblea General sobre la situación actual, prestando pleno apoyo a la delegación palestina;

c) El Pakistán ha afirmado además que no reconoce ningún cambio en el estatuto físico, demográfico, institucional o jurídico del Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, impuesto por Israel. En consonancia con esa postura, el Pakistán se ha asegurado de que las políticas y prácticas nacionales, así como las actividades de las entidades bajo su jurisdicción, no ayuden ni contribuyan a mantener la situación creada por la presencia continuada de Israel en el Territorio Palestino Ocupado;

d) El Pakistán se sumó también a una iniciativa liderada por Türkiye, junto con otros 53 signatarios, para lo cual envió una carta conjunta al Consejo de Seguridad instándole a tomar medidas inmediatas para detener el flujo de armas y municiones hacia Israel. En la carta se expresó una profunda preocupación por la violencia sin precedentes y creciente y por la violación del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario, en la Franja de Gaza, y se pidió que se tomaran medidas inmediatas para detener el suministro o la transferencia de armas, municiones y equipo conexas a Israel, tal como se estipula en la resolución [ES-10/24](#);

e) Debido a la ausencia de relaciones diplomáticas formales con Israel, el Pakistán se ha asegurado de que sus nacionales, empresas y entidades bajo su jurisdicción se abstengan de cualquier acción que pueda implicar el reconocimiento de la presencia ilegal de Israel en el Territorio Palestino Ocupado o la prestación de ayuda o asistencia a su mantenimiento. El Pakistán ha adoptado medidas para prevenir el apoyo indirecto, asegurándose de que las empresas y los particulares se mantengan informados acerca de sus responsabilidades en virtud del derecho internacional;

f) El Pakistán ha apoyado activamente las solicitudes de rendición de cuentas por todas las violaciones cometidas por Israel en el Territorio Palestino Ocupado. Ha abogado por la creación de un mecanismo internacional para reclamar reparaciones por los daños, pérdidas o perjuicios derivados de los actos ilícitos de Israel. El Pakistán también ha respaldado la creación de un registro internacional de daños y perjuicios, en coordinación con las Naciones Unidas y los organismos pertinentes, a fin de documentar los daños sufridos por el pueblo palestino debido a las acciones de Israel, tal como se contempla en la resolución [E-10/24](#);

g) El Pakistán participó en la reunión a nivel ministerial sobre el tema “La situación en Gaza y la aplicación de la solución biestatal como vía para una paz justa y completa”, organizada por el grupo de contacto ministerial Árabe-Islámica, en

coordinación con la Unión Europea y Noruega, el 26 de septiembre de 2024. El Pakistán pidió la retirada inmediata, completa e incondicional de Israel de todos los territorios palestinos ocupados en un plazo de 12 meses, como se especifica en la resolución [ES-10/24](#), y el fin de las políticas ilegales de Israel en el Territorio Palestino Ocupado. Como resultado de esa reunión, se puso en marcha la Alianza Global para Implementar la Solución Biestatal con el propósito de movilizar aún más el apoyo internacional a la paz;

h) El Pakistán desempeñó un papel activo en la reunión de coordinación de la Organización de Cooperación Islámica a nivel de ministros de relaciones exteriores y del Comité de Seis Miembros sobre Palestina, celebrada los días 25 y 26 de septiembre de 2024 durante el septuagésimo noveno periodo de sesiones de la Asamblea General. El Pakistán reafirmó su apoyo inquebrantable a los derechos inalienables del pueblo palestino, incluido el derecho a la libre determinación y a la soberanía sobre los territorios ocupados;

i) El Pakistán sigue abogando por un amplio consenso internacional para abordar las cuestiones humanitarias, políticas y jurídicas que afronta el pueblo palestino. Ha hecho hincapié en la importancia de exigir a Israel que rinda cuentas de sus actos y garantice el cumplimiento del derecho internacional, entre otras cosas alentando a otros Estados a que adopten medidas similares que refuercen el respeto de las resoluciones de las Naciones Unidas y las opiniones de la Corte Internacional de Justicia;

j) El Pakistán también ha firmado la declaración de compromisos compartidos sobre el UNRWA, iniciada por Kuwait, Jordania y Noruega, entre otros. Reconoce el importante e indispensable papel del Organismo y expresa su apoyo al mismo a la luz de las dificultades y retos que afronta;

k) El 7 de octubre de 2024 se celebró en Islamabad la conferencia de todos los partidos, a la que asistieron el Presidente, el Primer Ministro y los líderes de los principales partidos políticos pakistaníes. En la conferencia se pidió a la Organización de Cooperación Islámica (OCI) que convocara una cumbre de emergencia para abordar la situación en Palestina, y el Primer Ministro anunció la formación de un grupo de trabajo especial para implicar a otros países islámicos en la tarea de alzar una voz colectiva contra la actual campaña militar de Israel en Gaza. Anteriormente, la Asamblea Nacional y el Senado también habían adoptado varias resoluciones en las que condenaban las persistentes violaciones del derecho internacional por parte de Israel y defendían el derecho de libre determinación del pueblo palestino.

Esas aportaciones ponen de relieve el compromiso del Pakistán con la defensa del derecho internacional y los derechos del pueblo palestino, al tiempo que demuestran su papel activo en las iniciativas multilaterales para abordar la situación en el Territorio Palestino Ocupado de conformidad con la resolución [ES-10/24](#).

El Pakistán pide la aplicación inmediata y plena de la opinión consultiva de la Corte. Esperamos que la sentencia de la Corte sea un paso importante hacia el fin de la ocupación israelí, la realización del derecho inalienable de los palestinos a la libre determinación, y la creación de un Estado de Palestina viable, seguro, contiguo y soberano sobre la base de las fronteras anteriores a 1967 y con Al-Quds Al-Sharif como capital.

Portugal

[Original: inglés]
[8 de noviembre de 2024]

Portugal votó a favor de la resolución 77/247, de 30 de diciembre de 2022, en la que la Asamblea General solicitó a la Corte Internacional de Justicia que emitiera una opinión consultiva sobre las consecuencias jurídicas derivadas de las políticas y prácticas de Israel en el Territorio Palestino Ocupado.

Además, Portugal votó a favor y acogió con satisfacción la aprobación de la resolución de la Asamblea General que reafirma los aspectos clave de la opinión consultiva de la Corte y pide medidas concretas para aplicarla. Esa votación, y la propia sentencia de la Corte, supusieron un rechazo abrumador a la normalización del *statu quo* en lo que respecta a las políticas y prácticas de Israel en el Territorio Palestino Ocupado.

En todos los foros internacionales pertinentes, Portugal ha subrayado sistemáticamente las obligaciones de Israel en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, a saber, la necesidad de acatar todas las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, reafirmando que la presencia de Israel en el Territorio Palestino Ocupado es ilegal en virtud del derecho internacional y debe terminar.

Hemos reafirmado nuestro compromiso férreo y de larga data con el derecho internacional, el derecho internacional humanitario y la lucha contra la impunidad. En ese contexto, hemos recordado sistemáticamente a Israel su obligación de facilitar el acceso seguro y sin trabas de la ayuda humanitaria que salva vidas.

Portugal ha subrayado la necesidad de garantizar la rendición de cuentas por las violaciones del derecho internacional y del derecho internacional humanitario en el Territorio Palestino Ocupado mediante investigaciones adecuadas, justas e independientes a los niveles pertinentes.

Portugal ha condenado sin reservas la legislación aprobada por el parlamento israelí contra el UNRWA. Hemos reforzado aún más nuestro compromiso de seguir apoyando al Organismo, reafirmando que un UNRWA fuerte es un elemento fundamental en la ecuación para la paz, así como hacia la construcción de la solución biestatal.

Hemos estado entre los que han instado a Israel a asegurarse que el UNRWA continúe llevando a cabo su crucial trabajo de conformidad con su mandato, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1949 y renovado desde entonces. Hemos seguido recalcando que todos los organismos de las Naciones Unidas encarnan, promueven y respetan el derecho internacional, ya que defienden y aplican tanto la letra como el espíritu de la Carta de las Naciones Unidas, que todos los Estados miembros de la Organización deben acatar.

Qatar

[Original: árabe]
[8 de noviembre de 2024]

Medidas que el Estado de Qatar ha adoptado o tiene previsto adoptar para aplicar los párrafos 4, 5 y 10 de la resolución ES-10/24 de la Asamblea General

Medidas que el Estado de Qatar ha adoptado o tiene previsto adoptar de conformidad con el párrafo 4 de la resolución

- En 2012, con la Decisión núm. 27 (2012) del Gabinete, el Estado de Qatar creó un Comité Nacional para el Derecho Internacional Humanitario. El Comité tiene

una serie de funciones, principalmente promover el derecho internacional humanitario y trabajar para alcanzar los objetivos de los instrumentos y acuerdos internacionales.

- El Estado de Qatar es parte en 19 convenios de derecho internacional humanitario, incluidos los convenios y protocolos que constituyen el marco principal del derecho internacional humanitario, que son los siguientes:

Los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y sus dos Protocolos Adicionales, a saber, el Protocolo adicional I, de 8 de junio de 1977, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales, y el Protocolo adicional II, de 8 de junio de 1977, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional. En su calidad de parte, el Estado de Qatar ha venido trabajando para apoyar la aplicación de los Convenios de Ginebra y sus Protocolos en el Territorio Palestino Ocupado a través de los mecanismos pertinentes, en particular la Media Luna Roja de Qatar, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

El Estado de Qatar seguirá trabajando por medio de esos marcos y plataformas para impulsar las iniciativas dirigidas a aplicar las normas del derecho internacional humanitario, centrándose en la protección del pueblo palestino como pueblo que vive bajo la ocupación y la agresión.

- El Estado de Qatar ha aceptado la jurisdicción de la Comisión Internacional Humanitaria de Encuesta establecida en virtud del Protocolo I Adicional de 1977 a los Convenios de Ginebra de 1949.
- En 1976, el Estado de Qatar se adhirió a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de 1965, y ha adaptado su legislación nacional a las obligaciones que le impone dicha Convención. El Estado de Qatar ha presentado informes periódicos y ha participado en los trabajos del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial a través de delegaciones de alto nivel en sus sesiones de Ginebra.
- El Estado de Qatar se ha mantenido firme en su postura de negarse categóricamente a reconocer la presencia ilegal israelí en el Territorio Palestino Ocupado. Prohíbe estrictamente todo acto, medida o esfuerzo que ayude o contribuya a mantener la presencia ilegal israelí en el Territorio Palestino Ocupado. Se trata de una política coherente que el Estado de Qatar ha declarado públicamente a los más altos niveles regionales e internacionales, como en el discurso anual pronunciado por Su Alteza el Emir del Estado de Qatar ante el debate general de la Asamblea General y con ocasión del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. A este respecto, el 25 de julio de 2023 Qatar presentó un memorando escrito a la Corte Internacional de Justicia en relación con la opinión consultiva sobre la actual ocupación israelí de Palestina.
- Qatar sigue instando a los gobiernos a que reconozcan formalmente la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia y sigan siendo conscientes de sus repercusiones jurídicas para la presencia y las prácticas israelíes en el Territorio Palestino Ocupado. Qatar ha emitido declaraciones y resoluciones oficiales que reflejan su aceptación de la opinión consultiva y su compromiso de actuar en consonancia con sus conclusiones.
- El Estado de Qatar ha venido realizando labores de mediación para desescalar la situación en el Territorio Palestino Ocupado, alcanzar un alto el fuego inmediato y permanente en Gaza, lograr la liberación de prisioneros y detenidos,

garantizar el acceso ininterrumpido de la ayuda humanitaria y proteger a los civiles. El objetivo es aliviar el sufrimiento de nuestros hermanos palestinos y allanar el camino hacia una solución política global y justa al conflicto. Todo ello se deriva de la postura inquebrantable del Estado de Qatar en apoyo de la justa causa palestina y de los derechos legítimos del fraternal pueblo palestino, sobre todo su derecho a la libre determinación y al establecimiento de un Estado independiente a lo largo de las fronteras de 1967, con Jerusalén Oriental como capital.

- Qatar seguirá alentando la puesta en marcha de conversaciones de paz exhaustivas y serias, con el objetivo de una solución biestatal que garantice el derecho a la libre determinación, el derecho al retorno y la creación de un Estado palestino independiente y plenamente soberano, de conformidad con las resoluciones reconocidas internacionalmente. Qatar se incorporó al comité ministerial que se estableció tras la cumbre árabe-islámica sobre Gaza, y contribuye a la iniciativa de solución biestatal que el comité ministerial árabe-islámico, la Unión Europea y Noruega presentaron en la semana de alto nivel de la Asamblea General en septiembre de 2024.
- El Estado de Qatar fue uno de los patrocinadores de la resolución [ES-10/23](#) de la Asamblea General sobre la admisión de Palestina como miembro de las Naciones Unidas.
- Qatar ha incrementado la financiación y el apoyo a las organizaciones que trabajan para salvaguardar los derechos de los palestinos, garantizar que la prestación de ayuda cumple los principios rectores establecidos por la Corte Internacional de Justicia, y promover iniciativas para documentar las violaciones de los derechos humanos y garantizar la rendición de cuentas.
- El Estado de Qatar es uno de los principales países que brindan ayuda humanitaria y al desarrollo para ayudar al hermano pueblo palestino a aliviar el sufrimiento humanitario derivado de la agresión y la ocupación israelíes. Ello incluye el apoyo continuo al UNRWA. En septiembre de 2024, Qatar anunció un compromiso de 100 millones de dólares para hacer frente a la crisis humanitaria en la Franja de Gaza, incluido el apoyo al UNRWA. La ayuda humanitaria y al desarrollo contribuye a reforzar el firme apego del pueblo palestino a su tierra hasta el momento en que establezca un Estado independiente y disfrute de su derecho a la libre determinación.
- Qatar colabora con asociados internacionales para alentar a los Estados a que adopten un enfoque que utilice incentivos y medidas económicas para promover el cumplimiento de las normas internacionales relacionadas con el Territorio Palestino Ocupado. Ello incluye restricciones comerciales a bienes y productos procedentes de los asentamientos, que son ilegales según el derecho internacional; iniciativas de cooperación económica que impliquen directamente a las comunidades palestinas; e iniciativas y esfuerzos en materia de desarrollo sostenible.

II. Medidas que el Estado de Qatar ha adoptado o tiene previsto adoptar de conformidad con el párrafo 5 de la resolución

El Estado de Qatar ha creado un comité especial para el seguimiento y la aplicación de las sanciones internacionales. Ello incluye el seguimiento y la aplicación de sanciones a personas, Estados y entidades sujetos a sanciones internacionales. En consonancia con el inquebrantable compromiso de Qatar con el fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales, dicho comité trabaja para garantizar el pleno cumplimiento de las sanciones internacionales. Toma medidas

para controlar toda actividad que pueda contravenir dichas sanciones. Qatar procura abstenerse de entablar relaciones económicas o comerciales con Israel relacionadas con el Territorio Palestino Ocupado, en consonancia con su firme postura de apoyo a los derechos del pueblo palestino.

III. Medidas que el Estado de Qatar ha adoptado o tiene previsto adoptar de conformidad con el párrafo 10 de la resolución

El Estado de Qatar asigna la máxima importancia al establecimiento de un mecanismo internacional de reparación de todos los daños, pérdidas o perjuicios derivados de los hechos internacionalmente ilícitos de Israel en el Territorio Palestino Ocupado. El Estado de Qatar trabajará para ayudar a establecer dicho mecanismo en coordinación con las Naciones Unidas, sus organismos competentes y los asociados internacionales. Ello incluye instar a los Estados Miembros a que demuestren la voluntad política necesaria para adoptar las medidas y acciones necesarias para el establecimiento de dicho mecanismo, con el fin de abordar los daños derivados de los actos cometidos por la ocupación israelí y encontrar soluciones.

República Árabe Siria

[Original: árabe]
[8 de noviembre de 2024]

La República Árabe Siria afirma la importancia de tomar las siguientes medidas para aplicar la resolución [ES-10/24](#) de la Asamblea General:

- Debe ponerse fin inmediatamente al crimen de genocidio que se está cometiendo contra el pueblo palestino. Es preciso poner fin a la catástrofe humanitaria en la Franja de Gaza y a los ataques de las fuerzas de ocupación y las milicias de colonos, incluso en la Ribera Occidental. Deben tomarse medidas urgentes y decisivas para poner fin a las continuas y sistemáticas violaciones por parte de Israel del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas y sus principios, así como a las políticas hostiles de Israel hacia los representantes de las Naciones Unidas, especialmente el Secretario General, y sus organismos, incluido el UNRWA.
- Debe imponerse una prohibición total de las transferencias de armas y municiones a la entidad de ocupación israelí, así como de cualquier otra transacción comercial que pueda perjudicar al pueblo palestino. Deben imponerse y aplicarse sanciones, incluidas prohibiciones de viajar y congelación de activos, contra las personas físicas y jurídicas implicadas en crímenes contra los palestinos y en la perpetuación de la ocupación israelí de territorio palestino. Ello incluye los ataques y la violencia de las bandas de colonos.
- Debe haber rendición de cuentas por las atrocidades, los crímenes y las violaciones de derechos humanos perpetrados por Israel, la Potencia ocupante, contra el pueblo palestino durante más de siete décadas de ocupación. No puede haber impunidad. Las autoridades de ocupación deben indemnizar al pueblo palestino por los daños sufridos.
- La opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia consideró que Israel, la Potencia ocupante, infringe el artículo 3 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, relativo a la prevención de la segregación racial y el *apartheid*. Las Naciones Unidas deben tomar medidas inmediatas para hacer frente a estas graves violaciones, incluso volviendo a convocar al Comité Especial del Consejo de Derechos Humanos sobre la Elaboración de Normas Complementarias a la Convención

Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, para garantizar que se ponga fin a esas violaciones y que se respeten los derechos humanos del pueblo palestino, incluido su derecho a la libre determinación y a no sufrir discriminación racial ni *apartheid*.

- Siria recalca la importancia del papel fundamental del UNRWA y pide apoyo a ese Organismo, rechazo de toda dilución de su mandato y oposición a las medidas inválidas adoptadas contra él por Israel. El UNRWA debe poder seguir prestando asistencia a los palestinos en su tierra natal y en los países de acogida, incluida Siria. Las consecuencias del retiro de dicha asistencia serían catastróficas.
- La República Árabe Siria recalca la necesidad de poner fin a la bárbara agresión israelí contra el Líbano y a los repetidos ataques israelíes contra la República Árabe Siria, de exigir responsabilidades a la entidad de ocupación israelí por esos ataques y de garantizar que no se repitan.
- Siria pide que se actúe con seriedad para poner fin a las políticas israelíes de asentamientos y a la anexión y confiscación de tierras, para devolver las propiedades a sus dueños, para impedir el desplazamiento forzoso de personas de sus tierras, y para rechazar las medidas israelíes dirigidas a cambiar el carácter demográfico y administrativo de los territorios árabes ocupados, incluido el Golán sirio.
- Siria reitera su llamamiento a favor de la aplicación de las resoluciones del Consejo relativas al conflicto árabe-israelí, en particular las resoluciones del Consejo de Seguridad [242 \(1967\)](#), [338 \(1973\)](#) y [497 \(1981\)](#). Hay que poner fin a la ocupación israelí de territorios árabes en Palestina, el Golán sirio y Líbano. Debe crearse un Estado palestino y permitirse al pueblo palestino ejercer su derecho inalienable a la libre determinación en su tierra. Además, se debe conceder al Estado de Palestina la condición de Estado Miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas.

Senegal

[Original: francés]
[8 de noviembre de 2024]

En aplicación de los párrafos 4, 5 y 16 de la resolución [ES-10/24](#) de la Asamblea General, de 18 de septiembre de 2024, el Senegal ha proseguido su acción, tanto en el marco de las Naciones Unidas como en el de la Organización de Cooperación Islámica (OCI) y de la Unión Africana (UA), en favor de la realización del derecho del pueblo palestino a la libre determinación y del cese inmediato de las trabas al ejercicio de dicho derecho derivadas de la presencia militar de Israel en el Territorio Palestino Ocupado.

I En el marco de las Naciones Unidas

En sus intervenciones a nivel nacional y ejerciendo la presidencia del Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino, el Senegal ha seguido promoviendo un alto el fuego inmediato y definitivo en Gaza, un acceso seguro, sin trabas y no discriminatorio de la ayuda humanitaria a las poblaciones de Gaza, un cese inmediato y definitivo de la ocupación de Palestina por Israel, así como un reconocimiento del Estado de Palestina como miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas en virtud de la solución biestatal.

Por ello, la delegación del Senegal ha reiterado su voto habitual a favor de todas las resoluciones aprobadas sobre la ilegalidad de la ocupación israelí y el derecho a

la libre determinación de Palestina, en particular en el pleno de la Asamblea General y a nivel de las Comisiones Segunda, Tercera y Cuarta de la Asamblea General.

Asimismo, el Senegal ha apoyado, en el marco del 55º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, celebrado entre el 26 de febrero y el 5 de abril de 2024, la resolución [55/30](#) titulada “Derecho del pueblo palestino a la libre determinación” que exhorta a los Estados a adoptar las medidas necesarias para promover la realización de la libre determinación del pueblo palestino y la resolución [55/32](#) titulada “Los asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y en el Golán sirio ocupado”, que reafirma la ilegalidad de los asentamientos israelíes.

Además, el Senegal ha participado activamente en los esfuerzos internacionales contra la intervención militar israelí en territorio palestino. Así pues, nuestro país participa en los trabajos del “grupo central” iniciado por Türkiye, que ha reunido al Secretario General y a los Presidentes del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General para pedir la suspensión del suministro a Israel de armas, municiones y equipos que puedan utilizarse en Gaza o en los territorios ocupados del Oriente Medio.

En el marco de los esfuerzos contra la ocupación israelí, cabe recordar la contribución del Senegal, en su calidad de presidente del Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino, al reconocimiento y la defensa de los derechos del pueblo palestino. En ese contexto, el Senegal, que había suscrito el retiro anual del Comité, del 4 al 7 de diciembre de 2023, sigue imponiendo su liderazgo en el funcionamiento del Comité.

Es por ello que, bajo su mandato, el Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino organizó una conferencia internacional los días 3 y 4 de abril de 2024 en Ginebra, con el objetivo de movilizar a la sociedad civil mundial para la promoción de un alto el fuego duradero en Gaza y la rendición de cuentas por los crímenes de guerra cometidos por Israel en el Territorio Palestino Ocupado.

Se trata, además, del simposio sobre la cuestión de Jerusalén, cuyo tema será “Jerusalén y la guerra de Gaza: la identidad y la existencia palestinas amenazadas de desaparición”, celebrado el 1 de julio de 2024 en Yedda (Arabia Saudita); en ese encuentro se hizo hincapié en las políticas israelíes de desplazamiento forzado y despojo de los palestinos de Jerusalén.

A ello se añade la serie de visitas del Comité a países de la Comunidad del Caribe (CARICOM), la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) y la OCI, en particular Guyana, Indonesia y Arabia Saudita, para defender los derechos de los palestinos.

Por otra parte, el Senegal se ha sumado a todas las iniciativas dirigidas a reforzar el apoyo político y financiero al Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA). A este respecto, nuestro país es coautor del derecho de respuesta del Movimiento de los No Alineados a la declaración del representante de Israel acusando al UNRWA de haber participado en el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. En esa misma dinámica, el Senegal ha participado en la conferencia de prensa organizada por el Grupo de Estados signatarios “de los compromisos comunes en favor del UNRWA”, celebrada el 17 de octubre de 2024.

En lo que se refiere a las medidas que el Senegal tiene previsto adoptar con vistas a la aplicación de la resolución [ES-10/24](#) de la Asamblea General, además de seguir apoyando la realización del derecho a la libre determinación del pueblo

palestino, el Senegal prevé centrarse en los dos aspectos que se mencionan a continuación.

En primer lugar, abogará por la reconstrucción de las infraestructuras públicas esenciales destruidas por los ataques israelíes en Gaza y seguirá impulsando un mayor apoyo político al mandato del UNRWA y a sus medios financieros.

En segundo lugar, el Senegal se asocia a las iniciativas internacionales y regionales pertinentes en el seno de las instituciones internacionales dirigidas a implicar a las autoridades israelíes en los crímenes perpetrados contra el pueblo palestino.

II. En el marco de la Organización de Cooperación Islámica

Además de su participación en todas las reuniones y decisiones de la Organización sobre la cuestión palestina, el Senegal ha apoyado firmemente las iniciativas de la OCI en favor del cese inmediato de la ocupación del territorio palestino por Israel y el fin definitivo de los crímenes perpetrados por Israel contra Palestina.

En primer lugar, el Senegal apoyó la creación en 2023 de un grupo ministerial árabe-islámico presidido por el Reino de Arabia Saudita e integrado por Palestina, Jordania, Egipto, Qatar, Türkiye, Indonesia y Nigeria, con la misión de garantizar el seguimiento de la aplicación de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, la OCI y otras organizaciones, con el propósito de poner fin a la ocupación ilegal de los territorios palestinos y a los crímenes de genocidio cometidos por Israel.

Además, se une al llamamiento dirigido a los Estados miembros de la OCI para que ejerzan presiones diplomáticas, políticas y jurídicas sobre Israel, con el fin de reforzar la campaña internacional en favor de la detención definitiva de los crímenes perpetrados por el ocupante israelí.

Por último, el Senegal acoge con beneplácito la invitación hecha por la OCI a sus Estados miembros a que impongan sanciones respecto a las personas y entidades que apoyan a Israel en su intervención militar en Palestina y a respaldar el impulso internacional dirigido a poner en marcha actuaciones judiciales contra los autores israelíes de crímenes perpetrados en el Territorio Palestino Ocupado.

III. En el marco de la Unión Africana

En el marco de la Unión Africana, el Senegal sigue reafirmando su apoyo a la declaración anual sobre la situación en Palestina y en Oriente Medio adoptada por la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana, con ocasión de su 37º período ordinario de sesiones, celebrado en febrero de 2024; la última de esas declaraciones figura en el documento de signature Assembly/AU/Decl.4(XXXVII).

Además, conviene recordar que, bajo la presidencia senegalesa, la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana ha creado, en virtud de la decisión Assembly/AU/Dec. 820(XXXV) de 6 de febrero de 2022, un Comité Especial de Jefes de Estado y de Gobierno, a efectos de mantener consultas sobre la cuestión relativa a la concesión a Israel sobre el estatuto de observador.

Sudáfrica

[Original: inglés]
[8 de noviembre de 2024]

La República de Sudáfrica señala que el 19 de septiembre de 2024, en un período extraordinario de sesiones de emergencia, la Asamblea General aprobó la resolución

ES-10/24, que, entre otras cosas, acogía con satisfacción la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas derivadas de las políticas y prácticas de Israel en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y de la ilegalidad de la presencia continuada de Israel en el Territorio Palestino Ocupado.

Además, la resolución ES-10/24 exige que el Estado de Israel cumpla sus obligaciones en materia de derecho internacional. En el párrafo 17 de la resolución se solicita al Secretario General que le presente un informe en el plazo de tres meses sobre la aplicación de la presente resolución, en particular las medidas adoptadas por Israel, otros Estados y las organizaciones internacionales, incluidas las Naciones Unidas, para la aplicación de sus disposiciones o en caso de que estas se incumplan. En el párrafo 14 de la resolución se solicita al Secretario General que, en consulta con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y los Estados Miembros con experiencia y conocimientos pertinentes, presente propuestas, en el informe que se solicita en la presente resolución, para el establecimiento de un mecanismo de seguimiento de las violaciones del artículo 3 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial cometidas por Israel y señaladas por la Corte Internacional de Justicia en su opinión consultiva.

Sudáfrica se considera a sí misma un Estado con la experiencia y los conocimientos pertinentes que exige el párrafo 14, basándose en su historia de colonialismo, discriminación racial y *apartheid*. Sudáfrica desea hacer referencia a una declaración escrita dirigida a la Corte Internacional de Justicia el 25 de julio de 2023 sobre las consecuencias jurídicas derivadas de las políticas y prácticas de Israel en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y de la ilegalidad de la presencia continuada de Israel en el Territorio Palestino Ocupado. Se hace referencia específicamente a los párrafos 91 a 118 de la declaración escrita de Sudáfrica a la Corte, que figura a continuación para facilitar la consulta.

“91. La realidad palestina evoca experiencias de la propia historia sudafricana de segregación racial y opresión. En el Territorio Palestino Ocupado existe un sistema institucionalizado y opresivo de dominación israelí sobre los palestinos como grupo. Esas políticas tienen su génesis en la creación del Estado de Israel en 1948 y se han extendido a los Territorios Ocupados tras la Guerra de los Seis Días de 1967.

“92. Coincidimos con la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, en su informe más reciente, en que ‘el reconocimiento del *apartheid* israelí debe centrarse en la experiencia del pueblo palestino en su totalidad y en su unidad como pueblo, incluidos los que fueron desplazados, privados de su nacionalidad y desposeídos entre 1947 y 1949 (muchos de los cuales viven en el territorio palestino ocupado)’.

“93. Aunque la experiencia palestina no es totalmente idéntica a la sudafricana, en Palestina se reproducen una serie de atrocidades al estilo del *apartheid*, como el sistema de permisos que sólo se aplica a los palestinos que viajan hacia y desde la Franja de Gaza, la anexionada Jerusalén Oriental y el resto de la Ribera Occidental. Ello incluye la creación de un sistema jurídico dual consistente en un intrincado y poco conocido sistema de órdenes y reglamentos militares, que, a menudo racializado en la aplicación más que sobre el papel, hace que la profundidad de la discriminación sistemática de Israel sea menos inmediatamente visible que su homóloga en Sudáfrica”.

“94. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial concluyó que en el Territorio Palestino Ocupado existen “dos sistemas jurídicos y ‘dos series de instituciones totalmente separados y el establecimiento de instituciones separadas, por un lado para las comunidades judías agrupadas en asentamientos ilegales y por otro para las poblaciones palestinas que viven en ciudades y pueblos palestinos. El Comité está alarmado por el carácter hermético de la separación de los dos grupos, que viven en el mismo territorio pero que no disfrutan del mismo uso de las carreteras y las infraestructuras ni del mismo acceso a los servicios básicos, las tierras y los recursos hídricos. Esta separación se concreta en la aplicación de una compleja combinación de restricciones a la circulación mediante el muro, los asentamientos, los cortes de carreteras, los puestos de control militares, la obligación de utilizar carreteras diferentes y un régimen de permisos que afecta negativamente a la población palestina’.

“95. Sudáfrica sostiene que el *apartheid* israelí debe considerarse en el contexto de la ilegalidad inherente a la ocupación en su conjunto; se trata de un incumplimiento adicional de normas imperativas en una situación ilegal. La fragmentación del territorio palestino, la subyugación de su pueblo, las restricciones a la circulación, la discriminación racial y las ejecuciones extrajudiciales aprobadas por el Estado están todas calculadas para obstaculizar el derecho de los palestinos a la libre determinación.

“96. Durante más de setenta años, diversas resoluciones de las Naciones Unidas, informes de Relatores Especiales y organizaciones de derechos humanos han deplorado el atroz trato discriminatorio que reciben los palestinos en el Territorio Palestino Ocupado, incluidos Gaza y Jerusalén Oriental. Esas leyes y prácticas discriminatorias no han hecho sino afianzarse y pasar a ser más sistemáticas y deliberadas a medida que prosigue la ocupación ilegal de Israel.

“97. Si bien el derecho de la ocupación permite un trato diferente, no permite graves violaciones de los derechos humanos de las poblaciones protegidas, ni mantener un sistema de opresión y dominación racial que violaría una norma imperativa del derecho internacional. El Estado de Israel está obligado a cumplir el derecho internacional, que prohíbe la discriminación por motivos de raza, etnia o nacionalidad.

“98. Además, el artículo 85 4) c) del Protocolo I de los Convenios de Ginebra enumera las prácticas del *apartheid* y demás prácticas inhumanas y degradantes, basadas en la discriminación racial, que entrañan un ultraje contra la dignidad personal como infracciones graves de los Convenios de Ginebra, cuando se cometen de forma intencional.

“99. La Corte sostuvo en la *causa África Sudoccidental* que establecer y aplicar distinciones, exclusiones, restricciones y limitaciones basadas exclusivamente en motivos de raza, color, ascendencia u origen nacional o étnico, constituye una negación de los derechos humanos fundamentales y es una violación flagrante de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. En 1980, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en su resolución [S/RES/471](#), ‘expresó su profunda preocupación por el hecho de que Israel, como Potencia ocupante, no haya proporcionado una protección adecuada a la población civil en los territorios ocupados, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra’.

“100. Sin ir más lejos, en diciembre de 2022, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución que exige a Israel que ponga fin en el Territorio Palestino Ocupado a todas las medidas contrarias al derecho

internacional, así como a las leyes, políticas y acciones discriminatorias. En octubre de 2022, el Relator Especial sobre una vivienda adecuada señaló que el ‘régimen cada vez más institucionalizado de opresión racial y discriminación sistemáticas’ que sigue provocando la destrucción de hogares palestinos es a todas luces *apartheid* según el artículo 7 2) h) del Estatuto de Roma, e indicó también a que el “traslado forzoso de población se ajustaría también a la definición de persecución del artículo 7 2) del Estatuto de Roma”.

“101. Sudáfrica sostiene que Israel no sólo sigue sin proporcionar una protección adecuada a una población protegida con estatuto internacional en virtud del derecho internacional, sino que, de hecho, sigue imponiendo un régimen institucionalizado de opresión racial y discriminación sistemáticas contra el pueblo de Palestina que se ajusta al criterio probatorio predominante del crimen internacional de *apartheid*.”

“102. Como señala Dugard, el *apartheid* ha adquirido un contenido jurídico que, si bien se deriva de la experiencia sudafricana, es al mismo tiempo independiente de ella, ya que ha impregnado varias ramas del derecho internacional público. La Comisión de Derecho Internacional, en su proyecto de conclusiones sobre la identificación y las consecuencias jurídicas de las normas imperativas de derecho internacional general (*ius cogens*), concluyó que la prohibición de la discriminación racial y del *apartheid* era una norma imperativa de derecho internacional.

“103. Tres tratados internacionales prohíben y/o tipifican explícitamente el *apartheid* como crimen de lesa humanidad: la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de *Apartheid* (Convención sobre el *Apartheid*) y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (Estatuto de Roma).

“104. El crimen de *apartheid* es un crimen internacional, no limitado en su alcance territorial. Si bien la Convención sobre el *Apartheid* se refiere a África Meridional, esta referencia se hace en relación con políticas de segregación y discriminación racial similares a las que se practican en África Meridional, lo que indica que su prohibición se extiende más allá del ámbito territorial de esa región.

“105. Los Estados de Palestina e Israel son partes en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, mientras que Palestina se adhirió a la Convención sobre el *Apartheid* en 2014. En 2015, mediante una declaración en virtud del artículo 12.3 del Estatuto de Roma, Palestina aceptó la jurisdicción de la Corte Penal Internacional a partir del 13 de junio de 2014. Sudáfrica sostiene que el *apartheid*, como crimen de lesa humanidad, es una norma de *ius cogens* que genera obligaciones *erga omnes*. En la *causa Barcelona Traction*, la Corte sostuvo que surgirían obligaciones *erga omnes* en la causa de la prohibición de la discriminación racial como norma de *ius cogens* y que esas obligaciones surgirían de ‘los principios y normas relativos a los derechos fundamentales de la persona humana, incluida la protección contra la esclavitud y la discriminación racial’.

“106. En cuanto a la definición de *apartheid* según el derecho internacional, se indica que la Corte debe aplicar la definición del crimen de *apartheid* con arreglo al derecho internacional consuetudinario. Si bien la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial define la discriminación racial y prohíbe la práctica del *apartheid*, no define su práctica. El artículo 3 de dicha Convención impone a ‘los Estados

partes la obligación de condenar especialmente la segregación racial y el *apartheid* y de comprometerse a prevenir, prohibir y eliminar en los territorios bajo su jurisdicción todas las prácticas de esta naturaleza’.

“107. La Convención sobre el *Apartheid* afirma la categorización del *apartheid* como crimen de lesa humanidad. Enumera una lista de actos inhumanos que equivalen a *apartheid* ‘cometidos con el fin de instituir y mantener la denominación de un grupo racial de personas sobre cualquier otro grupo racial de personas y de oprimirlo sistemáticamente’.

“108. Además, enumera los actos específicos que entran en el ámbito del *apartheid*, como el asesinato, la tortura, el trato inhumano y la detención arbitraria de personas pertenecientes a un grupo racial determinado; la imposición deliberada de condiciones de vida a un grupo racial con la intención de causar su destrucción física; las medidas legislativas discriminatorias en los ámbitos político, social, económico y cultural; las acciones que segreguen a la población según criterios raciales mediante el establecimiento de zonas residenciales separadas para grupos raciales; la prohibición de los matrimonios interraciales; y la persecución de individuos que se opongan al *apartheid*.

“109. Con respecto al crimen de *apartheid*, el artículo 7 2) h) del Estatuto de Roma hace referencia a ‘actos inhumanos de carácter similar a los mencionados en el párrafo 1 cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la intención de mantener ese régimen’.

“110. Se señala que la Corte debería aplicar la lista de prácticas tal como aparece en el artículo 2 de la Convención sobre el *Apartheid*, que, leído con el artículo 7 2) h) del Estatuto de Roma, puede además equivaler a actos de *apartheid* cuando son cometidos de forma sistemática por un grupo racial sobre cualquier otro grupo racial con el propósito de mantener la dominación y la opresión de dicho grupo.

“111. Sostenemos que el *apartheid* puede distinguirse de otras formas de discriminación prohibida en el sentido de que implica un elemento institucionalizado de ley, política e instituciones y está aprobado por el Estado con el fin de que un grupo racial domine a otro. El trato discriminatorio e inhumano que Israel dispensa a los palestinos ha alcanzado el umbral del *apartheid* en el sentido que le atribuye la Convención sobre el *Apartheid*.

“112. Ello se manifiesta de muchas maneras, con pruebas de trato diferencial y discriminatorio en el uso de la tierra, la vivienda, el acceso a los recursos naturales, la ciudadanía, la residencia, la reunificación familiar, la libertad de circulación, el acceso a la educación y a la salud, y la libertad de asociación. El informe de 2009 de la Misión de Investigación de las Naciones Unidas sobre el Conflicto de Gaza llegó a las siguientes conclusiones:

La discriminación sistemática, tanto en la ley como en la práctica, contra los palestinos, en la legislación (incluida la existencia de un sistema legal y judicial totalmente separado que ofrece condiciones sistemáticamente peores en comparación con el aplicable a los israelíes), y en la práctica durante el arresto, la detención, el juicio y la sentencia en comparación con los ciudadanos israelíes es contraria al artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y potencialmente violatoria de la prohibición de la persecución como crimen de lesa humanidad.

“113. A efectos de la definición de *apartheid* según la Convención sobre el *Apartheid*, se afirma que los israelíes judíos y los árabes palestinos son grupos distintos. La Corte observa que la ‘definición de discriminación racial que figura en la Convención incluye el “origen nacional o étnico”. Estas referencias al “origen” denotan, respectivamente, el vínculo de una persona con un grupo nacional o étnico al nacer, mientras que la nacionalidad es un atributo jurídico que depende de la facultad discrecional del Estado y que puede cambiar durante la vida de una persona... La Corte señala que los demás elementos de la definición de discriminación racial que figura en el artículo 1, párrafo 1, de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, a saber, la raza, el color y el linaje, son también características inherentes a la persona a su nacimiento’.

“114. Los actos inhumanos especificados en el artículo 2 de la Convención sobre el *Apartheid* están bien documentados por los organismos de supervisión de las Naciones Unidas y por las organizaciones de derechos humanos, por lo que no es posible enumerarlos en esta declaración. Varios académicos y organizaciones de derechos humanos de prestigio han llegado a la conclusión de que los actos inhumanos perpetrados por Israel contra los palestinos equivalen a *apartheid* según el derecho internacional.

“115. Las pruebas disponibles indican que Israel es responsable de actos inhumanos que entran en el ámbito de los incisos a), c), d) y f) del artículo 2 de la Convención sobre el *Apartheid*. Ello incluye el derecho a la vida y a la libertad (Artículo 2 a)), dado el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de Israel contra militantes y civiles en Palestina, incluidas las detenciones arbitrarias y las detenciones administrativas. A los palestinos como grupo se les discrimina aún más mediante el control de los pasos fronterizos y los sistemas de permisos y carnés de identidad, así como por el muro y los puestos de control y las carreteras separadas dentro de la Ribera Occidental (artículo 2 c)). La fragmentación y expropiación de las tierras palestinas y el impedimento del retorno de los refugiados palestinos han dividido el Territorio Palestino Ocupado en enclaves o bantustanes, de forma similar al contexto sudafricano de entonces (Artículo 2 d)). La persecución sistemática por parte de Israel de organizaciones y personas que se oponen a la dominación y opresión por parte de Israel del pueblo palestino en el Territorio Palestino Ocupado cumple además el elemento de persecución recogido en el artículo 2 f) de la Convención sobre el *Apartheid*.

“116. En cuanto a la naturaleza institucionalizada y sistemática de la discriminación y la dominación del grupo palestino por parte de Israel, Sudáfrica sostiene que, de forma similar a la experiencia sudafricana, el crimen del *apartheid* está siendo cometido contra un grupo (los palestinos) por otro (el grupo judío) para crear un grupo superior y privilegiado, cuya posición se eleva a través de sistemas de dos niveles y beneficios reservados para dicho grupo mediante la concesión de derechos y privilegios superiores. Este sistema no es aleatorio ni aislado, sino generalizado y opresivo, de manera institucional y sistémica, aunque disperso en el fragmentado Territorio Palestino Ocupado.

“117. El trato discriminatorio de Israel a los palestinos debe considerarse en su totalidad: ha creado y mantenido un régimen institucionalizado de opresión sistemática allí donde controla el territorio, alimentado por consideraciones demográficas que siguen determinando sus políticas hacia los palestinos. Esas consideraciones se manifiestan en los diferentes conjuntos de leyes, políticas y prácticas discriminatorias y excluyentes que sirven intencionadamente para

oprimir y dominar a los palestinos, beneficiar al máximo a los judíos israelíes y crear una mayoría judía privilegiada en todos los aspectos.

“118. La única conclusión a la que se puede llegar es que esas políticas buscan el avance de la nación judía, cuyo privilegio sólo puede mantenerse mediante el despojo y la fragmentación de las tierras palestinas, la difamación económica y política de los palestinos, las restricciones a su circulación, la denegación de su dignidad y la ausencia de protección legal mediante leyes y órdenes militares arbitrarias. Esa realidad recuerda a la Sudáfrica del *apartheid* y al modo en que el Gobierno de la minoría blanca aplicó el crimen de lesa humanidad del *apartheid* para hacer progresar a la población blanca entre 1948 y 1994 mediante la opresión de la población negra mayoritaria en Sudáfrica”.

La República de Sudáfrica está de acuerdo con el fallo de la Corte Penal Internacional de que el Estado de Israel viola el artículo 3 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, que dispone que los Estados partes condenan especialmente la segregación racial y el *apartheid* y se comprometen a prevenir, prohibir y eliminar en los territorios bajo su jurisdicción. También observamos que, de acuerdo con las declaraciones del Magistrado Presidente Salam y del Magistrado Tladi, las acciones de Israel equivalen al *apartheid*. A este respecto, cabe señalar que el crimen de *apartheid* fue declarado un crimen de lesa humanidad en la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de *Apartheid* y se define como tal en el Estatuto de Roma de 2002 de la Corte Penal Internacional, que establece que por *apartheid* se entienden actos inhumanos de carácter similar a otros crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la intención de mantener ese régimen.

La Comisión de Derecho Internacional, en su proyecto de conclusiones sobre la identificación y las consecuencias jurídicas de las normas imperativas de derecho internacional general (*ius cogens*), concluyó que la prohibición de la discriminación racial y del *apartheid* es una norma imperativa de derecho internacional general que no admite acuerdo en contrario.

Por ende, Sudáfrica sostiene que el mecanismo de seguimiento de las violaciones del artículo 3 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial cometidas por Israel y señaladas por la Corte Internacional de Justicia en su opinión consultiva debería ser el restablecimiento del Comité Especial sobre el *Apartheid*. Cabe recordar que el Comité Especial contra el *Apartheid* se creó en virtud de la resolución 1761 (XVII) de la Asamblea General, de 6 de noviembre de 1962. Con el tiempo, su mandato se amplió más allá del examen de los acontecimientos en Sudáfrica para incluir la promoción de una campaña internacional contra el *apartheid*. Mediante su resolución 48/258 A, aprobada el 23 de junio de 1994, la Asamblea General decidió “poner fin” al Comité Especial, tras la celebración de las primeras elecciones democráticas de la historia en Sudáfrica. El mandato del Comité Especial que se propone restablecer podría basarse en el del Comité sudafricano, que inicialmente debía examinar las políticas raciales del Gobierno e informar periódicamente al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General. Ese mandato podría ampliarse para incluir también una obligación de supervisión, revisión e información sobre el papel de terceros Estados en la prestación de asistencia a la situación ilegal de *apartheid* en Israel. El nuevo Comité debería cooperar con los órganos creados en virtud de un tratado de derechos humanos y los titulares de mandato de los procedimientos especiales y, en la medida de lo posible, tratar de complementar su labor. Un objetivo fundamental debe ser garantizar que palestinos e israelíes tengan y disfruten de derechos plenos y en pie de igualdad, sin

discriminación. El Comité también podría estudiar la posibilidad de movilizar recursos para posibilitar la investigación, así como actividades educativas y públicas sobre el racismo y la discriminación.

Suiza

[Original: francés]
[8 de noviembre de 2024]

Suiza está evaluando la aplicación de las disposiciones pertinentes de la resolución [ES-10/24](#) de la Asamblea General con el propósito de garantizar la mayor conformidad posible.

En lo que respecta al párrafo 12 de la resolución, Suiza ha tomado nota de que la Asamblea General, en su calidad de depositaria del Convenio de Ginebra, le invita a convocar una conferencia de Altas Partes Contratantes del Cuarto Convenio de Ginebra dentro de los seis meses siguientes a la aprobación de dicha resolución.

Conforme a lo que se pide en dicha resolución, Suiza acepta ese mandato de organizar una conferencia en el plazo especificado. Suiza mantendrá consultas con las Altas Partes Contratantes a partir del mes de noviembre, a fin de examinar el proceso y las expectativas al respecto. Las primeras reuniones informativas de las Misiones Permanentes en Ginebra están previstas para mediados de noviembre.

La dirección del proceso se ha confiado al Embajador Franz Perrez, Director de la Dirección de Derecho Internacional Público del Departamento Federal de Relaciones Exteriores de Suiza. Esas consultas serán presididas por el Embajador Salman Bal, Enviado Especial para la cuarta Conferencia de Altas Partes Contratantes de los Convenios de Ginebra.

Suiza tomará entonces las medidas preparatorias necesarias y comunicará a su debido tiempo la fecha y lugar de la conferencia.

Túnez

[Original: árabe]
[8 de noviembre de 2024]

Párrafo 4 de la resolución [ES-10/24](#) de la Asamblea General

- Túnez no ha escatimado esfuerzos para defender el derecho del pueblo palestino a la libre determinación, ni para eliminar cualquier obstáculo a ese derecho causado por la presencia ilegal de la Potencia ocupante en el Territorio Palestino Ocupado. De hecho, Túnez acogió la sede de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) de 1982 a 1993. Apoyó los esfuerzos de la OLP por defender la legítima reivindicación del pueblo palestino de establecer un Estado independiente con Al-Quds al-Sharif como capital. Cuando la OLP y sus dirigentes estaban presentes en el país, Túnez pagó un alto precio: la Potencia ocupante atacó brutalmente la ciudad de Hammam Chott en 1985, saldándose con un elevado número de vidas y propiedades.
- Túnez apoya la causa palestina, entre otras cosas absteniéndose de cualquier acción, bajo cualquier circunstancia, que prive al pueblo palestino del derecho a la libre determinación. Se esfuerza por defender y reforzar ese derecho, que es irrevocable, inalienable e imprescriptible. Túnez plantea la cuestión en los foros regionales e internacionales y hace un llamamiento a todos los Estados, en particular a los miembros del Consejo de Seguridad, para que dejen de

ignorar ese derecho y pongan fin a la injusticia histórica que sufre desde hace decenios el firme pueblo palestino.

- Túnez nunca ha reconocido como legal la situación derivada de la presencia ilegal de la Potencia ocupante en el Territorio Palestino Ocupado, y nunca lo hará. La ocupación es ilegítima y viola flagrantemente los derechos de propiedad del pueblo palestino sobre su propia tierra. Esa tierra fue tomada por la fuerza, y los habitantes que fueron desplazados aún no han recuperado lo que era suyo.
- Dado que Túnez nunca ha reconocido como legal la situación derivada de la presencia ilegal de la Potencia ocupante en el Territorio Palestino Ocupado, nunca podría prestar ayuda o asistencia para mantener esa situación. Todo lo contrario: utiliza todos los medios a su alcance para convencer a los representantes de los Estados con los que se reúne en diversos foros de que no deben reconocer la situación mencionada y de que deben imponerse a la Potencia ocupante para que ponga fin a su presencia ilegal en el Territorio Palestino Ocupado.
- Túnez reconoce la plena soberanía del Estado de Palestina sobre todo el territorio palestino ocupado, con Al-Quds al-Sharif como capital. Kuwait tampoco reconoce ningún cambio en el carácter físico o la composición demográfica del territorio ocupado. Asimismo, Túnez no mantiene relaciones diplomáticas, políticas, jurídicas, militares, económicas, comerciales o financieras con la Potencia ocupante.
 - Túnez no reconoce en absoluto a la Potencia ocupante y, por lo tanto, no mantiene relaciones convencionales con ella en ningún ámbito, incluidos los casos en los que la Potencia ocupante pretende actuar en nombre del Territorio Palestino Ocupado o de una parte del mismo.
 - Túnez no reconoce en absoluto a la Potencia ocupante, y por ende no mantiene relaciones económicas o comerciales con Israel en lo que respecta al Territorio Palestino Ocupado o partes de él que puedan afianzar su presencia ilegal en el Territorio, incluso en relación con los asentamientos y su régimen asociado.
 - Túnez no reconoce en absoluto a la Potencia ocupante, no ha establecido relaciones diplomáticas con esa potencia y nunca lo hará.
 - Túnez no reconoce a la Potencia ocupante. Prohíbe las relaciones comerciales o de inversión que contribuyan al mantenimiento de la situación ilegal creada por Israel en el Territorio Palestino Ocupado, incluso en relación con los asentamientos y su régimen asociado.
- La Potencia ocupante pisotea todos los valores humanitarios al atacar sin tregua a civiles palestinos inocentes en una campaña de matanzas y desplazamientos sin precedentes, a la vista de todo el mundo. Túnez aprovecha esta oportunidad para reafirmar su compromiso con el derecho internacional humanitario. Insta a todos los Estados Partes en el Cuarto Convenio de Ginebra que prestan apoyo a la Potencia ocupante que se abstengan de hacerlo.
- Túnez considera que las prácticas de la Potencia ocupante en el Territorio Palestino Ocupado van más allá del *apartheid* y equivalen a un genocidio sistemático. La comunidad internacional debe cumplir con su responsabilidad legal, ética y humanitaria para poner fin a tales acciones, que contravienen una obligación *erga omnes*.

Párrafo 5 de la resolución ES-10/24 de la Asamblea General

- Túnez no reconoce a la Potencia ocupante. Su postura sistemática y de principios consiste en apoyar la soberanía amplia del Estado de Palestina por sobre la totalidad del Territorio Palestino Ocupado, con Al-Quds al-Sharif como capital. No escatima esfuerzos para asegurar que sus nacionales, y las empresas y entidades bajo su jurisdicción, así como sus autoridades, no actúen de manera que suponga el reconocimiento de la situación creada por la presencia ilegal de Israel en el Territorio Palestino Ocupado ni presten ayuda o asistencia para mantener esa situación.
- Túnez no importa ningún producto originario de los asentamientos de la Potencia ocupante. En ningún caso podrá transferir equipo de ninguna naturaleza a la Potencia ocupante.
- Nuestro país no admite a ninguna persona física, ni trata con ninguna persona jurídica, que se dedique a mantener la presencia ilegal de la Potencia ocupante en el Territorio Palestino Ocupado, incluso en relación con la violencia de los colonos.
- Túnez apoya las iniciativas de rendición de cuentas para todas las víctimas;

Párrafo 10 de la resolución ES-10/24 de la Asamblea General

- Túnez pide a los Estados que prestan apoyo a la Potencia ocupante, o que han guardado silencio sobre el genocidio en curso del indefenso pueblo palestino, o que han obstaculizado el derecho de ese pueblo a ejercer la libre determinación y a establecer un Estado independiente en todo su territorio ocupado, con Al-Quds al-Sharif como capital, que cumplan con su responsabilidad estableciendo y financiando un mecanismo internacional que indemnice por los daños, pérdidas o perjuicios resultantes de los actos internacionalmente ilícitos de la Potencia ocupante en el Territorio Palestino Ocupado. Sin embargo, no puede haber reparaciones legales sin restitución, que es responsabilidad legal de todos los Estados.
- Túnez está preparado para coordinar con las Naciones Unidas y sus organismos el establecimiento de registro internacional de daños para consignar, en forma documental, pruebas e información sobre reclamaciones en relación con los daños, las pérdidas y los perjuicios causados a todas las personas físicas y jurídicas afectadas, así como al pueblo palestino, por los hechos internacionalmente ilícitos cometidos por la Potencia ocupante en el Territorio Palestino Ocupado, así como para promover y coordinar la recopilación de pruebas y las iniciativas destinadas a asegurar tal reparación por Israel.

Türkiye

[Original: inglés]
[8 de noviembre de 2024]

En su opinión consultiva emitida el 19 de julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia confirmó jurídicamente que Israel lleva a cabo una política de ocupación y persecución contra el pueblo palestino. Türkiye ha apoyado el proceso en la Corte Internacional de Justicia aportando contribuciones escritas y orales a la opinión consultiva.

En consonancia con su enfoque de principios respecto a esta cuestión, Türkiye copatrocinó la resolución ES-10/24 de la Asamblea General titulada “Opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas

derivadas de las políticas y prácticas de Israel en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y de la ilegalidad de la presencia continuada de Israel en el Territorio Palestino Ocupado”, aprobada el 18 de septiembre de 2024.

Como ferviente partidario de la aplicación de esta resolución, las acciones de Türkiye para aplicar la resolución en consonancia con nuestras obligaciones en virtud del derecho internacional, entre otras, como se refleja en la opinión consultiva, son las siguientes:

a) Türkiye es miembro del Grupo de Representantes Permanentes ante las Naciones Unidas de la Organización de Cooperación Islámica sobre la aplicación de la resolución [ES-10/24](#) de la Asamblea General, cuyo objetivo es identificar las acciones necesarias para la aplicación oportuna de la resolución;

b) Türkiye es miembro del Comité de las Naciones Unidas para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino y, mediante acciones conjuntas y separadas, trabaja en pro de la realización del derecho del pueblo palestino a la libre determinación;

c) En consonancia con el párrafo 4 d) ii) de la resolución ES10/25 y, a raíz de la incesante agresión israelí y la catástrofe humanitaria, Türkiye ha restringido todo el comercio con Israel. Türkiye anunció que no reanudará el comercio hasta que Israel acepte un alto el fuego y permita la entrada sin trabas de ayuda humanitaria en Gaza;

d) La continua agresión israelí en Gaza ha provocado una catástrofe humanitaria en Palestina. Más de 43.000 civiles palestinos inocentes han muerto en ataques israelíes indiscriminados. Desde el primer día, Türkiye ha venido enviando ayuda humanitaria a Gaza; hasta la fecha, Türkiye ha enviado a Palestina 86.000 toneladas de ayuda humanitaria;

e) Como Presidente del Grupo de Trabajo sobre la Financiación del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, Türkiye ha expresado su firme apoyo al Organismo. Türkiye ha aportado este año al Organismo 2 millones de dólares adicionales a su contribución anual de 10 millones de dólares;

f) De acuerdo con el párrafo 5 b) de la resolución ES10/25, Türkiye ha puesto en marcha una iniciativa en las Naciones Unidas para detener las transferencias de armas a Israel. La carta conjunta pidiendo el cese de las transferencias de armas a Israel, firmada por 52 países, así como por la Liga Árabe y la Organización de Cooperación Islámica, fue enviada al Secretario General, al Presidente del Consejo de Seguridad y al Presidente de la Asamblea General el 1 de noviembre de 2024;

g) Türkiye presentó su declaración de intervención en el caso ante la Corte Internacional de Justicia sobre la aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza (*Sudáfrica c. Israel*) el 7 de agosto de 2024;

h) Türkiye reconoce el Estado de Palestina y cuenta con una misión diplomática en Jerusalén. Türkiye respalda todos los esfuerzos internacionales por alcanzar una solución biestatal. Recientemente, Türkiye se unió a la Alianza Global para Implementar la Solución Biestatal, iniciada por el Comité Ministerial sobre Gaza de la Organización de Cooperación Islámica y la Liga de Estados Árabes durante la semana de alto nivel de la Asamblea General. El patrón de voto de Türkiye en las Naciones Unidas también refleja su apoyo a la solución biestatal: Türkiye copatrocinó la resolución [ES-10/23](#), de 10 de mayo de 2024, que amplió los derechos y privilegios de Palestina en las Naciones Unidas.

Türkiye proseguirá sus esfuerzos por garantizar un alto el fuego permanente en Gaza, proporcionar ayuda humanitaria a los palestinos, respaldar todos los esfuerzos hacia una solución biestatal, promover el reconocimiento del Estado de Palestina y hacer una labor de sensibilización al respecto.

Anexo II

Respuestas recibidas de organizaciones intergubernamentales

Índice

	<i>Página</i>
Liga de los Estados Árabes	85
Organización de Cooperación Islámica	86

Liga de los Estados Árabes

[Original: inglés]
[8 de noviembre de 2024]

El comunicado conjunto emitido por la reunión ministerial de emergencia de la Liga de Estados Árabes y la Organización de Cooperación Islámica, celebrada en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York el 27 de septiembre de 2024, acogió con agrado la resolución [ES-10/24](#) de la Asamblea General y encomendó a los grupos árabes e islámicos que coordinaran sus esfuerzos con los Estados y las organizaciones internacionales para adoptar todas las medidas necesarias a fin de aplicar la resolución, entre otras cosas crear mecanismos como la imposición de una prohibición de armas, poner fin a todas las demás transacciones comerciales que puedan perjudicar a los palestinos, aplicar sanciones, incluida la prohibición de viajar, congelar activos de las personas físicas y jurídicas que participen en el mantenimiento de la presencia ilegal de Israel en los Territorios Palestinos Ocupados, incluido el terrorismo de los colonos, velar por la rendición de cuentas de las víctimas y celebrar una conferencia internacional para aplicar las resoluciones de las Naciones Unidas con el fin de poner en práctica la visión biestatal.

El Consejo de la Liga de Estados Árabes celebró una sesión extraordinaria a nivel de representantes permanentes en El Cairo el 22 de octubre de 2024 y pidió en su declaración la aplicación de la resolución [ES-10/24](#) de la Asamblea General, de 18 de septiembre de 2024; además, reiteró sus resoluciones anteriores relativas a la necesidad de poner en marcha medidas para suspender la participación de Israel en la Asamblea General de las Naciones Unidas y emprender acciones para sumarse a la demanda por genocidio contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia, procesar a los funcionarios israelíes incluidos en la lista de la vergüenza ratificada por la Liga, boicotear a las empresas que colaboran con el sistema de ocupación israelí, levantar el asedio israelí impuesto a la Franja de Gaza, y prestar ayuda humanitaria urgente al pueblo palestino.

El Consejo de la Liga de los Estados Árabes celebró una sesión extraordinaria a nivel de representantes permanentes en El Cairo el 31 de octubre de 2024 e hizo hincapié en su resolución que las medidas adoptadas por Israel, la Potencia ocupante, contra el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente constituían una grave violación de las obligaciones de Israel como Potencia ocupante en el Territorio Palestino Ocupado, de conformidad con el derecho internacional, el derecho internacional humanitario, el Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra y la Carta de las Naciones Unidas, concretamente, el párrafo 5 del Artículo 2, que obliga a todos los Estados a respetar los derechos de las organizaciones internacionales. La resolución también afirmaba que esas medidas contravienen la resolución [ES-10/24](#) de la Asamblea General, que pedía a Israel, entre otras obligaciones, que restituyera las tierras y bienes confiscados desde 1967 y pusiera fin a su presencia ilegal en el Territorio Palestino Ocupado en un plazo de 12 meses.

La Secretaría General de la Liga de los Estados Árabes participó en la primera reunión de seguimiento de alto nivel sobre la Alianza Global para Implementar la Solución Biestatal, celebrada en Riad (Reino de Arabia Saudita) los días 30 y 31 de octubre de 2024.

La Liga de Estados Árabes tiene la intención de coordinarse con la Organización de Cooperación Islámica para convocar la cumbre conjunta árabe-islámica que acogerá el Reino de Arabia Saudita el 11 de noviembre de 2024 para abordar la actual agresión israelí en el Territorio Palestino Ocupado.

Organización de Cooperación Islámica

[Original: inglés]
[8 de noviembre de 2024]

Los siguientes puntos resumen las acciones emprendidas por la Organización de Cooperación Islámica para aplicar la resolución [ES-10/24](#) de la Asamblea General, aprobada el 18 de septiembre de 2024, relativa a la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas de las políticas y prácticas de Israel en el Territorio Palestino Ocupado.

- a) El comunicado conjunto emitido por la reunión ministerial de emergencia de la Organización de Cooperación Islámica y la Liga de Estados Árabes, celebrada en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York el 27 de septiembre de 2024, acogió con satisfacción la resolución [ES-10/24](#) de la Asamblea General de 18 de septiembre de 2024 e instó a los Estados a tomar todas las medidas necesarias para aplicar la resolución;
- b) La reunión ministerial sobre el tema “La situación en Gaza y la aplicación de la solución biestatal como vía hacia una paz justa y amplia” fue coorganizada en cooperación entre el comité ministerial árabe-islámico sobre la Franja de Gaza, la Unión Europea y Noruega, en Nueva York, el 26 de septiembre de 2024. La Alianza Global para Implementar la Solución Biestatal fue lanzada como resultado de la reunión para movilizar aún más el apoyo internacional a tal fin;
- c) La Secretaría General de la Organización de Cooperación Islámica participó en la primera reunión de seguimiento de alto nivel sobre la Alianza Global para Implementar la Solución Biestatal, celebrada en Riad (Reino de Arabia Saudita) los días 30 y 31 de octubre de 2024;
- d) La Organización de Cooperación Islámica celebró una reunión de coordinación a nivel de ministros de relaciones exteriores y una reunión del Comité de los Seis sobre Palestina, los días 25 y 27 de septiembre de 2024, en forma paralela al septuagésimo noveno periodo de sesiones de la Asamblea General, y afirmó en sus documentos finales su apoyo inquebrantable a los derechos inalienables del pueblo palestino;
- e) El comité ministerial conjunto árabe-islámico sobre Gaza sigue esforzándose en nombre de la Organización de Cooperación Islámica y la Liga de Estados Árabes para sensibilizar a los principales líderes y actores mundiales sobre la necesidad de aplicar las medidas establecidas en la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia;
- f) La Secretaría General de la Organización de Cooperación Islámica está orientando las actividades de los grupos islámicos de varias capitales a los que la reunión ministerial de emergencia celebrada en Nueva York el 27 de septiembre de 2024 encomendó el seguimiento de la aplicación de la resolución de la Asamblea General;
- g) La Organización de Cooperación Islámica se coordinará con la Liga de Estados Árabes para convocar lo antes posible la conferencia de las Altas Partes Contratantes del Cuarto Convenio de Ginebra con el fin de aplicarlo en el Territorio Palestino Ocupado;
- h) La Organización de Cooperación Islámica redoblará sus esfuerzos en coordinación con otras organizaciones regionales y actores clave para acelerar la convocatoria de una conferencia internacional que ponga fin a la ocupación israelí y haga realidad la solución biestatal.

Anexo III

Entidades de las Naciones Unidas, organismos especializados y organizaciones conexas invitados a contribuir al informe

Entidades de las Naciones Unidas

Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas

Centro de Comercio Internacional

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

Departamento de Apoyo Operacional

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales

Departamento de Comunicación Global

Departamento de Estrategias, Políticas y Conformidad de la Gestión

Departamento de la Asamblea General y de Gestión de Conferencias

Departamento de Operaciones de Paz

Departamento de Seguridad

Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Fondo de Población de las Naciones Unidas

Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales

Oficina de Asuntos de Desarme

Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre

Oficina de Asuntos Jurídicos

Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios

Oficina de la Alta Representante para los Países Menos Adelantados, los Países en Desarrollo Sin Litoral y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra

Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi

Oficina de las Naciones Unidas en Viena

Oficina de Lucha contra el Terrorismo

Oficina de Servicios de Supervisión Interna

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

Oficina del Asesor Especial del Secretario General sobre África

Oficina del Asesor Especial del Secretario General sobre la Prevención del Genocidio

Oficina del Coordinador Especial de las Naciones Unidas para el Proceso de Paz de Oriente Medio

Oficina del Coordinador Especial para Mejorar la Respuesta de las Naciones Unidas a la Explotación y los Abusos Sexuales

Oficina del Coordinador Superior de Asuntos Humanitarios y de la Reconstrucción para Gaza

Oficina del Representante Especial del Secretario General para la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados

Oficina del Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia Sexual en los Conflictos

Oficina del Subsecretario General Adjunto para Políticas

Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente

Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

Registro de las Naciones Unidas de los Daños y Perjuicios Causados por la Construcción del Muro en el Territorio Palestino Ocupado

Secretaría de la Comisión Económica para África

Secretaría de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe

Secretaría de la Comisión Económica para Europa

Secretaría de la Comisión Económica y Social para Asia Occidental

Secretaría de la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico

Universidad de las Naciones Unidas

Organismos especializados y organizaciones conexas

Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares

Corporación Financiera Internacional

Corte Penal Internacional

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola

Fondo Monetario Internacional

Organismo Internacional de Energía Atómica

Organización de Aviación Civil Internacional

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

Organización Internacional del Trabajo

Organización Internacional para las Migraciones

Organización Marítima Internacional

Organización para la Prohibición de las Armas Químicas

Unión Internacional de Telecomunicaciones

Unión Postal Universal

Anexo IV**Respuestas de los Estados Miembros relativas al párrafo 14
de la resolución [ES-10/24](#) de la Asamblea General recibidas
por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos****Índice**

	<i>Página</i>
Belice.	91
Irán (República Islámica del)	97
Maldivas	108
México	110
Pakistán en nombre de la Organización de Cooperación Islámica (excepto Albania)	111
Sudáfrica	113

Belice

[Original: inglés]
[6 de noviembre de 2024]

Belice tiene el honor de presentar sus puntos de vista sobre el establecimiento de un mecanismo de seguimiento de las violaciones por Israel del artículo 3 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial señaladas por la Corte Internacional de Justicia en su opinión consultiva de 2024 sobre las *Consecuencias jurídicas que se derivan de las políticas y prácticas de Israel en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental*.

Belice tiene un largo historial de apoyo al derecho del pueblo palestino a la libre determinación y a liberarse de la ocupación, la opresión y la violación de sus derechos humanos más fundamentales. Esto incluye la adopción por Belice de medidas recientes centradas específicamente en el derecho de los palestinos a liberarse de la segregación racial y el *apartheid*.

En 2021, por ejemplo, la Asamblea Nacional de Belice aprobó una resolución en la que declaró que el régimen israelí de opresión sistémica del pueblo palestino constituye un régimen de colonialismo de asentamiento y *apartheid* y resolvió que el Gobierno debe apoyar los esfuerzos de investigación de las Naciones Unidas sobre el *apartheid* israelí¹. En 2023-2024, Belice participó en el procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia relativo al Territorio Palestino Ocupado, y se centró específicamente en la comisión por Israel de actos de *apartheid* contra el pueblo palestino. En particular, Belice pidió la reconstitución del Comité Especial de las Naciones Unidas contra el *Apartheid* y del Centro de las Naciones Unidas contra el *Apartheid*. Belice afirmó que estos órganos podrían mantener bajo examen el *apartheid* que Israel practica contra el pueblo palestino y la conducta conexa de terceros Estados, informar a la Asamblea General o al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y elaborar informes y estudios para informar y concienciar sobre el *apartheid*².

Belice acogió con satisfacción la conclusión de la Corte Internacional de Justicia en su opinión consultiva, según la cual Israel incumple de forma continuada el artículo 3 de la Convención, que prohíbe la segregación racial y el *apartheid*³. Belice también patrocinó y votó a favor de la resolución ES-10/24 de la Asamblea General, en cuyo párrafo 14 la Asamblea solicitó al Secretario General que presentara propuestas para el establecimiento de un mecanismo de seguimiento de las violaciones del artículo 3 de la Convención cometidas por Israel.

Belice reitera su posición de que el Comité Especial de las Naciones Unidas contra el *Apartheid* y el Centro de las Naciones Unidas contra el *Apartheid* deben reconstituirse, con los correspondientes ajustes en sus mandatos. Estos órganos desempeñaron un papel significativo para poner fin al régimen de *apartheid* en

¹ Belice, resolución de la Asamblea Nacional sobre la moción relativa a Palestina, 26 y 28 de octubre de 2021.

² *Consecuencias jurídicas que se derivan de las políticas y prácticas en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental*, declaración escrita de Belice, 25 de julio de 2023, párr. 91.

³ *Ibid.*, opinión consultiva, párr. 229. Véanse también la opinión separada del Magistrado Tladi, párr. 36 (donde se interpreta la conclusión de la Corte de que se ha infringido el artículo 3 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial como “una aceptación de que las políticas y prácticas de Israel constituyen una violación de la prohibición del *apartheid*, que es en sí misma una norma imperativa del derecho internacional”); y Gobierno de Belice, Oficina de Prensa, “Belize welcomes the ICJ opinion on Israeli policies and practices in the Occupied Palestinian Territory”, 22 de julio de 2024, disponible en www.pressoffice.gov.bz/belize-welcomes-the-icj-opinion-on-israeli-policies-and-practices-in-the-occupied-palestinian-territory/.

Sudáfrica y podrían servir para el mismo objetivo en lo que respecta a las políticas israelíes de segregación racial y *apartheid* de los palestinos.

El Comité Especial contra el *Apartheid*, y la resolución por la que se estableció, tenían una serie de características que podría ser útil reutilizar en un formato modificado con respecto a las políticas de segregación racial y *apartheid* de Israel. A continuación se indican algunas de estas características, y las recomendaciones adicionales de Belice:

a) **Adecuación del alcance del mandato del Comité Especial a las circunstancias.** La resolución 1761 (XVII) de la Asamblea General, de 1962, por la que se establecía el mandato del Comité Especial se aplicaba a “las políticas raciales del Gobierno de Sudáfrica”. El alcance del mandato del Comité Especial reconstituido debe ser igualmente amplio, o bien configurarse expresamente para tener en cuenta las particularidades de las políticas y prácticas de segregación racial y *apartheid* de Israel, incluyendo los siguientes aspectos:

i) **Inexistencia de límites territoriales o raciales.** El mandato debe abarcar las políticas raciales de Israel contra los palestinos y otras minorías raciales afectadas por dichas políticas y prácticas dondequiera que se encuentren, es decir, incluidos los palestinos de Israel, Gaza y la Ribera Occidental y los palestinos de otros lugares en la medida en que se vean afectados por las políticas y prácticas de Israel;

ii) **Inexistencia de límites materiales estrictos que excluyan características importantes de las políticas raciales sistémicas a las que están sometidos los palestinos.** El mandato del Comité Especial debería permitirle, como se señala más adelante, reconocer y reflejar en su labor y sus actividades las conexiones multifacéticas entre las políticas de segregación racial y *apartheid* de Israel y sus demás violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, tal como han establecido las comisiones de investigación de las Naciones Unidas y otros órganos de la Organización (incluida la Corte Internacional de Justicia);

iii) **Inexistencia de límites materiales estrictos basados en la conclusión de la Corte Internacional de Justicia sobre la violación del artículo 3 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.** En el párrafo 14 de la resolución ES-10/24 de la Asamblea General se solicita al Secretario General que informe sobre un mecanismo de seguimiento de las violaciones del artículo 3 de la Convención cometidas por Israel y señaladas por la Corte en su opinión consultiva de 2024. La Corte declaró que “la legislación y las medidas de Israel [que] imponen y sirven para mantener una separación casi total en la Ribera Occidental y Jerusalén Oriental entre las comunidades de colonos y las comunidades palestinas” constituyen una violación del artículo 3 de la Convención⁴. Aunque el mandato del Comité Especial reconstituido debe tener en cuenta las políticas de separación en la Ribera Occidental y Jerusalén Oriental, también debe incluir las políticas y prácticas de Israel que puedan equivaler a una violación del artículo 3 de la Convención y se basen en otros hechos, incluida la evolución de la situación sobre el terreno; consideraciones importantes para prevenir la segregación racial y el *apartheid* en violación del artículo 3 de la Convención; y el alcance de las medidas que las Naciones Unidas y sus Estados Miembros deben adoptar para disuadir a Israel de proseguir sus políticas y prácticas de segregación racial y *apartheid*, que no deben limitarse solo a medidas que estén

⁴ Consecuencias jurídicas que se derivan de las políticas y prácticas en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, opinión consultiva, párr. 229.

directamente relacionadas con dichas políticas (como demuestran las medidas de presión general que la resolución por la que se creó el Comité Especial en 1962 pidió a los Estados Miembros que aplicaran, y que se resumen a continuación, entre las que se incluyen la ruptura de relaciones diplomáticas, el cierre de puertos y los boicots comerciales);

b) **Presentación de informes sobre el régimen de segregación racial y *apartheid* por el Comité Especial.** El Comité Especial tenía el mandato de seguir estudiando, entre los períodos de sesiones de la Asamblea General, la política racial del Gobierno de Sudáfrica y presentar informes periódicos a la Asamblea o al Consejo de Seguridad, o a ambos, según procediera. El mandato del Comité Especial reconstituido debería incluir requisitos de presentación de informes similares. Más en concreto:

i) El mandato debería exigir la presentación de informes detallados para documentar la forma en que se elaboran y aplican las prácticas de segregación racial y *apartheid* de Israel y cómo afectan al pueblo palestino, basándose en la labor de otros organismos pertinentes de las Naciones Unidas, incluidos, entre otros, la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967; la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel (y otras comisiones de investigación); el Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino; y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial; y realizando sus propias investigaciones y recibiendo comunicaciones de los actores pertinentes en la medida de lo posible. Es importante arrojar luz sobre la naturaleza multifacética y estructural de las políticas y prácticas de segregación racial y *apartheid* de Israel para concienciar sobre ellas y proporcionar a las Naciones Unidas y a los Estados Miembros la información necesaria para adaptar sus acciones de respuesta de la manera más eficaz con objeto de poner fin a la segregación racial y el *apartheid*;

ii) Los informes del Comité Especial también deben evaluar las medidas adoptadas por Israel para cumplir sus obligaciones internacionales, y las medidas adoptadas por las Naciones Unidas y sus Estados Miembros para poner fin a las políticas y prácticas de segregación racial y *apartheid* de Israel. En este sentido, los informes de los Estados Miembros de las Naciones Unidas al Comité Especial (que se analizan más adelante) y los informes de los Estados partes al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y a otros órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos deben estar secuenciados, contener referencias cruzadas y ser examinados en su conjunto siempre que sea posible;

iii) El Comité Especial debería informar periódicamente a la Asamblea General o al Consejo de Seguridad, como mínimo cada seis meses;

c) **Medidas específicas que deben adoptar los Estados Miembros de las Naciones Unidas.** En la resolución por la que se creó el Comité Especial en 1962 se instaba a todos los Estados Miembros a que tomaran las siguientes medidas, por separado o colectivamente, para poner fin a las políticas de Sudáfrica: a) romper las relaciones diplomáticas, b) cerrar sus puertos a los barcos de bandera sudafricana, c) promulgar leyes que prohíban la entrada de sus barcos en los puertos sudafricanos, d) boicotear todas las mercancías sudafricanas y abstenerse de exportar mercancías, incluidas armas y municiones, a Sudáfrica, y e) denegar facilidades de aterrizaje y tránsito a todas las aeronaves pertenecientes al Gobierno de Sudáfrica y a las compañías registradas conforme a las leyes sudafricanas. Las mismas disposiciones deberían incluirse en la resolución por la que se reconstituya el Comité Especial con respecto a las políticas y prácticas raciales de Israel. Estas medidas deberían ser examinadas y revisadas en el marco de los esfuerzos continuados de los Estados

Miembros para poner fin a las políticas y prácticas de segregación racial y *apartheid* de Israel, y el Comité Especial debería informar de dichos exámenes y revisiones y evaluarlos en el proceso de presentación de informes (según se menciona anteriormente y más adelante). Belice señala que tomó medidas para romper relaciones diplomáticas con Israel en noviembre de 2023⁵, y en la resolución de la Asamblea Nacional de 2021 se pedía al Gobierno “poner fin a cualquier tipo de comercio o intercambio militar, de formación policial o de seguridad con Israel”⁶.

d) **Cooperación de los Estados Miembros con las Naciones Unidas y presentación de información sobre las medidas que están adoptando.** En la resolución por la que se creó el Comité Especial en 1962 se instaba a todos los Estados Miembros a que hicieran cuanto estuviera en su poder para ayudar al Comité Especial a cumplir su tarea y se abstuvieran de todo acto que pudiera retrasar o dificultar la aplicación de la resolución. También se invitó a los Estados Miembros a que informaran a la Asamblea General de las medidas que hubieran tomado, individual o colectivamente, para disuadir al Gobierno de Sudáfrica de proseguir su política de *apartheid*. En la resolución por la que se reconstituya el Comité Especial deberían incluirse disposiciones similares sobre la cooperación y la presentación de informes por parte de los Estados Miembros, pero las disposiciones deberían redactarse de manera más enérgica para reflejar la posición actualmente consolidada de que las prohibiciones de la segregación racial y el *apartheid* son normas imperativas del derecho internacional⁷ y que, en consecuencia, los Estados Miembros están obligados a cooperar para poner fin a las violaciones de dichas prohibiciones, a no reconocer ninguna situación que se derive de una violación y a no ayudar ni contribuir al mantenimiento de dicha situación⁸. En particular, la resolución debería exigir a los Estados Miembros que informen al Comité Especial sobre las medidas que están adoptando para poner fin a las políticas y prácticas de segregación racial y *apartheid* de Israel. Apoyar firmemente a los organismos de las Naciones Unidas que hacen frente a las prácticas israelíes es especialmente importante en el clima actual, en el que Israel está atacando al personal y las instalaciones de las Naciones Unidas⁹ y ha prohibido la presencia del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA) y el mantenimiento de relaciones con él, en violación de la providencia sobre medidas provisionales de la Corte Internacional de Justicia y los preceptos básicos de humanidad¹⁰;

⁵ Gobierno de Belice, Oficina de Prensa, “Belize takes measures against Israel”, 14 de noviembre de 2023, disponible en www.pressoffice.gov.bz/belize-takes-measures-against-israel/.

⁶ Belice, resolución de la Asamblea Nacional sobre la moción relativa a Palestina, párr. 6.

⁷ Comisión de Derecho Internacional (CDI), Proyecto de conclusiones sobre la identificación y las consecuencias jurídicas de las normas imperativas, anexo, párr. e); CDI, Artículos sobre la responsabilidad del Estado, comentario al artículo 26, párr. 5, y comentario al artículo 40, párr. 4; y James Crawford, *Brownlie's Principles of Public International Law*, 9ª ed. (Oxford University Press, 2019), págs. 581 y 582.

⁸ CDI, Artículos sobre la responsabilidad del Estado, artículo 41; y *Consecuencias jurídicas que se derivan de las políticas y prácticas en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental*, opinión consultiva, párrs. 229 y 279.

⁹ Por ejemplo, Michelle Nichols, “Shots fired, bulldozers rammed cars during UN standoff with Israeli military”, *Reuters*, 10 de septiembre de 2024, disponible en www.reuters.com/world/middle-east/shots-fired-bulldozers-rammed-cars-during-un-standoff-with-israeli-military-2024-09-10/ (“A convoy of clearly marked armored U.N. vehicles in Gaza was encircled and held at gunpoint on Monday by Israeli forces”); y Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL), declaración de 20 de octubre de 2024, disponible en <https://unifil.unmissions.org/unifil-statement-20-october-2024>, en la que se indica que “a primera hora de hoy, una excavadora de las Fuerzas de Defensa de Israel demolió deliberadamente una torre de observación y la valla perimetral de una posición de las Naciones Unidas en Marwahin”.

¹⁰ Sam Sokol y Jacob Magid, “Knesset approves laws barring UNRWA from Israel, limiting it in Gaza and West Bank”, *The Times of Israel*, 29 de octubre de 2024, disponible en www.timesofisrael.com/knesset-approves-laws-barring-unrwa-from-israel-limiting-it-in-gaza-

e) **Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y suspensión.** En la resolución por la que se creó el Comité Especial en 1962 también se pedía al Consejo de Seguridad que tomara medidas apropiadas, incluso sanciones, para lograr que Sudáfrica cumpliera las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad, y que, de ser necesario, considerara la aplicación del Artículo 6 de la Carta, es decir, la expulsión. Debería incluirse una disposición similar en la resolución por la que se establezca el Comité Especial reconstituido, en la que se solicite al Consejo de Seguridad que garantice el cumplimiento por Israel de sus obligaciones internacionales en virtud de la Carta y de las prohibiciones del derecho internacional sobre segregación racial y *apartheid*, y que considere la posibilidad de suspender la pertenencia de Israel a las Naciones Unidas, o a determinados órganos de la Organización, en caso de incumplimiento. La resolución también debería recomendar que la Comisión de Verificación de Poderes de la Asamblea General considere la posibilidad de suspender la participación de Israel en su labor y se niegue a aceptar las credenciales de la delegación de Israel, como ocurrió con Sudáfrica¹¹;

f) **Inclusión de actividades específicas en el mandato.** El Comité Especial llevó a cabo varias de las actividades que se indican a continuación en relación con el fin del *apartheid* en Sudáfrica, que podrían formalizarse mediante su inclusión expresa en el mandato del Comité Especial reconstituido¹². Belice también incluye aquí propuestas adicionales para la inclusión de actividades específicas en el mandato:

- i) Promover la campaña internacional contra la segregación racial y el *apartheid*, incluso mediante presentaciones en los medios de comunicación y la organización de conferencias y seminarios para fomentar la acción coordinada de los Gobiernos y el público;
- ii) Presionar para que se impongan sanciones efectivas contra el régimen de *apartheid* y legitimar los llamamientos a la desinversión y el boicot (incluso en relación con el comercio y la participación de Israel en intercambios y foros culturales (por ejemplo, Eurovisión) y deportivos);
- iii) Organizar la asistencia a las víctimas de la segregación racial y el *apartheid*, y la asistencia a los movimientos de liberación, incluida la ayuda para organizar campañas destinadas a la liberación de presos políticos;
- iv) Dar publicidad al crimen y el hecho internacionalmente ilícito del *apartheid*, que es tan necesaria, así como a la legítima resistencia del pueblo palestino, con el fin de conseguir apoyo para la acción colectiva internacional;

[and-west-bank/](#); declaración del Secretario General sobre la legislación israelí relativa al UNRWA, 28 de octubre de 2024, disponible en www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2024-10-28/statement-of-the-secretary-general-israeli-legislation-unrwa; y *Aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza (Sudáfrica c. Israel)*, providencia de medidas provisionales, 28 de marzo de 2024, párr. 51, apartado 2 a), y véanse también la providencia de medidas provisionales de 26 de enero de 2024, párr. 86, apartado 4, y la providencia de medidas provisionales de 24 de mayo de 2024, párr. 57, apartado 2 b).

¹¹ UN Photo, “General Assembly decides to suspend South Africa from participation in its work”, 12 de noviembre de 1974, disponible en <https://media.un.org/photo/en/asset/oun7/oun7593912#:text=The%20decision%20upheld%20a%20ruling.delegation%20participare%20in%20its%20work>.

¹² Véanse Michigan State University, African Activist Archive, “Special Committee Against Apartheid”, disponible en <https://africanactivist.msu.edu/organization/210-813-65/>; y Enuga S. Reddy, “The struggle against apartheid: lessons for today’s world”, UN Chronicle, 1 de septiembre de 2007, disponible en www.un.org/en/chronicle/article/struggle-against-apartheid-lessons-todays-world.

v) Promover acciones fuera de los auspicios de las Naciones Unidas, como la creación de fondos y organismos con el apoyo de Gobiernos y organizaciones no gubernamentales comprometidos, con el fin de complementar, apoyar y, lo que es más importante, ir más allá de la acción de las Naciones Unidas y hacer lo que los organismos de las Naciones Unidas no pueden;

vi) Apoyar los esfuerzos internacionales de rendición de cuentas y reparación destinados a responsabilizar a los particulares y a Israel por el crimen y el hecho internacionalmente ilícito del *apartheid*, y garantizar que Israel cumple su obligación de reparar plenamente los daños causados por dicha conducta, en consonancia con la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia y la resolución [ES-10/24](#) de la Asamblea General¹³;

vii) Alentar al Consejo de Seguridad a que apruebe una resolución vinculante en la que se pida formalmente a los Estados Miembros, en virtud del Artículo 25 de la Carta de las Naciones Unidas, que cumplan sus obligaciones de cooperar para no reconocer las políticas y prácticas de segregación racial y *apartheid* de Israel y para ponerles fin y no ayudar ni contribuir a su continuación. La resolución del Consejo de Seguridad también debería obligar a los Estados Miembros a informar al Comité Especial sobre las medidas adoptadas, individual o colectivamente, para disuadir a Israel de proseguir sus políticas y prácticas de segregación racial y *apartheid*;

viii) Examinar los esfuerzos que los Estados Miembros están llevando a cabo para cumplir sus obligaciones de cooperar con objeto de poner fin a la segregación racial y el *apartheid* de Israel, e informar al respecto, y no reconocer esas políticas ni ayudar o contribuir a su continuación (incluida la presentación de informes de denuncia y descrédito);

ix) Reconocer y reflejar en su labor y sus actividades las conexiones multifacéticas entre las políticas de segregación racial y *apartheid* de Israel y sus demás violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, tal como han establecido las comisiones de investigación de las Naciones Unidas y otros órganos de la Organización (incluida la Corte Internacional de Justicia).

Además de reconstituir el Comité Especial, las Naciones Unidas deberían restablecer también el Centro de las Naciones Unidas contra el *Apartheid*. El Centro se creó inicialmente para ayudar al Comité Especial a desarrollar su campaña internacional, elaborar informes y estudios sobre la segregación racial y el *apartheid*, dirigir campañas de sensibilización pública y proporcionar asistencia humanitaria y educativa a las víctimas del *apartheid*. Podría desempeñar una función similar apoyando los esfuerzos del Comité Especial reconstituido en relación con Israel.

El establecimiento de un mecanismo de las Naciones Unidas centrado en poner fin a las políticas y prácticas de segregación racial y *apartheid* de Israel es de vital importancia. La experiencia histórica de Sudáfrica ha demostrado la increíble dificultad y complejidad de dismantelar las instituciones y las prácticas sistémicas de discriminación racial y *apartheid*, que se reflejan formalmente en la legislación y se fundamentan en la propaganda sancionada y producida por el Estado. En Sudáfrica, fueron necesarias décadas de activismo desde dentro del país —una perspectiva casi imposible para los palestinos, sometidos regularmente a represión violenta, incluso mediante el uso de la fuerza letal y el genocidio— y desde el exterior, junto con una importante presión económica internacional impuesta mediante sanciones y boicots comerciales. La magnitud de la presión que debe ejercerse sobre Israel no pueden

¹³ Opinión consultiva, párrs. 269 a 271; y resolución [ES-10/24](#), párrs. 5 c) a d), 9 y 11.

alcanzarla los Estados individuales por sí solos, sino que debe lograrse mediante el trabajo conjunto de la comunidad internacional, incluso a través de un mecanismo específico de las Naciones Unidas como medio para aglutinar, legitimar y apoyar la acción colectiva necesaria.

La necesidad de poner fin al abominable crimen del *apartheid* dondequiera que exista es siempre urgente, pero lo es especialmente en el caso de los palestinos, que son víctimas de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad¹⁴ y genocidio en Gaza¹⁵, y de una represión cada vez más violenta en la Ribera Occidental¹⁶. Cada día que pasa, continúa el sufrimiento de los palestinos a una escala inimaginable, con las crueles consecuencias del *apartheid*, que se ven agravadas por amenazas multifacéticas, interconectadas y constantes contra su vida y sus derechos humanos más fundamentales. Esta situación exige una acción urgente y significativa por parte de la comunidad internacional que sea adecuada para hacer frente a los desafíos únicos que se plantean.

Irán (República Islámica del)

[Original: inglés]
[23 de octubre de 2024]

Discriminación, según lo señalado por la Corte Internacional de Justicia en su opinión consultiva

La República Islámica del Irán presenta a continuación su propuesta en respuesta a la solicitud de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tal como se indica en el párrafo 14 de la resolución [ES-10/24](#) de la Asamblea General, en relación con el establecimiento de un mecanismo de seguimiento de las violaciones del artículo 3 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial cometidas por el régimen israelí y señaladas por la Corte Internacional de Justicia en su opinión consultiva. Esta propuesta expone meticulosamente la documentación jurídica y los hechos pertinentes relativos a las violaciones del artículo 3 de la Convención, que cumplen los criterios jurídicos de la comisión del crimen de *apartheid*; la documentación presentada demuestra que el régimen israelí ha establecido un sistema de *apartheid* para mantener la dominación sobre los palestinos. Además, se hace referencia al establecimiento de un sólido mecanismo de supervisión mediante la creación de un Comité de *Apartheid* que garantice la rendición de cuentas

¹⁴ Véase, por ejemplo, el informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel ([A/79/232](#) de 11 de septiembre de 2024), párrs. 89, 91, 94, 95, 98, 100, 102, 105 y 107 a 110, donde se constatan los crímenes de guerra de homicidio intencional, tortura, violación, ataques dirigidos intencionadamente contra civiles y personas protegidas específicamente, como el personal médico, ataques dirigidos intencionadamente contra objetos civiles y protegidos específicamente, como las instalaciones médicas, trato inhumano de detenidos y ultrajes a la dignidad personal, utilización de detenidos como escudos humanos, desplazamientos forzados y confiscación de bienes protegidos, así como los crímenes de lesa humanidad de exterminio, tortura, violación, traslado forzoso, desaparición forzada y otros actos inhumanos.

¹⁵ *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel)*, providencia de 26 de enero de 2024, párrs. 74 y 86, apartado 1; y véase, por ejemplo, el informe de la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, Francesca Albanese ([A/79/384](#) de 1 de octubre de 2024), párr. 3, en el que indica que “las dinámicas de violencia contra el grupo en su conjunto justifican la aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (Convención contra el Genocidio) para hacer cesar, prevenir y castigar el genocidio en todo el territorio palestino ocupado”.

¹⁶ *Ibid.*, párrs. 24 a 34.

por los crímenes de *apartheid* que el régimen israelí comete persistentemente, en consonancia con las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La representación de la República Islámica del Irán ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra presenta su evaluación jurídica y basada en hechos en la que aborda el arraigado sistema de *apartheid* impuesto por el régimen israelí al pueblo palestino. Este documento pretende arrojar luz sobre la naturaleza sistémica y omnipresente del *apartheid*, que ha evolucionado durante décadas, arraigado en leyes, políticas e instituciones diseñadas no para defender la justicia, sino para reforzar la dominación y la opresión raciales. Mediante una evaluación crítica de estos marcos jurídicos, se hace evidente que las instituciones del régimen israelí son instrumentos de *apartheid*, que privan sistemáticamente a los palestinos de sus derechos y libertades fundamentales. El aparato del régimen, que funciona con impunidad, se ha convertido en un símbolo perdurable de segregación y opresión raciales, afianzando un *statu quo* de grave injusticia que no puede ignorarse.

Además, la República Islámica del Irán pone de relieve que ninguno de los elementos de esta respuesta jurídica, ya se refiera a las leyes, instituciones o prácticas de este régimen ilegítimo, debe interpretarse como un reconocimiento del régimen israelí, ni como una desviación de las posiciones jurídicas y de principio que el Irán mantiene desde hace tiempo en relación con el *apartheid*, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y otros marcos jurídicos pertinentes. Este documento solo sirve para exponer que el régimen israelí es un régimen de *apartheid*. El análisis que se realiza describe las dimensiones fácticas y jurídicas de este sistema de opresión, ilustrando el profundo arraigo de sus violaciones del derecho internacional y de los derechos humanos. De este modo, se subraya la urgente necesidad de crear un Comité de *Apartheid*, encargado de llevar a cabo una investigación exhaustiva de las acciones y políticas discriminatorias del régimen de *apartheid* israelí, como paso fundamental hacia la justicia y la rendición de cuentas.

En relación con el párrafo 14 de la resolución [ES-10/24](#) de la Asamblea General, de 18 de septiembre de 2024, que se refiere al artículo 3 de la Convención, tal como señaló la Corte Internacional de Justicia en su opinión consultiva, hay que destacar varios aspectos fundamentales.

En primer lugar y ante todo, en la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las *Consecuencias jurídicas que se derivan de las políticas y prácticas de Israel en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental*, se llegó a una conclusión decisiva. La Corte declaró que:

La legislación y las medidas de Israel imponen y sirven para mantener una separación casi total en la Ribera Occidental y Jerusalén Oriental entre las comunidades de colonos y las comunidades palestinas. Por este motivo, la Corte considera que la legislación y las medidas de Israel constituyen una violación del artículo 3 de la Convención contra la Discriminación Racial¹.

Esta conclusión es de suma importancia, ya que el artículo 3 de la Convención prohíbe explícitamente la segregación racial y el *apartheid*. En este contexto, el Magistrado Tladi, en su opinión separada, afirmó inequívocamente: “la Corte acertó al considerar que las políticas y prácticas de Israel en el Territorio Palestino Ocupado equivalen a un *apartheid*”². Esta declaración refleja la naturaleza clara e irrefutable del régimen de *apartheid* de Israel que se observa en la Palestina ocupada.

¹ Opinión consultiva, párr. 229.

² *Ibid.*, declaración del Magistrado Tladi, párr. 5.

El argumento de que Israel se ha limitado a violar el artículo 3 sin incurrir en *apartheid* carece de fundamento jurídico. Esta línea de razonamiento pasa por alto la evidencia clara y sostenida de las políticas de *apartheid* en el Territorio Palestino Ocupado. Como se expone en el análisis jurídico y fáctico que figura a continuación, queda demostrado de forma concluyente que Israel constituye un régimen de *apartheid* en virtud del derecho internacional. Las pruebas presentadas, junto con las normas jurídicas pertinentes, corroboran firmemente esta realidad, que exige la rendición de cuentas por las graves violaciones y crímenes cometidos en su marco.

La amplitud y gravedad de las violaciones de discriminación racial cometidas contra los palestinos son evidentes en el análisis precedente de las políticas del régimen israelí contra los palestinos en virtud del artículo 5 de la Convención. Estas violaciones, persistentes y de gran alcance, no solo representan violaciones individuales de los derechos fundamentales, sino que colectivamente constituyen una forma sistemática e institucionalizada de dominación, que cumple los criterios del *apartheid*. Según el artículo II de la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de *Apartheid*, muchas de esas acciones reúnen los requisitos de “actos inhumanos” de *apartheid*. Las pruebas apuntan abrumadoramente a la responsabilidad del régimen israelí en la comisión de tales actos, tal como se definen en el artículo II, apartados a), c), d) y f), de la Convención sobre el *Apartheid*.

En primer lugar, al interpretar el término *apartheid*, es importante recordar que la definición de la Convención sobre el *Apartheid* va precedida de la afirmación “que incluirá las políticas y prácticas de segregación y discriminación racial tal y como se practican en África Meridional ...”. Las políticas y prácticas del régimen israelí en el Territorio Palestino Ocupado son, en muchos aspectos, idénticas a las de la Sudáfrica del *apartheid*. Como observó el Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia en el contexto del genocidio, la intención y la finalidad pueden inferirse de una serie de hechos y circunstancias, como el contexto general y la comisión sistemática de otros actos culpables dirigidos contra el mismo grupo³.

Dada la naturaleza global de las políticas y prácticas descritas, es imposible contemplar estos actos segregacionistas —especialmente la política explícita y prevista en la legislación que reserva la libre determinación en Palestina exclusivamente a las personas judías— sin reconocer su claro propósito de dominar a la población palestina. Además, es importante recordar que establecer “el propósito de dominación” no requiere que la dominación sea la única razón, o incluso la razón dominante, de las medidas discriminatorias. En la misma línea, las acciones del régimen israelí pretenden afianzar un sistema de dominación y segregación racial, con independencia de las justificaciones que se ofrezcan. Así pues, las pruebas presentadas demuestran de forma concluyente que el régimen israelí está perpetrando el crimen de *apartheid*. Prueba de ello es el establecimiento de un sistema jurídico dual, en virtud del cual a los colonos judíos se les aplica la legislación civil, que les otorga privilegios, mientras que los palestinos están sometidos a leyes y tribunales militares punitivos. Dicho sistema constituye claramente una segregación institucionalizada, una dominación y una opresión sistemática, que son los elementos definitorios del crimen de *apartheid* según el derecho internacional.

El artículo II a) de la Convención sobre el *Apartheid* se refiere a la denegación del derecho a la vida y a la libertad de la persona a los miembros de un grupo racial. Las políticas y prácticas del régimen israelí en la Ribera Occidental incluyen la ejecución extrajudicial de palestinos que se resisten a la ocupación, práctica de la que a menudo son víctimas los dirigentes políticos y militantes. Estos asesinatos se extienden también a la muerte de transeúntes inocentes, considerados “daños

³ Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia, Sala de Apelaciones, *Prosecutor v. Goran Jelisić*, causa núm. IT-95-10-A, fallo, 5 de julio de 2001, párr. 47.

colaterales” durante las operaciones militares. Las incursiones rutinarias, las redadas y el uso desproporcionado de la fuerza contra manifestantes civiles agravan aún más esta violación. Del mismo modo, la denegación de libertad se manifiesta en las detenciones masivas y el encarcelamiento sistemático de palestinos, que constituyen la inmensa mayoría de los detenidos en el Territorio Palestino Ocupado. Por ejemplo, en 2006, de los 9.498 presos de seguridad recluidos por el régimen israelí, solo 12 eran judíos israelíes⁴. Las detenciones arbitrarias, incluida la “detención administrativa” sin acusación ni juicio, siguen siendo un rasgo central de la política de ocupación del régimen, que ilustra un patrón deliberado y arraigado de dominación y opresión raciales contra el pueblo palestino.

El artículo II c) de la Convención sobre el *Apartheid* es una cláusula amplia, que define los actos de *apartheid* como cualquier medida diseñada deliberadamente para impedir que un grupo racial participe plenamente en la vida política, social, económica y cultural de un país, así como la creación intencionada de condiciones que impidan el pleno desarrollo de ese grupo. Esta disposición enumera nueve derechos y libertades fundamentales cuya negación obstruiría la capacidad del grupo subyugado para participar en el progreso civil, político, socioeconómico y cultural. Tal negación, a su vez, sirve para afianzar la dominación sistemática del opresor.

Las persistentes violaciones de estos derechos fundamentales por el régimen israelí en la Palestina ocupada, tal como se establece en el artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, están bien documentadas. A los palestinos se les niega sistemáticamente el derecho a la libertad de circulación, que está gravemente restringido mediante puestos de control, muros y otras barreras militares y administrativas. Además, su derecho a la libertad de residencia se ve constantemente menoscabado por las políticas de desplazamiento forzoso y demolición de viviendas, mientras que el derecho a salir de su país y regresar a él resulta prácticamente inaccesible debido a complejas restricciones jurídicas y burocráticas. A los palestinos también se les niega el derecho a una nacionalidad, ya que las políticas del régimen israelí erosionan deliberadamente el reconocimiento de su identidad y soberanía nacionales.

Además, se violan sistemáticamente derechos económicos como el derecho al trabajo. Las políticas de ocupación del régimen israelí limitan gravemente el acceso de los palestinos al empleo, lo que a menudo coarta su capacidad para dedicarse a actividades económicas productivas. Esto se extiende al derecho a formar sindicatos y afiliarse a ellos, que también está restringido, lo que merma aún más la capacidad de los palestinos de organizarse colectivamente para proteger sus derechos laborales y su bienestar económico. Estas violaciones acumulativas, tal como se describen en el artículo II c) de la Convención sobre el *Apartheid*, demuestran el esfuerzo deliberado y constante del régimen israelí por sofocar el desarrollo político, social y económico del pueblo palestino, reforzando las arraigadas estructuras de segregación y dominación racial.

El informe de 2009 de la Misión de Investigación de las Naciones Unidas sobre el Conflicto de Gaza corrobora de manera significativa la afirmación de que existe *apartheid* en el Territorio Palestino Ocupado, especialmente en relación con el artículo II a) y c) de la Convención sobre el *Apartheid*. El informe presenta meticulosamente pruebas contundentes de “discriminación y trato diferenciado” entre palestinos y judíos israelíes, que abarcan ámbitos esenciales como el trato judicial, el uso de la tierra, la vivienda y el acceso a los recursos naturales; la ciudadanía, la residencia y la reagrupación familiar; el acceso al suministro esencial de alimentos y agua; el uso de la fuerza contra los manifestantes; la libertad de circulación; y el

⁴ Carta dirigida a Adalah, The Legal Center for Arab Minority Rights in Israel, por el Servicio de Prisiones del régimen israelí (6 de noviembre de 2006).

acceso a la sanidad, la educación, los servicios sociales y la libertad de asociación. Las conclusiones del informe afirman rotundamente la existencia de una discriminación sistémica contra los palestinos, y plantea la posibilidad grave de que se esté cometiendo el crimen de persecución como crimen de lesa humanidad⁵.

La sistemática discriminación, tanto en la ley como en la práctica, contra los palestinos en la legislación (en particular, la existencia de un sistema legal y judicial totalmente separado que brinda sistemáticamente peores condiciones que las aplicables a los israelíes) y en la práctica durante el arresto, la detención, el juicio y la condena, en comparación con los ciudadanos israelíes es contraria al artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y potencialmente es violatoria de la prohibición de la persecución como crimen de lesa humanidad⁶.

Por consiguiente, este conjunto de pruebas no solo confirma la opinión de que las políticas y prácticas del régimen israelí violan principios fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos, sino que también refuerza el argumento de que tales violaciones constituyen de hecho *apartheid*. El carácter de *apartheid* del régimen israelí ha sido meticulosamente documentado en los dos últimos años por la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos. La Relatora Especial concluyó inequívocamente que las políticas y prácticas discriminatorias sistémicas y generalizadas de Israel contra los palestinos constituyen un crimen de *apartheid* en virtud del derecho internacional⁷.

El artículo II d) de la Convención sobre el *Apartheid* prohíbe expresamente las medidas destinadas a dividir a la población según criterios raciales. Dicha segregación es una característica definitoria de un sistema de *apartheid*, que evoca las políticas de “gran *apartheid*” de Sudáfrica, especialmente a través de su mención a la creación de reservas y guetos separados para grupos raciales específicos. Las políticas aplicadas por el régimen israelí a lo largo de la ocupación, sobre todo desde finales de la década de 1970, han culminado en la construcción del muro desde 2002 y el bloqueo continuado de Gaza desde 2007. Estas acciones han fragmentado efectivamente la Palestina ocupada en una serie de enclaves no contiguos o “reservas”, confinando a los palestinos dentro de estas regiones aisladas. Jerusalén Oriental, que es el corazón cultural y económico de Palestina, ha sufrido un impacto similar, con los palestinos segregados en gran medida de la población judío-israelí de la ciudad y cada vez más aislados del resto de la Palestina ocupada.

Mediante restricciones de residencia y circulación que promueven la agenda explícita de “judaizar” la ciudad e incorporarla plenamente al régimen israelí, los residentes palestinos de Jerusalén Oriental, aunque están sujetos a la jurisdicción de la legislación y la fiscalidad del régimen israelí, históricamente han quedado excluidos de los derechos asociados a la ciudadanía y privados de servicios esenciales. Se enfrentan a la exclusión sistemática de la residencia en la ciudad mediante la revocación de documentos de identidad, la imposición de una prueba de “centro de vida” excesivamente onerosa (que no se aplica equitativamente a los colonos judíos de Jerusalén Oriental) y la redefinición de los límites municipales de la ciudad para despojar a los palestinos que residen en el lado oriental del Muro de su condición de residentes en Jerusalén. Estos reajustes burocráticos discriminatorios

⁵ Naciones Unidas, informe de la Misión de Investigación de las Naciones Unidas sobre el Conflicto de Gaza (A/HRC/12/48 de 15 de septiembre de 2009), párrs. 113, 206, 208, 938, 1427, 1577, 1579 y 1616.

⁶ *Ibid.*, párr. 1502.

⁷ Informe de la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967 (A/77/356 de 21 de septiembre de 2022), párr. 9.

pueden contextualizarse en el marco de los “planes maestros” israelíes que describen visiones para una “Gran Jerusalén judía”, cuyo objetivo es reducir aún más el sector palestino de la población de la ciudad.

La definición de *apartheid* que figura en el artículo II de la Convención sobre el *Apartheid* establece que, para que sean constitutivos del crimen de *apartheid*, los actos inhumanos deben ser “cometidos con el fin de instituir y mantener la dominación de un grupo racial de personas sobre cualquier otro grupo racial de personas y de oprimirlo sistemáticamente”. La principal motivación de las acciones de las autoridades civiles y militares del régimen israelí en la Palestina ocupada es aislar y privilegiar los asentamientos judíos y sus infraestructuras asociadas, minimizando así las incursiones palestinas en la vida de la población de colonos dominante.

Es evidente que los actos perpetrados por el régimen israelí no son aleatorios ni aislados; por el contrario, son componentes de un sistema global y opresivo, que es de carácter institucionalizado y sistemático y se manifiesta en la concesión de un trato separado y desigual a los palestinos. Este enfoque sistemático subraya la intención de mantener un orden jerárquico que privilegie a un grupo racial sobre otro, cumpliendo así los criterios establecidos en la Convención sobre el *Apartheid*.

En el núcleo de las políticas de *apartheid* del régimen israelí contra los palestinos se encuentra un marco jurídico que establece un concepto de “nacionalidad judía” y privilegia sistemáticamente a los nacionales judíos frente a las comunidades no judías. Esta arquitectura jurídica no solo consagra la noción de supremacía judía, sino que también institucionaliza disparidades que marginan a las personas y comunidades palestinas, reforzando una jerarquía basada en la etnia y la nacionalidad. Las implicaciones de este sistema van mucho más allá de las meras distinciones jurídicas; impregnan diversas facetas de la vida cotidiana y abarcan el acceso a los recursos, los derechos civiles y los servicios sociales, perpetuando así un régimen de desigualdad y opresión.

El marco jurídico del régimen israelí se distingue notablemente por su diferenciación entre nacionalidad y ciudadanía, y dicho régimen se posiciona como la nación judía. En este contexto, no existe reconocimiento legal de una “nación israelí” a efectos jurídicos ni políticos. La jurisprudencia del Tribunal Supremo del régimen israelí refuerza aún más esta caracterización, afirmando que tal régimen se define no como la “nación israelí”, sino explícitamente como la “nación judía”⁸. Esta distinción tiene profundas consecuencias para los derechos y el estatuto de los ciudadanos no judíos, e institucionaliza de hecho una jerarquía que privilegia a los nacionales judíos y margina a los demás dentro del marco jurídico y político del Estado. Por otra parte, la Ley de Ciudadanía de 1952 concede a los inmigrantes que entran con el visado *oleh* el derecho a adquirir inmediatamente la ciudadanía, lo que constituye una prueba más del régimen de *apartheid* de Israel.

La codificación de la nacionalidad judía es profundamente significativa de las circunstancias imperantes en la Palestina ocupada, donde las leyes del régimen israelí confieren sistemáticamente privilegios a los colonos judíos a expensas de los residentes palestinos. En el ámbito de la legislación sobre la tierra, las disparidades antes mencionadas relativas al acceso exclusivo de los judíos a la tierra se extienden a cualquier territorio designado como “tierra del Estado” por el régimen israelí. La Ley de Bienes Estatales de 1951 facilita la incorporación de esas “tierras del Estado” en cualquier región donde se apliquen las leyes del régimen israelí, lo que abarca los territorios que dicho régimen ocupa. Una parte sustancial de la Ribera Occidental ha sido clasificada como “tierra del Estado” por el régimen israelí, lo que impide de

⁸ *George Rafael Tamarin v. the State of Israel* (20 de enero de 1972), 26 PD I 197.

hecho el acceso palestino para facilitar el establecimiento de asentamientos judíos, puestos militares avanzados y reservas naturales. Este enfoque sitúa gran parte del territorio dentro de un marco estructurado, destinado a administrar la “tierra del Estado” únicamente en beneficio de la población judía.

En la Ribera Occidental, el régimen israelí ha confiscado más de 2 millones de dunums de tierra palestina, lo que supone más de un tercio del territorio. Esto incluye decenas de miles de dunums que el propio régimen reconoce que son propiedad privada de palestinos. Según datos de la Administración Civil israelí, las autoridades del régimen israelí asignaron 674.459 dunums de tierras del Estado en la Ribera Occidental principalmente para su uso por ciudadanos del régimen israelí, sobre todo para la expansión de los asentamientos⁹. Esta asignación representa el 99,76 % de toda la tierra del Estado designada para uso de terceros, lo que apenas deja un 0,24 %, es decir, aproximadamente 1.600 dunums, para los palestinos. De este porcentaje mínimo, el 80 % fue asignado como “indemnización” por tierras confiscadas para asentamientos o como tierras alternativas tras el desplazamiento forzoso de beduinos palestinos de sus tierras ancestrales. Además, 400.000 dunums de estas tierras del Estado se asignaron a la Organización Sionista Mundial, cuya División de Asentamientos se encarga de establecer y fortalecer los asentamientos judíos en la periferia del país mediante la consolidación de las tierras del Estado proporcionadas por el Gobierno¹⁰.

Salvo en algunos asentamientos específicos de Jerusalén Oriental, el derecho de residencia dentro de los asentamientos judíos de la Palestina ocupada está totalmente restringido para los palestinos, y solo pueden acceder a él los ciudadanos del régimen israelí o las personas de ascendencia judía con derecho a la ciudadanía o a la residencia en virtud de la Ley del Retorno del régimen israelí. Esta disposición subraya el marco racial que sustenta la colonización y la gobernanza de estos territorios por parte del régimen israelí, en virtud del cual incluso los judíos que no son ciudadanos del régimen israelí gozan de privilegios frente a la población palestina autóctona. En consecuencia, la intersección de raza y nacionalidad se hace profundamente desigual, lo que refleja un sesgo sistemático que privilegia a un grupo a expensas de otro.

La discriminación en el régimen israelí no se limita únicamente a las distinciones entre ciudadanos del régimen israelí y los palestinos que no son ciudadanos, sino que se extiende más profundamente a quienes la legislación del régimen israelí clasifica como nacionales judíos (que tienen derecho a la ciudadanía en virtud de la Ley del Retorno) frente a quienes no lo son. La Misión Internacional Independiente de Investigación, a la que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas encargó investigar las repercusiones de los asentamientos del régimen israelí en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de los palestinos en todo el Territorio Palestino Ocupado, ha abordado exhaustivamente esta cuestión. En su informe de 2013, la Misión destacó la existencia de sistemas jurídicos distintos para colonos y palestinos, y concluyó que estas disparidades representan una clara manifestación de discriminación institucionalizada.

El régimen jurídico de segregación que opera en el Territorio Palestino Ocupado ha permitido el establecimiento y la consolidación de los asentamientos mediante la creación de un espacio jurídico privilegiado para los asentamientos y los colonos. Ello se traduce en violaciones diarias de multitud de derechos

⁹ Peace Now, “State land allocation in the West Bank — for Israelis only”, 17 de julio de 2018, disponible en <https://peacenow.org.il/en/state-land-allocation-west-bank-israelis>.

¹⁰ Asociación de Derechos Civiles de Israel, “Information sheet: Allocation of State land in OPT”, disponible en <https://law.acri.org.il/en/2013/04/23/info-sheet-state-land-opt/> (consulta: 4 de junio de 2020).

humanos de los palestinos en el Territorio Palestino Ocupado, incluida, de manera incontrovertible, la violación de sus derechos a la no discriminación, a la igualdad ante la ley y a la igual protección de la ley¹¹.

La misión de investigación demuestra que los colonos se han aprovechado de su estatuto jurídico privilegiado para perpetrar actos de violencia contra los palestinos y sus bienes, y que el régimen israelí permite que tales actos continúen con impunidad. Esta impunidad, unida a la intención del régimen, lleva a la conclusión inequívoca de que la discriminación institucionalizada se practica de forma sistemática contra el pueblo palestino en materia de violencia. Estas realidades hacen aún más visible que el régimen israelí es un sistema de *apartheid*, carente de legitimidad, ya que incluso su marco jurídico interno está diseñado para mantener y perpetuar las políticas de *apartheid*.

Donde más se refleja la institucionalización de la discriminación y la dominación en el marco jurídico del régimen israelí es en el sistema jurídico dual que se aplica en la Ribera Occidental. A los colonos judíos se les aplican la legislación civil israelí y las protecciones constitucionales, mientras que los palestinos están sometidos al régimen militar. Este sistema crea una clara separación entre las dos poblaciones, ya que los colonos judíos se benefician de privilegios jurídicos de los que no dispone la población palestina ocupada. El marco jurídico funciona según el principio de “separados pero desiguales”, lo que refuerza la segregación y la desigualdad.

La aplicación de la legislación civil israelí a los colonos judíos de la Palestina ocupada se produce a través de mecanismos jurídicos tanto territoriales como personales. Desde el punto de vista territorial, se incorporan elementos del derecho civil israelí a las órdenes militares que rigen los asentamientos judíos. Estas órdenes permiten al Comandante Militar israelí extender la legislación nacional a los asentamientos, fusionando de hecho el derecho de los asentamientos con el derecho israelí, lo que disminuye la distinción jurídica entre el territorio israelí y la Palestina ocupada.

A título personal, los colonos israelíes, incluidos los no ciudadanos que pueden inmigrar en virtud de la Ley del Retorno, están sujetos a la legislación israelí incluso cuando residen en la Palestina ocupada. Por ejemplo, la Ley de Prórroga del Reglamento de Emergencia de 1977 permite que los colonos acusados de infracciones penales en la Ribera Occidental sean juzgados por tribunales civiles israelíes en lugar de por tribunales militares, que están reservados a los palestinos. Esto crea un marco jurídico que extiende el derecho penal israelí a los colonos, lo que les otorga derechos y protecciones que se niegan a los palestinos bajo el régimen militar.

En efecto, la pertinencia jurídica de la legislación local del Territorio Palestino Ocupado para los colonos judíos es mínima, ya que el derecho israelí regula su gobernanza, lo que crea un sistema de segregación jurídica y administrativa que impone un trato desigual entre los colonos y la población palestina. Además, los llamados derechos constitucionales del régimen israelí se extienden a los colonos en función de su conexión personal con este régimen. El Tribunal Supremo israelí ha afirmado que los colonos tienen derecho a protecciones constitucionales, incluso cuando residen fuera de territorio israelí, siempre que la zona permanezca bajo control israelí. Esta aplicación personal de los derechos no solo pone de manifiesto el fundamento racial del sistema jurídico, que privilegia a los colonos en función de su

¹¹ Naciones Unidas, informe de la misión internacional independiente de investigación de las repercusiones de los asentamientos israelíes en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales del pueblo palestino en todo el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental (A/HRC/22/63 de 7 de febrero de 2013), párr. 49.

identidad judía, sino que también expone la naturaleza profundamente arraigada del régimen de *apartheid*. Al consagrar estas prácticas discriminatorias en sus marcos jurídico e institucional, el régimen israelí perpetúa la opresión y la desigualdad sistémicas.

Este régimen no puede reclamar legitimidad, ya que sus propias instituciones y leyes están estructuradas para afianzar el *apartheid* y negar los derechos humanos básicos a la población palestina autóctona. El sistema jurídico, diseñado para privilegiar a un grupo a expensas de otro, es inherentemente injusto y sirve como instrumento de dominación. En ese contexto, la noción de legitimidad jurídica se vuelve insostenible, ya que las propias leyes del régimen perpetúan la opresión y el sometimiento de todo un pueblo, despojándolo de cualquier fundamento moral o jurídico a ojos de la comunidad internacional.

En marcado contraste con el trato que dispensa a los colonos judíos en el mismo territorio, el Tribunal Supremo israelí se ha negado sistemáticamente a extender las protecciones constitucionales a los palestinos¹². En cambio, los palestinos están sometidos a la aplicación personal y territorial de la legislación militar israelí. Durante los tres primeros meses de la ocupación israelí en 1967, se introdujeron más de 100 medidas legislativas militares en la Ribera Occidental, y casi otras tantas en Gaza. Apenas dos días después de iniciada la Guerra de los Seis Días, se aprobó la Proclamación Militar núm. 2, que confería toda la autoridad legislativa, ejecutiva y judicial al Comandante Militar israelí¹³. Desde entonces, las autoridades militares han aplicado más de 2.500 órdenes militares que han reformado drásticamente las leyes preexistentes y regulan desde los impuestos sobre el alcohol¹⁴ hasta la gestión de los recursos naturales¹⁵, especificando incluso los tipos de frutas y hortalizas que los palestinos pueden cultivar¹⁶.

El régimen israelí, mediante el establecimiento de un sistema de *apartheid*, sigue explotando y saqueando los recursos naturales pertenecientes al pueblo palestino. Como ha documentado la Relatora Especial, el régimen israelí ha implantado un marco de control complejo y opresivo sobre el territorio palestino ocupado, diseñado para beneficiar exclusivamente a sus colonias ilegales. Este sistema socava gravemente el derecho de los palestinos a la libre determinación, consagrado en el artículo 1, párrafo 2, común del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que garantiza la soberanía permanente de los pueblos sobre sus recursos naturales como aspecto fundamental de su desarrollo económico.

Además, en el territorio palestino ocupado ilegalmente opera una red de empresas nacionales e internacionales que explotan recursos como el agua, la tierra y los minerales en detrimento de la población palestina. Estas empresas no solo privan a los palestinos de su legítimo acceso a tales recursos, sino que también realizan “pruebas sobre el terreno” de equipos militares, y extraen riqueza en beneficio exclusivo de los asentamientos israelíes y de la potencia ocupante. Esta explotación

¹² Véanse, por ejemplo, *Adalah et al. v. Minister of Interior et al.*, HCJ 7052/03, sentencia de 14 de mayo de 2006 (causa de la reunificación familiar); *Adalah v. Minister of Defence*, HCJ 8276/05, sentencia de 12 de diciembre de 2006 (causa de la Ley de No Indemnización).

¹³ Proclamación Militar núm. 2, relativa a la regulación y autoridad del poder judicial (7 de junio de 1967).

¹⁴ Orden Militar núm. 38, relativa a las bebidas alcohólicas (4 de julio de 1967).

¹⁵ Véase, entre otras, la Orden Militar núm. 92, relativa a la jurisdicción sobre el Reglamento de Aguas (15 de agosto de 1967).

¹⁶ Véanse, por ejemplo, la Orden Militar núm. 474, relativa a la modificación de la Ley de Preservación de Árboles y Plantas (26 de julio de 1972); la Orden Militar núm. 1039, relativa al control de la plantación de árboles frutales (5 de enero de 1983); y la Orden Militar núm. 1147, relativa a la supervisión de árboles frutales y hortalizas (30 de julio de 1985).

organizada afianza aún más el régimen de *apartheid* de Israel, solidificando su dominación sistemática e ilegal sobre el pueblo palestino y su tierra, como ha afirmado expresamente la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados:

En la zona C de la Ribera Occidental, que contiene la mayoría de los recursos naturales y casi toda la tierra cultivable de la Ribera Occidental, Israel mantiene un monopolio total sobre los manantiales de agua y solo ha designado el 1 % de las tierras al desarrollo de Palestina. El “sistema de coordinación” que Israel supuestamente ha establecido para facilitar a los palestinos el acceso a sus tierras es complicado e ineficiente¹⁷.

Las órdenes militares han conferido al ejército del régimen israelí amplia autoridad sobre las cuestiones relacionadas con el agua en la Ribera Occidental y han designado los recursos hídricos como propiedad del Estado¹⁸. Además, estas órdenes prohíben a los palestinos establecer o utilizar instalaciones hidráulicas sin autorización previa, con lo que restringen de hecho su acceso a los recursos y servicios hídricos esenciales¹⁹. Las autoridades del régimen israelí ejercen un control primordial sobre los recursos hídricos de la Ribera Occidental, asignando el agua de forma discriminatoria para la población palestina. Dos de los tres principales recursos hídricos de Israel, el río Jordán y el acuífero de la Montaña, que comprende tres cuencas, fluyen predominantemente por la Ribera Occidental. El tercer recurso, el acuífero costero, se extiende a lo largo de la costa de Israel y Gaza²⁰. El régimen israelí ha utilizado su control sobre partes del acuífero de la Montaña para beneficiar a sus propios ciudadanos y colonos, en violación del derecho internacional humanitario, que prohíbe a las potencias ocupantes explotar los recursos naturales para su beneficio económico. En particular, mientras que aproximadamente el 80 % de la zona de alimentación de agua del acuífero de la Montaña se encuentra bajo la Ribera Occidental, Israel extrae anualmente alrededor del 90 % del agua total que se retira del acuífero, dejando a los palestinos con apenas un 10 % para su propio uso²¹.

Además, las autoridades israelíes han negado de hecho a los palestinos el acceso al río Jordán, único recurso hídrico de superficie importante en la Ribera Occidental, desviando su caudal aguas arriba. Entre 2009 y julio de 2019, esas autoridades demolieron o confiscaron 547 estructuras que proporcionaban servicios de agua y saneamiento, incluidas cisternas, tuberías de agua y letrinas móviles, según informó la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas²². En 2009, el Banco Mundial informó de que el consumo total de agua de los israelíes en la Ribera Occidental era cuatro veces mayor que el de la población palestina²³. Esta

¹⁷ Naciones Unidas, informe de la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967 (A/77/356 de 21 de septiembre de 2022), párr. 49.

¹⁸ Orden Militar núm. 158, por la que se modifica la Ley de Supervisión del Agua, 30 de octubre de 1967, publicada en JMCC, *Israeli Military Orders*, párr. 22.

¹⁹ Orden Militar núm. 291, relativa a la solución de controversias sobre la tierra y el agua, 19 de diciembre de 1968, publicada en JMCC, *Israeli Military Orders*, párr. 38.

²⁰ Al Haq, “Water for one people only: discriminatory access and ‘water-apartheid’ in the OPT”, 8 de abril de 2013, disponible en www.alhaq.org/publications/8073.html (consulta: 4 de junio de 2020), párrs. 28 y 29.

²¹ Naciones Unidas, “Informe de la misión internacional independiente de investigación” (A/HRC/22/63), párr. 81.

²² Naciones Unidas, “Humanitarian needs overview – OPT”, ciclo de programación humanitaria 2020, diciembre de 2019, disponible en www.ochaopt.org/sites/default/files/hno_2020-final.pdf (consulta: 4 de junio de 2020), párr. 43.

²³ Banco Mundial, “Assessment of restrictions on Palestinian water sector development”, párr. 13.

privación sistemática de los recursos hídricos agrava considerablemente la crisis humanitaria a la que se enfrenta el pueblo palestino.

En el ámbito de la construcción, el régimen israelí ha afianzado su sistema de *apartheid* aplicando leyes y políticas opresivas diseñadas específicamente para marginar y discriminar a los palestinos, perpetuando así un régimen de segregación racial y *apartheid* sistémicos. De hecho, las autoridades del régimen israelí han dificultado enormemente a los palestinos la obtención de permisos de construcción en la zona C, que constituye el 60 % de la Ribera Occidental bajo jurisdicción exclusiva israelí. En el período de dos décadas comprendido entre 2000 y 2019, esas autoridades concedieron únicamente 245 permisos de construcción a palestinos en la zona C, lo que supone menos del 4 % del total de solicitudes presentadas. En el plazo concreto de 2016 a 2018, solo se concedieron 21 permisos, lo que representa menos del 1,5 % de las solicitudes recibidas. Además, entre 2009 y 2020, las autoridades israelíes demolieron sistemáticamente 5.817 estructuras propiedad de palestinos, incluidas residencias, principalmente por carecer de los permisos necesarios, según informó la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas²⁴. En marcado contraste, el régimen israelí ofrece multitud de incentivos, como ayudas a la vivienda, subvenciones a las empresas (sobre todo en los sectores agrícola e industrial), ventajas presupuestarias y exenciones fiscales, para alentar a los israelíes judíos a trasladarse a los asentamientos. Este enfoque ha facilitado la expansión constante e ilegal de los asentamientos israelíes en la Ribera Occidental durante varias décadas. Entre 2009 y 2020, las autoridades israelíes iniciaron la construcción de más de 23.696 viviendas en asentamientos de la Ribera Occidental, excluida Jerusalén Oriental²⁵.

Entre las órdenes militares más importantes relacionadas con la seguridad se encuentran la Orden Militar núm. 378, que regula las infracciones penales y la detención²⁶, y la Orden Militar núm. 1229, que permite la detención “administrativa” sin cargos ni juicio durante períodos prolongados²⁷. En virtud de este régimen militar, los palestinos son sometidos habitualmente a períodos más largos de detención previa a la formulación de cargos y reciben condenas más rigurosas que sus homólogos judíos, incluso cuando son acusados del mismo delito en el mismo territorio²⁸. La aplicación de estas órdenes militares se produce en el marco de un sistema de tribunales militares que se ha convertido en una pieza institucional central del aparato de control del régimen israelí sobre los palestinos de la Ribera Occidental y Gaza.

Más allá de las distinciones jurídicas claras, existen otras prácticas de *apartheid* a través de reglamentos militares no publicados o políticas militares *de facto*, que se aplican sin referencia jurídica formal. Un ejemplo de ello es el sistema de carreteras segregadas de la Ribera Occidental, que es una característica clave de la fragmentación territorial que es reflejo de políticas segregacionistas más amplias. Esta red de carreteras, vital para el control del régimen israelí, surgió mediante decisiones de

²⁴ Naciones Unidas, Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, “Data on demolition and displacement in the West Bank”, disponible en www.ochaopt.org/data/demolition.

²⁵ Peace Now, “Annual settlement report 2018: A glance at 10 years under Netanyahu”, 14 de mayo de 2019.

²⁶ Orden Militar núm. 378, relativa a disposiciones de seguridad (20 de abril de 1970).

²⁷ Orden Militar núm. 1229, relativa a la detención administrativa (Reglamento provisional) (17 de marzo de 1988). Debido a las incoherencias de numeración entre las órdenes militares del régimen israelí, la Orden Militar núm. 1229 también se conoce como Orden Militar núm. 1226, dependiendo de si fue publicada individualmente o en un volumen recopilatorio por las autoridades del régimen israelí.

²⁸ Véanse los artículos 51A y 78 de la Orden Militar núm. 378, relativa a disposiciones de seguridad; el artículo 29 a) de la Ley de Procedimiento Criminal de 1996 (Facultades coercitivas – Detenciones); y el artículo 298 de la Ley Penal de 1977.

planificación y construcción que carecen de una base legislativa específica, pero que sirven para reforzar las estructuras de *apartheid* inherentes a la ocupación.

En resumen, las instituciones y los marcos jurídicos del régimen israelí carecen de toda apariencia de legitimidad, ya que sirven como instrumentos de un sistema de *apartheid* profundamente arraigado que ha perpetuado sistemáticamente actos de *apartheid* contra el pueblo palestino durante décadas, todo ello mientras opera con impunidad y elude la rendición de cuentas. Este documento ha descrito meticulosamente las dimensiones de hecho y de derecho del régimen de *apartheid* impuesto en los territorios ocupados, poniendo de relieve las marcadas disparidades en el trato jurídico, los derechos civiles y el acceso a los recursos que caracterizan la vida cotidiana de los palestinos. El carácter sistemático de estos actos no solo pone de relieve la violación inherente de derechos humanos fundamentales, sino que también ejemplifica una estrategia más amplia dirigida a la marginación y privación de derechos de toda una población.

Dada la existencia de un sistema de *apartheid* y la comisión deliberada, sistemática e intencionada de tales actos por el régimen israelí, la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967 también ha recomendado en su informe:

Elabor[ar], en el seno de la Asamblea General, un plan para poner fin al *statu quo* ilegal e insostenible que constituye la causa fundamental de la última escalada, que en última instancia culminó en el genocidio de Gaza, incluso mediante la reconstitución del Comité Especial contra el *Apartheid*, para abordar de forma exhaustiva la situación en Palestina, y estar dispuestos a aplicar las medidas diplomáticas, económicas y políticas previstas en la Carta en caso de incumplimiento por parte de Israel²⁹.

Habida cuenta de nuestras conclusiones y en respuesta a la carta de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de fecha 16 de octubre de 2024, por la presente solicitamos la creación de un Comité de *Apartheid* para investigar a fondo las acciones y políticas del régimen de *apartheid* israelí. Esta investigación es imprescindible para exigir responsabilidades a quienes perpetúan esta opresión duradera y para afirmar los derechos y la dignidad de la población palestina.

Maldivas

[Original: inglés]
[6 de noviembre de 2024]

El Gobierno de Maldivas desea presentar la siguiente contribución en respuesta a la solicitud de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de que se hagan aportaciones en relación con la resolución [ES-10/24](#) de la Asamblea General, titulada “Opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas derivadas de las políticas y prácticas de Israel en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y de la ilegalidad de la presencia continuada de Israel en el Territorio Palestino Ocupado”, que fue aprobada el 18 de septiembre de 2024 durante el décimo período extraordinario de sesiones de emergencia de la Asamblea General en relación con el tema del programa titulado “Medidas ilegales israelíes en la Jerusalén Oriental Ocupada y el resto del Territorio Palestino Ocupado”.

²⁹ Naciones Unidas, informe de la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967 ([A/HRC/55/73](#) de 1 de julio de 2024), párr. 97 e).

Posición nacional de Maldivas sobre la cuestión de Palestina

La posición nacional de larga data de Maldivas sobre la cuestión de Palestina afirma que la única solución sostenible al conflicto israelo-palestino reside en el establecimiento de un Estado de Palestina soberano e independiente, basado en las fronteras anteriores a 1967, con Jerusalén Oriental como capital.

En múltiples ocasiones y foros, Maldivas ha condenado enérgicamente los ataques violentos y la agresión israelí contra el pueblo de Palestina.

Maldivas pide la retirada completa e incondicional de Israel de todos los territorios palestinos ocupados desde 1967, para permitir al pueblo palestino ejercer su libre determinación y establecer su propio Estado independiente y soberano.

Maldivas apoya firmemente la plena incorporación de Palestina a las Naciones Unidas y concede asimismo su apoyo incondicional a su incorporación a cualquier otra organización internacional. Además, Maldivas copatrocinó la resolución de la Asamblea General por la que se concedió la condición de Estado observador no miembro al Estado de Palestina.

Maldivas cree firmemente que el derecho internacional debe aplicarse por igual a todos los Estados Miembros: Israel debe adherirse a los principios del derecho humanitario, el derecho de los derechos humanos, las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y los Convenios de Ginebra.

Participación de Maldivas en la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las “Consecuencias jurídicas que se derivan de las políticas y prácticas de Israel en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental”

Maldivas presentó una declaración escrita ante la Corte Internacional de Justicia el 25 de julio de 2023 y compareció ante la Corte y presentó alegaciones orales en el procedimiento consultivo el 26 de febrero de 2024.

El Gobierno de Maldivas estuvo representado en la Corte por el Embajador de la República de Maldivas en Alemania, Excmo. Sr. Aishath Shaan Shakir, la Sra. Amy Sander, Essex Court Chambers, y la Dra. Naomi Hart, Essex Court Chambers.

En su discurso de apertura, el Embajador Shaan declaró que el apoyo al pueblo palestino, incluida su lucha por un Estado de Palestina independiente y soberano, ha sido durante mucho tiempo una piedra angular de la política exterior de Maldivas y sigue siéndolo bajo la actual administración.

La intervención oral de Maldivas se centró en las múltiples y graves violaciones del derecho internacional cometidas por Israel en el Territorio Palestino Ocupado, haciendo hincapié en sus prácticas en relación con los recursos hídricos.

Maldivas también se sumó a numerosos Estados al afirmar que las políticas y prácticas de Israel en el Territorio Palestino Ocupado equivalen a *apartheid*.

Contribución en relación con el párrafo 14 de la resolución ES-10/24 de la Asamblea General

A fin de establecer un mecanismo de seguimiento eficaz del artículo 3 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial en lo que respecta a la prevención de la segregación racial y el *apartheid* en Palestina, Maldivas propone los siguientes enfoques:

a) Alentar y apoyar a la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967

para que realice una visita al Territorio Palestino Ocupado y vigile sistemáticamente las prácticas de segregación racial y *apartheid* en Palestina, e instar al Estado de Israel a que cumpla las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y el derecho internacional y permita el acceso de la Relatora Especial a los Territorios Palestinos Ocupados para llevar a cabo su mandato;

b) Pedir que se presenten informes anuales al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial que documenten las prácticas de segregación, los sistemas de *apartheid* y otras violaciones de los derechos humanos;

c) Aplicar métodos fiables y normalizados para recopilar y cuantificar datos sobre discriminación racial, centrándose específicamente en las políticas que afectan a los derechos de propiedad, las limitaciones de circulación y el acceso a los servicios dentro del Territorio Palestino Ocupado;

d) Pedir a los Estados Miembros que cesen la venta y el envío de armas, municiones y vehículos militares al Estado de Israel y que establezcan y mantengan un embargo de armas sobre el Estado de Israel para evitar una mayor escalada del *apartheid* en los Territorios Palestinos Ocupados.

México

[Original: español]

[1 de noviembre de 2024]

La Misión Permanente de México ante la Oficina de las Naciones Unidas y otros Organismos Internacionales con sede en Ginebra saluda muy atentamente a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y tiene el honor de hacer referencia a la solicitud de comentarios contenida en su nota verbal del 16 de octubre de 2024, relativa a la implementación del párrafo operativo 14 de la resolución [ES-10/24](#) de la Asamblea General, específicamente sobre el establecimiento de un mecanismo para dar seguimiento a violaciones por el Estado de Israel al artículo 3 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.

Al respecto, la Misión Permanente se permite transmitir que México considera que se podrían plantear al menos dos opciones jurídicamente viables sobre la forma que podría adoptar dicho mecanismo:

1. Por un lado, se podría sugerir la adopción de una resolución del Consejo de Derechos Humanos que amplíe el mandato de la Relatora Especial sobre el Territorio Palestino Ocupado a fin de que dé el seguimiento solicitado por la resolución [ES-10/24](#) de la Asamblea General. Esta opción resulta viable y oportuna por las siguientes razones:

a) La Relatoría ha estado en funciones ininterrumpidamente desde su establecimiento en 1993 (resolución [1993/2](#) A “Cuestión de la violación de los derechos humanos en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina” de la Comisión de Derechos Humanos).

b) El trabajo de la Relatoría abarca el estudio de la situación de los derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados desde 1967 hasta la fecha. Este es el mismo período considerado por la Corte Internacional de Justicia en su opinión consultiva.

c) El mandato de la Relatoría incluye investigar las violaciones por parte de Israel a los principios y fundamentos del derecho internacional y al derecho internacional humanitario; recibir comunicaciones, escuchar testigos y utilizar las modalidades de procedimiento necesarias para su mandato; e informar

periódicamente al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General. En ese tenor, la Relatoría lleva a cabo visitas o misiones periódicas al Territorio Palestino Ocupado. Además, la persona titular es una experta independiente nombrada por el Consejo de Derechos Humanos y cuenta con el apoyo logístico y técnico de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

d) El Consejo de Derechos Humanos podría realizar solicitudes específicas a la Relatoría.

e) De ser el caso, la Relatoría podría coordinarse con los mecanismos especiales del mismo Consejo de Derechos Humanos existentes, incluyendo el Mecanismo Internacional de Expertos Independientes para Promover la Justicia y la Igualdad Raciales en el Mantenimiento del Orden.

f) La resolución para ampliar el mandato de la Relatora Especial podría adoptarse en la primera sesión del Consejo de Derechos Humanos de 2025 (posiblemente febrero).

2. Asimismo, se podría adoptar una resolución de la Asamblea General que mandate la creación de un Comité Especial contra el *Apartheid* para dar el seguimiento solicitado por la resolución [ES-10/24](#). Esta opción también resulta viable y oportuna por las siguientes razones:

a) El establecimiento de un Comité Especial permitiría elaborar un mandato a la medida, con la posibilidad de establecer sus funciones de manera muy particular y con las herramientas necesarias para llevar a cabo su propósito.

b) Como antecedente se señala el Comité Especial de Naciones Unidas contra el *Apartheid* en Sudáfrica, creado por la Asamblea General mediante la resolución [1761 \(XVII\)](#), de 6 de noviembre de 1962. Este Comité se integró por representantes de Estados Miembros de la Asamblea General, nominados por el Presidente de la Asamblea General. El Comité Especial tuvo el encargo de mantener en revisión las políticas raciales de Sudáfrica cuando la Asamblea General no estuviera en sesión, e informar a la Asamblea General o al Consejo de Seguridad, o a ambos, sobre la situación del *apartheid* en ese país. Su mandato concluyó en 1994.

Cabe señalar que México considera que la primera opción representa la alternativa más viable, ya que es un mecanismo existente que evitaría retrasos en la implementación de la resolución [ES-10/24](#) y reduciría el gasto adicional de recursos humanos y financieros. No obstante, ambas opciones pueden ser complementarias. Adicionalmente, no se descarta la posibilidad de que exista un mecanismo distinto más adecuado para implementar dicha resolución.

La Misión Permanente de México ante la Oficina de las Naciones Unidas y otros Organismos Internacionales con sede en Ginebra aprovecha la oportunidad para reiterar a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos las seguridades de su más atenta y distinguida consideración.

Pakistán en nombre de la Organización de Cooperación Islámica (excepto Albania)

[Original: inglés]
[6 de noviembre de 2024]

La Misión Permanente del Pakistán ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales en Ginebra, en su calidad de Coordinadora del Grupo de Derechos Humanos y Asuntos Humanitarios de la Organización de Cooperación Islámica (OCI), tiene el honor de referirse a las notas verbales de fechas 16 de octubre y 30 de octubre de 2024, relativas a la forma de un mecanismo de

seguimiento de las violaciones por Israel del artículo 3 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial que se observan en la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 19 de julio de 2024, conforme a lo que se indica en la resolución [ES-10/24](#) de la Asamblea General, de 18 de septiembre de 2024.

En nombre del Grupo de la OCI¹, la Misión Permanente tiene además el honor de presentar los siguientes principios y características principales de un mecanismo eficaz de las Naciones Unidas en la oficina del Secretario General de las Naciones Unidas con la capacidad necesaria para hacer un seguimiento de las violaciones por Israel del artículo 3 de la Convención:

- a) Abordar las violaciones por Israel del artículo 3 de la Convención y su *apartheid* como sistema llevado a cabo por toda la estructura del Estado y crimen de lesa humanidad y como componente fundamental del colonialismo de asentamiento, cuya imposición se realiza contra la totalidad del pueblo palestino y en toda la geografía palestina, lo que incluye de manera esencial a los refugiados palestinos;
- b) Abordar el *apartheid* de Israel con arreglo a la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la Represión y el Castigo del Crimen de *Apartheid* (Convención sobre el *Apartheid*) y otros instrumentos jurídicos pertinentes;
- c) Centrarse en medidas concretas y factibles para dismantelar el sistema de *apartheid* que sustenta las violaciones por Israel del artículo 3 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y hacer que los responsables y cómplices rindan cuentas, mediante la aplicación, entre otras, de las medidas siguientes:
 - i) Establecer un mecanismo transparente de investigación y seguimiento de las violaciones por Israel del artículo 3 de la Convención, que incluya bases de datos públicas y actualizadas periódicamente;
 - ii) Prestar asesoramiento para el cumplimiento de las obligaciones de terceros Estados en relación con las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para reprimir el crimen de *apartheid* contra el pueblo palestino (incluidas la no asistencia y el no reconocimiento);
 - iii) Prestar asesoramiento para el cumplimiento de las obligaciones de terceros Estados en relación con la aprobación de medidas legislativas, judiciales y administrativas para perseguir, enjuiciar y castigar conforme a su jurisdicción a las personas responsables o acusadas de los actos enumerados en el artículo II de la Convención sobre el *Apartheid*, con independencia de que tales personas residan en el territorio del Estado en que se han cometido los actos o sean nacionales de ese Estado o de algún otro Estado o sean personas apátridas;
 - iv) Solicitar y tramitar informes periódicos sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole que los Estados Miembros hayan adoptado para dar efecto a la resolución [ES-10/24](#) de la Asamblea General, de 18 de septiembre de 2024;
 - v) Proponer medidas lícitas y selectivas similares a las aplicadas al *apartheid* en Sudáfrica, para su aprobación por las Naciones Unidas, en particular un embargo militar amplio;
 - vi) Apoyar los esfuerzos de la sociedad civil para dismantelar y acabar con el *apartheid*, entre otras cosas garantizando que los Estados Miembros ofrezcan

¹ A excepción de Albania.

protección frente a represalias y medidas de represión por realizar esa labor y que los órganos pertinentes de las Naciones Unidas tengan debidamente en cuenta su trabajo.

Sudáfrica

[Original: inglés]
[6 de noviembre de 2024]

Véase la respuesta de Sudáfrica que figura en el anexo I.
